



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

54ª REUNIÓN — 15ª SESIÓN ORDINARIA

2/3 DE JULIO DE 1997

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
doctor CARLOS F. RUCKAUF,  
del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDUARDO MENEM,  
y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,  
doctor PEDRO G. VILLARROEL

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor DONALDO A. DIB  
y doctor RODOLFO N. ADEN

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÜNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
ALMIRÓN, Carlos H.  
AVELÍN, Alfredo  
BAUM, Daniel  
BAUZA, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRANDA, Ricardo A.  
BRAVO, Leopoldo  
CABANA, Fernando V.  
CAFIERO, Antonio F.  
CANTARERO, Emilio M.  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo J.  
GALVÁN, Raúl A.  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.  
MELGAREJO, Juan I.  
MENECHINI, Javier Reynaldo  
MENEM, Eduardo

MIRANDA, Julio  
OUDÍN, Ernesto R.  
OYARZÚN, Juan C.  
PARDO, Ángel F.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero  
QUINZIO, Bernardo P.  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SAEZ, José M.  
SALA, Osvaldo R.  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio D.  
VAQUIR, Omar M.  
VERNA, Carlos Alberto  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAVERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio A.

### AUSENTES, CON AVISO:

DE LA SOTA, José M.  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto M.

### EX COMISIÓN:

GENOUD, José

### POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

### POR SUSPENSIÓN:

ANGELOZ, Eduardo C.

## SUMARIO

## 1. Homenajes:

- I. Al **teniente general Juan Domingo Perón**. (Pág. 3460.)
- II. A la memoria de **Leandro N. Alem**. (Página 3467.)
- III. Al **oceanógrafo y ecologista francés Jacques Cousteau**. Consideración de un proyecto de declaración unificado. Se aprueba. (Pág. 3469.)

## 2. Asuntos entrados:

- I. **Comunicaciones de la Presidencia**. (Página 3470.)
- II. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba el Acuerdo entre la Argentina y el Paraguay para la Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional del Paraguay (P.E.-362/97). (Pág. 3470.)
- III. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba el Convenio entre la Argentina y Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (P.E.-363/97). (Página 3472.)
- IV. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre la Argentina y la República de Trinidad y Tobago (P.E.-364/97). (Pág. 3476.)
- V. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba el Acuerdo entre la Argentina y El Salvador para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (P.E.-365/97). (Pág. 3478.)
- VI. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo** por el que se aprueba la modificación de un artículo de la ley 24.265 respecto de las funciones de las defensorías oficiales en Salta y Jujuy (P.E.-366/97). (Pág. 3483.)
- VII. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación**. (Pág. 3483.)
- VIII. **Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados**. (Pág. 3484.)
- IX. **Comunicaciones de comisiones**. (Página 3484.)
- X. **Comunicaciones de señores senadores**. (Pág. 3484.)
- XI. **Comunicaciones oficiales**. (Pág. 3484.)
- XII. **Peticiones particulares**. (Pág. 3485.)

- XIII. **Proyecto de resolución del señor senador Avelín** por el que se solicitan informes sobre los niveles de gastos para defensa previstos en el presupuesto 1998 (S.-1.203/97). (Pág. 3485.)
- XIV. **Proyecto de resolución de los señores senadores Galyán y Quinzio** por el que se prorrogan las audiencias testimoniales en el juicio político seguido al doctor Carlos Jorge Branca (S.-1.204/97). (Página 3486.)
- XV. **Proyecto de resolución del señor senador Quinzio** por el que se clausura el período probatorio en el juicio político seguido al doctor Juan Carlos Vera Ocampo (S.-1.205/97). (Pág. 3487.)
- XVI. **Proyecto de comunicación del señor senador Tell** por el que se solicita un subsidio para la Parroquia San José de Perico, Jujuy (S.-1.206/97). (Pág. 3487.)
- XVII. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador** por el que se solicita un subsidio para el Centro de Residentes de Santa Catalina de San Salvador de Jujuy (S.-1.207/97). (Pág. 3487.)
- XVIII. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador** por el que se solicita un subsidio para la Federación Argentina de Enfermería (FAE) (S.-1.208/97). (Página 3488.)
- XIX. **Proyecto de comunicación de los señores senadores Maya y Alasino** por el que se solicitan informes sobre las conclusiones del sumario sobre fallas en el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo (S.-1.209/97). (Pág. 3488.)
- XX. **Proyecto de resolución del señor senador Storani** por el que se solicita se invite al ministro de Salud y Acción Social para que brinde informes sobre la situación del Instituto Nacional de Microbiología "Doctor Carlos G. Malbrán" (S.-1.212/97). (Pág. 3490.)
- XXI. **Proyecto de ley del señor senador Menem** sobre régimen legal sobre ética pública (S.-1.213/97). (Pág. 3490.)
- XXII. **Proyecto de ley del mismo señor senador** sobre Digesto Jurídico Argentino (S.-1.214/97). (Pág. 3494.)
- XXIII. **Proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray** por el que se solicitan informes sobre el establecimiento de un sistema de diferenciación de granos de soja modificados por transgeniería (S.-1.215/97). (Pág. 3497.)
- XXIV. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador** por el que se solicitan informes sobre la importación de soja proveniente de los Estados Unidos de América (S.-1.216/97). (Pág. 3498.)

ciclo El teatro de cámara de las provincias. (S.-1.270/97.) (Pág. 3543.)

**LXX.** Proyecto de resolución del señor senador Romero por el que se declara de interés educativo la realización del Certamen Nacional de la Olimpiada Informática Argentina. (S.-1.272/97.) (Pág. 3544.)

**LXXI.** Proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) la instrumentación de líneas especiales de créditos para la financiación de las PyMES. (S.-1.273/97.) (Pág. 3544.)

**LXXII.** Proyecto de declaración del señor senador León y otros señores senadores por el que se expresa preocupación por los violentos hechos represivos contra comunidades collas de Orán, Salta. (S.-1.274/97.) (Pág. 3545.)

**LXXIII.** Proyecto de declaración del señor senador Quinzio por el que se expresa pesar por el fallecimiento de Jacques Cousteau. (S.-1.275/97.) (Pág. 3546.)

**LXXIV.** Proyecto de declaración del señor senador Quinzio y otros señores senadores por el que se expresa satisfacción por la obtención de la medalla de oro en el VII Concurso Internacional de Ballet de Moscú, por el bailarín argentino Hernán Cornejo. (S.-1.276/97.) (Pág. 3547.)

**LXXV.** Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes sobre las declaraciones de un capellán de la Fuerza Aérea respecto de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. (S.-1.277/97.) (Pág. 3547.)

**LXXVI.** Proyecto de declaración del señor senador Ulloa por el que se expresa pesar por el fallecimiento de Jacques Cousteau. (S.-1.278/97.) (Pág. 3547.)

**LXXVII.** A solicitud del señor senador Melgarejo, se modifica el destino de un proyecto. (Pág. 3548.)

**3.** Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 3548.)

**4.** Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado inmediato superior del oficial jefe de la Fuerza Ejército, teniente coronel, Cuerpo Profesional, señor Horacio Julio Giménez (P.E.-285/97). Se aprueba. (Pág. 3549.)

**5.** Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción al grado inmediato superior del oficial jefe de la Fuerza

Ejército, teniente coronel, Cuerpo Profesional, señor Ramón Antonio Ferreyra (P.E.-285/97). Se aprueba. (Pág. 3550.)

**6.** Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Juicio Político en el proyecto de resolución por el que el Senado de la Nación se constituye en Tribunal, previo juramento de sus miembros para conocer del juicio político al señor juez titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, doctor Hernán Gustavo Bernasconi (S.-1.283/97). Se aprueba. (Pág. 3550.)

**7.** Juramento de señores senadores, secretarios y prosecretario en el Tribunal de Juicio Político al que se refiere el punto 6 de este sumario. (Pág. 3551.)

**8.** Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de los señores senadores Maya y Alasino por el que se transfiere a la provincia de Entre Ríos un inmueble ubicado en la ciudad de Gualeguaychú (S.-2.254/96). Se aprueba. (Pág. 3551.)

**9.** A moción del señor senador Branda se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley del que es autor por el que se dispone lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen de Eva Perón (S.-905/97). Se aprueba. (Pág. 3552.)

**10.** Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Pesca y de Presupuesto y Hacienda en dos proyectos de comunicación: uno, del señor senador Sala y otro del señor senador Melgarejo por los que se solicitan informes sobre la captura y explotación de recursos pesqueros, y acerca de una posible defraudación al fisco por la venta de calamares (S.-1.105 y 1.131/97). Se aprueba. (Pág. 3554.)

**11.** Consideración del dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de resolución del señor senador San Millán y otros señores senadores por el que se instituyen los premios "Senado de la Nación" a los campeones del "XV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal", a realizarse en Chicoana, Salta (S.-1.147/97). Se aprueba. (Pág. 3556.)

**12.** Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión por el que se establece un programa de desarrollo regional y generación de empleo a partir de la creación de un fondo fiduciario cuyo patrimonio estará integrado por las acciones del Banco Hipotecario Nacional S.A. (C.D.-41/97). Se aprueba. (Pág. 3557.)

**13.** Moción formulada por el señor senador Alasino para que el dictamen en las modificaciones introducidas

por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre la creación del Consejo de la Magistratura, vuelva a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda. (Pág. 3608.)

14. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Alasino. (Pág. 3610.)
15. Continúa la consideración del punto 13 de este sumario. (Pág. 3611.)
16. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Fernández de Kirchner. (Pág. 3613.)
17. Continúa la consideración del punto 13 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3614.)
18. Apéndice:
  - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3615.)
  - II. Inserciones. (Pág. 3616.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 46 del miércoles 2 de julio de 1997:

**Sr. Presidente.** — Queda abierta la sesión.

# I

## HOMENAJES

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Agúndez.** — Señor presidente: teniendo en cuenta que el 3 de julio se cumple un año más del fallecimiento de Leandro N. Alem, solicito que se le rinda un homenaje. En representación del bloque de la Unión Cívica Radical hará uso de la palabra el señor senador León.

**Sr. Presidente.** — Si hay asentimiento, luego del homenaje a Juan Domingo Perón y antes del previsto para Jacques Cousteau, se le rendirá uno a Leandro N. Alem.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Como hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.

# I

**Sr. Presidente.** — Corresponde comenzar con el homenaje al teniente general Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Gioja.** — Señor presidente: hace veintitrés años y un día exhalaba el último aliento un

hombre espectacular, el estadista argentino más notable de nuestro siglo. El 1º de julio de 1974 moría el general Perón, líder de las mayorías nacionales que en tres oportunidades obtuviera, en elecciones libérrimas, el supremo mandato de gobernar el país.

Su figura, lejos de hundirse en las sombras del pasado, crece ante la posteridad porque la devoción que supo ganarse del pueblo argentino —como todo amor— prevalece aun por sobre la muerte.

La historia de los pueblos del siglo XX ha sido pródiga en personalidades políticas decisivas y singulares conductores de masas. Pero uno de los pocos que perdura en la memoria colectiva al finalizar la centuria, conservando un impresionante liderazgo, es incuestionablemente el general Perón.

Este reconocimiento a sus cualidades políticas de excepción no es patrimonio exclusivo de quienes nos alistamos desde siempre en sus filas, tanto los que combatieron fieramente, como los que nunca se identificaron con su causa, hoy destacan y reconocen las facetas de su singular personalidad.

Hombre pueblo, hombre autoridad; en este cuerpo legislativo ocupan bancas dentro de nuestras filas tres generaciones políticas protagonistas junto a Perón de cruciales momentos históricos.

Los más consulares acompañaron al líder, siendo muy jóvenes, en el período de la transformación integral de la Argentina: la década del 46 al 55, que bajo la conducción del general Perón instauró el Estado social, comando de la industrialización, de la integración de la clase trabajadora al ser nacional, de la Argentina emancipada del estatuto del coloniaje y abanderada de la tercera posición, no alineándose en ninguno de los polos imperiales. Esa estructura de justicia y liberación exigía la refundación de la patria grande americana, proyecto entonces frustrado.

La segunda generación se solidarizó con el general Perón en la odisea resistente del destierro y la proscricción, tenaz lucha entablada por una democracia genuina, superadora de la inestabilidad, del desencuentro y de la intolerancia. Lucha que templó el ánimo y permitió una auto-crítica sobre los excesos cometidos y sobre la revalorización de las libertades públicas. Y, sobre todo, torció el rumbo de los sectores reaccionarios al tiempo que Perón, con su grandeza de espíritu, inoculó a nuestros compañeros el antidoto eficaz contra el resentimiento y el revanchismo.

en valorizar y cimentar la cultura, las costumbres gaucho-chescas en la práctica de destrezas criollas, como ser la jineteada, la sortija, el lanceo, enhebrar la aguja, el folclore, su música, su canto, su baile, así como también sus diversas manualidades de alfarería, textiles y sus comidas típicas.

Entre los días 18 al 20 de julio del corriente año, dentro del marco reseñado, se llevará a cabo el XV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, donde se prevé como promedio de concurrencia en cada una de sus jornadas alrededor de 6.000 personas, reflejo de la trascendencia y expectativas que despierta el antedicho Encuentro.

La Argentina tiene una impresionante variedad de alternativas turísticas. Estas no se agotan en sus bellezas naturales, en su flora, su fauna, etcétera, sino que incluye un acervo cultural anterior aun a la conquista hispánica.

Un mayor contacto con el mundo implica en este contexto un mayor interés por parte de los extranjeros en conocer lo que el habitante de este suelo ha hecho en el pasado y hace en la actualidad.

Esto es muy importante como estímulo a la preservación de nuestras tradiciones, ya que, aparte del placer de practicarlas y observarlas de que gozan los argentinos, constituye un atractivo para los extranjeros.

Las ferias y festivales folclóricos constituyen una forma de canalizar dicha práctica y favorecen la presencia turística tanto local como del exterior, ya que, durante las mismas, argentinos procedentes de todas las regiones del país exhiben su destreza tanto en domas, exposición de artesanías, creaciones autóctonas y bailes tradicionales, tales como el caso que nos ocupa.

Es por ello que solicito a mis pares acompañarme con su voto en la aprobación del presente proyecto, a fin de que se instituyan los premios antes mencionados solicitados por la meritoria entidad Escuadrón Gaucho Coronel Luis Burela.

*Julio A. San Millán. — Emilio M. Cantarero. — Roberto A. Ulloa.*

**Sr. Presidente.** — En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto de resolución que acaba de leerse.

—Asentimiento.

**Sr. Branda.** — Pido que se declare cerrada la conferencia.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Queda cerrada la conferencia.

3

VOTACION

**Sr. Presidente.** — Continúa la sesión.

Corresponde votar en general el dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de resolución en consideración.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

12

### CREACION DE UN FONDO FIDUCIARIO. BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

**Sr. Presidente.** — Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, en mayoría y minoría, en el proyecto de ley en revisión por el que se establece un programa de desarrollo regional y generación de empleo a partir de la creación de un fondo fiduciario, cuyo patrimonio estará integrado por las acciones del Banco Hipotecario S.A. (C.D.-41/97).

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuizi).** — (*Lee*)

#### Dictamen de las comisiones

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-41/97) estableciendo un programa de desarrollo regional y generación de empleo a partir de la creación de un fondo fiduciario, cuyo patrimonio estará integrado por las acciones del Banco Hipotecario S.A.; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

De conformidad con el artículo 122 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 1º de julio de 1997.

*Carlos A. Verna. — Augusto Alasino. — Juan C. Oyarzún. — Emilio M. Cantarero. — Enrique Martínez Almudevar. — Jorge R. Yoma. — Jorge A. Villaverde. — Julio A. San Millán. — José L. Gioja. — Horacio A. Zalaazar. — Bernardo P. Quinzio. — Carlos H. Almirón. — Julio C. Humada. — Jorge J. Massat. — Héctor M. Maya. — Ernesto R. Oudín. — César Mac Karthy. — Alberto M. Tell. — Riccardo A. Branda. — Ruggero Preto. — José O. Figueroa. — Pedro C. Maranguello. — Julio A. Miranda.*

## ANTECEDENTE

Buenos Aires, 14 de mayo de 1997.

*Al señor presidente del Honorable Senado.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

## LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y GENERACION DE EMPLEO

### CAPÍTULO I

#### *Naturaleza y objeto*

Artículo 1º — Establécese un programa de alcance nacional, cuyos objetivos básicos son:

- a) Generar la infraestructura económica y social necesaria y prioritaria para la integración territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial, a través de la financiación de obras públicas nacionales y provinciales que tiendan a mejorar la eficiencia de la producción nacional, la preservación del medio ambiente, el bienestar general y la utilización de mano de obra intensiva;
- b) Disminuir los desequilibrios socioeconómicos produciendo un alto impacto en los niveles de empleo y en la distribución del ingreso;
- c) Mejorar las oportunidades y condiciones de acceso a la vivienda en los sectores de ingresos medios y medios bajos de la población, con el desarrollo del mercado hipotecario y fomentando el ingreso al mismo de capitales nacionales e internacionales.

Art. 2º — Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 1º de la presente, se dispone la creación de un fondo fiduciario destinado a: financiar la realización de obras de infraestructura económica y social, contraer empréstitos para el cumplimiento de los fines previstos en el capítulo II de la presente ley, la creación en el ámbito del Banco Hipotecario Nacional de una reserva especial destinada a constituir una línea de créditos que financie hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de las viviendas, la capitalización del Banco de la Nación Argentina y la modificación de su Carta Orgánica.

### CAPÍTULO II

#### *Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional*

Art. 3º — Créase el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Art. 4º — El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, en adelante "el fondo", tendrá por

objeto asistir a las provincias y al Estado nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El fondo tendrá carácter extrapresupuestario.

Art. 5º — El fondo funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y su administración será ejercida por un consejo de administración compuesto por siete (7) miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dos de los cuales serán nominados por la asamblea de gobernadores del Consejo Federal de Inversiones, aplicándose igual procedimiento cuando se produzca vacancia o renovación de los mismos. La reglamentación determinará las incompatibilidades y requisitos de antecedentes e idoneidad que deberán satisfacer los miembros del consejo de administración...

Art. 6º — El fiduciario del fondo será el Banco de la Nación Argentina, quien administrará el fondo de acuerdo a las instrucciones otorgadas por el consejo de administración. El fiduciario podrá actuar por cuenta y orden de las jurisdicciones que lo soliciten.

Art. 7º — El patrimonio del fondo estará integrado por:

- a) Las acciones del Banco Hipotecario S.A. y el producido de su venta, con excepción de aquellas acciones que conserve el Estado nacional, de acuerdo a lo que dispone el capítulo III, a lo que determina el artículo 35 de esta ley, y las acciones destinadas al Programa de Propiedad Participada;
- b) Los recursos que le asignen el Estado nacional, las provincias y los organismos internacionales;
- c) El producido de los empréstitos que contraiga, los que podrán estar garantizados con los bienes que lo integran, y
- d) La renta y los frutos de sus activos, con excepción de lo previsto en el artículo 36 de la presente ley.

Art. 8º — El patrimonio del fondo se destinará a la financiación de obras de infraestructura económica y social, nacionales y provinciales.

Del total del patrimonio del fondo se deducirá la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000) que se aplicará a la constitución de una cartera de crédito adicional, reservada a la demanda de las provincias de menor densidad poblacional y menor desarrollo relativo. De los fondos resultantes, se destinarán cincuenta por ciento (50 %) a la financiación de proyectos propuestos por la Nación y el porcentaje restante a proyectos propuestos por las provincias.

A su vez, el financiamiento correspondiente a las provincias, se asignará conforme a los índices de los artículos 3º, incisos b) y c), y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme a las disposiciones vigentes.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional del año 1997, para incorporar los

recursos provenientes del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los gastos destinados a las obras no incluidas en dicho presupuesto.

Art. 9º.—Las operatorias que realice el fondo deberán ajustarse a las siguientes condiciones generales:

- a) Los cupos de participación constituirán créditos disponibles para la ejecución de las obras financiadas por el fondo dentro del marco determinado por la presente ley;
- b) Las jurisdicciones recibirán los fondos en forma inmediata y automática, conforme al avance de obras expedido por las mismas, sin perjuicio de los derechos del fondo a hacer valer las ulteriores responsabilidades que pudieren corresponder a cada jurisdicción;
- c) En cada jurisdicción los fondos recibidos integrarán una cuenta especial, la cual no formará parte del Fondo Unificado Nacional o provincial, ni de ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando total autonomía operativa y funcional;
- d) Forma parte de la presente el anexo I donde se discriminan con carácter indicativo los tipos de obras de infraestructura consideradas necesarias y prioritarias para la integración territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial a los fines de ser financiados por el fondo.

Art. 10.—Los recursos del fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines previstos en el artículo precedente podrán ser invertidos en títulos o valores públicos, tanto de origen nacional como provinciales, previamente calificados.

Art. 11.—Los términos y condiciones de los préstamos que otorgue el fondo deberán asegurar el cumplimiento de los fines previstos en esta ley, el recupero del capital y sus intereses. Las condiciones generales serán establecidas en el decreto reglamentario y la tasa de referencia será la tasa Libor. La tasa podrá ser reducida en aquellos proyectos que ocupen mano de obra intensiva.

Las provincias podrán adherir al fondo y celebrar convenios, en los que detallarán el listado y cronograma de ejecución de las obras a financiar total o parcialmente por el fondo.

Las transferencias de los créditos a las jurisdicciones se harán en forma automática para su administración delegada por las provincias, las que garantizarán con su coparticipación federal de impuestos el cumplimiento del plan de inversiones, el cronograma de obras, y la devolución de los créditos y sus intereses.

Art. 12.—Exímese al fondo y al fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, invitándose a las provincias a adherir con la eximición de sus impuestos que se establece en el presente artículo.

Art. 13.—Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Operaciones de Constitución, Aplicación

y Liquidación del Fondo Fiduciario, la que estará integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados de la Nación. Esta comisión producirá informes trimestrales y memoria anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 14.—En todo aquello que no se encuentre modificado por la presente será de aplicación lo dispuesto en la ley 24.441.

### CAPÍTULO III

#### *Privatización del Banco Hipotecario Nacional*

Art. 15.—Declárase al Banco Hipotecario Nacional "sujeto a privatización" en los términos de la ley 23.696.

Art. 16.—El Poder Ejecutivo nacional procederá a transformar al Banco Hipotecario Nacional en Banco Hipotecario S.A., quien continuará con los derechos y obligaciones de su predecesor, salvo lo expresamente derogado por la presente norma. No serán de aplicación las normas de la ley 11.867.

Art. 17.—El Banco Hipotecario S.A. deberá atender, en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional y por el plazo de diez (10) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, las siguientes actividades:

- a) Financiar la construcción y adquisición de viviendas en el país, por sí o a través de terceros, asegurando una armónica distribución regional del crédito, de modo tal de hacer accesible el mismo a los diversos sectores de la comunidad;
- b) Mantener líneas de crédito destinadas a la financiación de la construcción de viviendas en pequeñas localidades, destinando anualmente a estas operaciones no menos del diez por ciento (10 %) del total de créditos que otorgue para la construcción, debiendo contemplar una equitativa distribución geográfica;
- c) Preservar la constitución del fondo especial previsto en el artículo 13 de la ley 24.143 en los términos en él establecidos.

Para el cumplimiento de estas obligaciones, la sociedad podrá mantener en sus actuales términos y condiciones la actividad permitida al Banco Hipotecario Nacional por el artículo 24, inciso 1), de su Carta Orgánica, y por la ley 24.626.

Vencido el plazo establecido en el presente artículo, o con anterioridad si así lo dispusiera su directorio, deberá, para continuar con dicha actividad constituir o participar de una sociedad, sujeta a la legislación vigente en la materia, que tenga por objeto el otorgamiento de seguros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el estatuto de la sociedad, la obligación de cumplimiento de otras actividades que actualmente realiza el Banco Hipotecario Nacional. La sociedad mantendrá, por el plazo de diez (10) años, la denominación "Banco Hipotecario S.A.".

Art. 18. — El capital del Banco Hipotecario S.A. estará representado por acciones de las siguientes clases:

- a) Clase A: las acciones de propiedad del Estado nacional;
- b) Clase B: las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada a implementar, en las condiciones que determine la reglamentación. Estas acciones no podrán representar más del cinco por ciento (5 %) del capital social. Una vez pagado el precio de las mismas en el marco del Programa de Propiedad Participada, serán de libre transferencia. En el caso de producirse transferencias a titulares que no fuesen sujeto del programa referido, las acciones se convertirán automáticamente en acciones clase D;
- c) Clase C: las acciones destinadas a ser adquiridas inicialmente por personas jurídicas cuyo objeto fuera el desarrollo de actividades vinculadas a la construcción de viviendas o a la actividad inmobiliaria. Estas acciones no podrán representar más del cinco por ciento (5 %) del capital social y serán de libre transferencia. En el caso de producirse transferencias a titulares que no fuesen sujeto del programa referido, las acciones se convertirán automáticamente en acciones clase D;
- d) Clase D: las acciones transferidas en dominio perfecto al capital privado. Cada persona física o jurídica que pertenezca a un mismo grupo económico no podrá ser propietaria de más del cinco por ciento (5 %) del capital social.

Art. 19. — A los fines de cumplir con la privatización dispuesta en la presente ley, se procederá a la venta de las acciones destinadas a las clases C y D mediante su oferta pública en bolsa y mercados de valores nacionales e internacionales.

Art. 20. — Las acciones clase A se convertirán automáticamente en acciones clase C o D, según fuere el caso cuando su titularidad fuere transferida a adquirentes privados. El Estado nacional deberá conservar la propiedad de como mínimo una acción de clase A. La venta de las acciones del Banco Hipotecario S.A. estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional. Mientras las acciones del Banco Hipotecario Nacional, se encuentren integrando el patrimonio del Fondo Fiduciario, la totalidad de los derechos políticos emergentes de las mismas corresponderán al Estado nacional.

Art. 21. — El Estatuto del Banco Hipotecario S.A. deberá prever que:

- a) Las decisiones que a continuación se expresan, sólo podrán adoptarse con el voto afirmativo de las acciones, en poder del Estado nacional cualquiera fuera su participación:
  - I. La fusión y escisión de la sociedad.
  - II. La modificación del objeto social.
  - III. La transferencia del domicilio social al extranjero.

IV. La disolución de la sociedad;

- b) El derecho del Estado nacional a aprobar los estados contables anuales, mientras mantenga la mayoría del capital social;
- c) El derecho del Estado nacional, mientras conserve al menos una acción, de nombrar dos (2) directores y un (1) síndico;
- d) Cuando los accionistas de la clase D hayan adquirido la propiedad de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del capital de la sociedad, su asamblea podrá ejercer el derecho a elegir la mayoría de los integrantes del órgano de administración de la sociedad. Mientras que las acciones clase A representen más del cuarenta y dos por ciento (42 %) del capital social, los accionistas de clase D, tendrán tres (3) votos por acción;
- e) El derecho de la asamblea de accionistas de la clase C a elegir un (1) integrante del órgano de administración de la sociedad mientras esa clase represente más de un tres por ciento (3 %) del capital de la sociedad;
- f) El derecho de la asamblea de accionistas de la clase B a elegir un (1) integrante del órgano de administración de la sociedad, mientras esa clase represente más de dos por ciento (2 %) del capital de la sociedad.

Art. 22. — Al personal del Banco Hipotecario S.A. le serán de aplicación las normas que se encuentren vigentes de la convención colectiva de trabajo 18/75 y las normas que en el futuro la modifiquen.

Art. 23. — Al Banco Hipotecario S.A. no le será aplicable ninguna legislación administrativa, actual o futura, que reglamente la administración, gestión o control de las empresas en que el Estado nacional tenga participación. Mientras mantenga el Estado nacional la mayoría del capital social, le serán aplicables las disposiciones de control de la ley 24.156. La sociedad queda autorizada para actuar como banco comercial y estará sometida al régimen de la ley 21.526, sus modificatorias y complementarias. Su objeto social deberá contemplar fundamentalmente la atención de necesidades en materia de vivienda.

Art. 24. — El Estado nacional se reserva el dominio de:

- a) El inmueble en que se ubica la sede central del Banco Hipotecario Nacional sito en la calle Hipólito Yrigoyen 340, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- b) Los inmuebles comprendidos en el convenio suscrito el 1º de julio de 1993 entre el Banco Hipotecario Nacional y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como asimismo los derechos y obligaciones que surgen del citado convenio;
- c) Los inmuebles afectados al Programa Arraigo;
- d) Las acciones representativas del capital del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., de propiedad del Banco Hipotecario Nacional;



- c) Los créditos del Banco Hipotecario Nacional contra el ex Banco Nacional de Desarrollo.

Las transferencias previstas en este artículo, así como todas las que fueren necesarias para la determinación del patrimonio del Banco Hipotecario S.A. por parte del Poder Ejecutivo nacional estarán exentas del pago de cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución en el orden nacional. El Estado nacional se hará cargo del pago de cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que fuere aplicable a ella en el orden provincial o municipal.

Art. 25. — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá:

- a) Los términos, condiciones y oportunidad de la venta de las acciones al capital privado, la que deberá evitar que un adquirente alcance una porción dominante del Banco Hipotecario S.A., que pueda resultar perjudicial para el interés general. La venta podrá realizarse en una o más operaciones y, en cada una de ellas, podrán fijarse porcentajes máximos para ser adquiridos por inversores. Un porcentaje del capital deberá reservarse para ser adquirido por personas físicas con domicilio en el país;
- b) Los activos y pasivos que asumirá el Estado nacional a fin de facilitar la transferencia. Si el Estado nacional asumiera cartera crediticia, respecto de ésta gozará de las facultades y privilegios contemplados en el capítulo VIII de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional;
- c) La atención del Fondo de Complemento Móvil del Banco Hipotecario Nacional y los derechos y obligaciones que de éste surjan.

Art. 26. — Transfírase al "Fondo" la deuda que el Banco Hipotecario Nacional tiene con el Banco Central de la República Argentina. Las condiciones de la transferencia serán determinadas por el Poder Ejecutivo nacional en términos similares a las vigentes para dicho crédito.

Art. 27. — Por un monto equivalente a la deuda transferida conforme el artículo anterior, con más los montos generados por los instrumentos financieros derivados de su aplicación, el Banco Hipotecario S.A. deberá constituir una reserva especial destinada a la instrumentación de una línea de créditos individuales para la adquisición o construcción de nuevas viviendas que sean financiadas por importes que alcancen hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su respectivo valor, a la restructuración de su cartera minorista y al cumplimiento de los requerimientos técnicos del Banco Central de la República Argentina.

Art. 28. — Derógase la ley 24.143, con excepción de las obligaciones y de las exenciones contenidas en los siguientes artículos:

- a) El artículo 3º, hasta la fecha de la constitución de la sociedad Banco Hipotecario S.A. continuando vigente para las operaciones de crédito concretadas hasta ese momento;

- b) El artículo 13 y el artículo 17, los que continuarán vigentes para las operaciones realizadas y las que se realicen en el Banco Hipotecario S.A. y el Banco de la Nación Argentina dentro del plazo de diez (10) años a partir de la vigencia de esta ley.

Derógase la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, según texto ordenado por decreto 540 del 26 de marzo de 1993, con excepción de las facultades y privilegios contenidos en los artículos 24 inciso 1), 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47 a 49; 51, 54 y 56, los que continuarán vigentes para las operaciones concretadas y que se concreten dentro del plazo de diez (10) años a partir de la vigencia de esta ley.

Art. 29. — Deróganse todas las disposiciones que ordenen al Banco Hipotecario Nacional avalar o afianzar obligaciones.

Art. 30. — La administración del Banco Hipotecario S.A. se registrará de acuerdo a lo normado en el capítulo IV de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional hasta la aprobación del estatuto de la sociedad.

Art. 31. — La comisión bicameral creada por el artículo 13 deberá verificar que las transferencias accionarias cumplan con lo previsto en esta ley y subsidiariamente con lo prescripto en la ley 23.696.

Art. 32. — La Sindicatura General de la Nación realizará la tasación del Banco Hipotecario Nacional prevista en el artículo 19 de la ley 23.696, pudiendo a tal efecto recurrir al asesoramiento profesional y técnico nacional o extranjero de reconocida trayectoria. Los gastos que demande la presente tasación estarán a cargo del Banco Hipotecario S.A.

#### CAPÍTULO IV

##### *Banco de la Nación Argentina*

Art. 33. — Incorpórase en el artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina (ley 21.799, y sus modificatorias) el siguiente inciso:

- h) Otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas.

Art. 34. — El Banco de la Nación Argentina creará un área de crédito hipotecario destinado a operar un programa especial para el financiamiento de la vivienda familiar única. El Banco concentrará su operatoria al financiamiento de viviendas populares.

Art. 35. — Como aporte de capital al Banco de la Nación Argentina para generar la cartera de créditos habilitados por el inciso h) del artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, reformado por el artículo 33 de esta ley, se transferirán cien millones de pesos (\$ 100.000.000) del producido de la venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional, y la renta neta de los bienes que integran el fondo, hasta alcanzar en total la suma de doscientos millones de pesos (\$ 200.000.000).

El aporte de capital dispuesto en este artículo más los instrumentos financieros derivados del incremento del

patrimonio neto del Banco de la Nación Argentina, serán aplicados a los fines dispuestos en los artículos 33 y 34 de esta ley.

Art. 36. — El diez por ciento (10 %) de los intereses que generen los recursos del fondo, se capitalizarán en una cuenta especial del Banco de la Nación Argentina para la atención de un fondo de garantías de créditos para viviendas únicas, permanentes y no sujeción destinadas a personas de ingresos bajos y medios bajos, pudiendo aplicarse también como subsidios a las tasas de interés de créditos para las viviendas populares destinadas a los sectores de bajos ingresos.

Art. 37. — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a utilizar las acciones del Banco Hipotecario S.A.: hasta tanto sean colocadas conforme se establece en la presente ley, como garantía de las operaciones financieras, que efectúe el Estado nacional o el fondo, cuyo único destino sea la integración del patrimonio del fondo.

### CAPÍTULO V

#### Disposiciones complementarias

Art. 38. — A partir de la sanción de la presente ley, los beneficiarios de los préstamos individuales provenientes de las operatorias globales HN 700 (Reactivación variante II), HN 670, HE 311, sus suboperatorias derivadas, sus iguales o equivalentes, originados con anterioridad al 1º-4-91, tendrán derecho a requerir el recálculo de deuda a la fecha de la sanción de esta ley, a fin de que el mismo no supere el valor venal de la vivienda financiada por el Banco Hipotecario Nacional y de acuerdo al siguiente procedimiento:

- a) El valor venal de la vivienda será determinado por el Banco Hipotecario S.A., y en caso de corresponder, se detraerá de dicho valor, el correspondiente a ampliaciones y mejoras incorporadas a la vivienda originalmente financiada y realizadas a costa del beneficiario del crédito, como también el del terreno, si hubiere sido aportado por el mismo;
- b) Al nuevo valor así determinado se le deducirán las amortizaciones y otros aportes ya efectuados por los adjudicatarios y, en su caso, se le adicionarán los intereses derivados de refinanciamientos por mora y de solicitudes de adecuaciones de cuota;
- c) Los nuevos saldos de deuda emergentes del recálculo establecido en la presente ley, serán cancelados con la aplicación de una tasa de interés que no podrá ser superior al nueve por ciento (9 %) anual;
- d) Ante discrepancias debidamente fundadas de la determinación del valor venal de la vivienda, el beneficiario del préstamo cuya deuda sea motivo del recálculo autorizado en este artículo, podrá requerir al Banco Hipotecario S.A. una nueva determinación, pudiendo solicitar que la misma sea realizada por el Banco de la Nación Argentina y/o los colegios profesionales vinculados a la construcción en cada jurisdicción en un plazo que resulte no mayor a sesenta (60) días;

- e) El Banco Hipotecario S.A. implementará un régimen de cancelación anticipada de los préstamos hipotecarios. El monto a cancelar será equivalente, a lo adeudado en concepto de capital al momento de la cancelación;

Asimismo, podrá implementar, mediante resolución fundada, un régimen de bonificación especial sobre los créditos otorgados con anterioridad a la sanción de la presente ley;

- f) La tasa de interés punitorio que el Banco Hipotecario S.A. aplique a los créditos hipotecarios contemplados en esta ley, no será mayor a la tasa de referencia establecida en el inciso c) de este artículo. Los intereses punitivos se aplicarán sobre el capital adeudado;
- g) Los gastos administrativos, los de escritura traslativa de dominio, los de escritura de constitución de hipoteca, y por todo otro concepto, originados por operaciones anteriores al 1º-4-1991, no podrán superar, a partir de la vigencia de la presente ley, el cuatro por ciento (4 %) del saldo del recálculo establecido en este artículo.

Art. 39. — Realizados los procedimientos contemplados en el artículo anterior, facúltase al Banco Hipotecario S.A., a adecuar las cuotas y los plazos resultante, a efectos de que la cuota mensual por todo concepto, no exceda el veinticinco por ciento (25 %) de los ingresos del grupo familiar.

Art. 40. — El valor de las primas de seguros de incendio y de vida, no deberán exceder a los valores de mercado ni ser calculadas sobre un monto superior al del valor del bien asegurado o del saldo de la deuda, en cada caso.

Art. 41. — Los beneficiarios de los préstamos globales, tendrán un plazo de ciento veinte (120) días una vez notificados los derechos concedidos en esta ley a partir de la sanción de la misma, para realizar la presentación a que se refiere el artículo 38. Asimismo, el Banco Hipotecario S.A. dispondrá de igual término para resolver la determinación solicitada.

Art. 42. — Los beneficiarios de los préstamos individuales comprendidos en las operatorias del artículo 38 de la presente ley, podrán solicitar al Banco Hipotecario S.A. la puesta al cobro de la tasa de interés de referencia establecida para el préstamo en sustitución de la capitalización vigente, manteniendo las demás condiciones del préstamo.

Art. 43. — Facúltase al Banco Hipotecario S.A. a aplicar esta ley, mediante resolución fundada, a otras operatorias no contempladas en la presente.

Art. 44. — El Banco Hipotecario S.A. suspenderá por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta ley las intimaciones de escrituras y las ejecuciones de propiedades adquiridas como única vivienda con créditos otorgados bajo las operatorias contempladas en el artículo 38 y a los efectos de esta ley.

Art. 45. — El Poder Ejecutivo garantizará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación de re-

curso para la financiación de proyectos propuestos por dicha jurisdicción en un porcentaje no inferior al seis por ciento (6 %) de la masa de recursos que le correspondiere a la Nación conforme al artículo 89 de esta ley.

Art. 46. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.  
*Esther H. Pereyra Arandía*  
*de Pérez Pardo.*

— A las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Economía y para conocimiento de la comisión ley 23.696.

## ANEXO I

Listado indicativo del tipo de obras a ejecutar prioritariamente con recursos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

— Redes viales que vinculen las zonas de producción con la red troncal o hacia los países integrantes del Mercosur. También las que vinculen puntos de importancia turística nacional o internacional.

— Obras viales en los corredores de interconexión bioceánica. Pasos fronterizos de vinculación con países limítrofes.

— Construcción o mejora de instalaciones portuarias que tengan por objeto la modernización del sistema, aumentar la capacidad de transporte marítimo o fluvial y reducir costos operativos.

— Construcción o mejora de la infraestructura hídrica. Obras de infraestructura para el control de inundaciones; presas hidráulicas con o sin generación de energía eléctrica.

— Construcción o mejora de la infraestructura vial provincial (incluyendo las obras de arte necesarias); vías de comunicación rápida (autopistas); puentes carreteros, ferroviarios o de uso mixto de vinculación entre ciudades, regiones o de conexión internacional.

— Obras de generación y transporte de energía eléctrica. Provisión de energía eléctrica a zonas rurales.

— Obras destinadas a facilitar la explotación de los recursos mineros, vías de acceso y conexión con la red vial o ferroviaria.

— Construcción de acueductos. Construcción o mejora de los sistemas de riego y drenaje.

— Obras de infraestructura básica que tengan como objetivo evitar incendios en bosques, montes o pastizales.

— Construcción, mejoramiento o adecuación de la infraestructura ferroviaria.

— Obras que contemplen la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y sanitaria.

— Obras de infraestructura para saneamiento urbano (provisión de agua potable, desagües cloacales o pluviales).

— Obras de infraestructura que posibiliten la radiación de importantes emprendimientos industriales.

## Dictamen de comisión en minoría

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, Vivienda, Asuntos Administrativos y Municipales, Economía, Trabajo y Previsión Social, y Emergencia Administrativa en minoría han considerado el proyecto de ley venido en revisión C.D.-41/97 y por las razones que dará el miembro informante se aconseja el total rechazo del proyecto de ley.

*José Genoud. — Leopoldo R. G. Moreau.*  
*— Jorge A. Agúndez. — Antonio T. Ber-*  
*hongaray. — Javier R. Meneghini. —*  
*Alcides H. López. — Alberto Maglietti. —*  
*Juan L. Melgarejo. — Horacio Massac-*  
*cesi. — José M. Sáez. — Humberto E.*  
*Salum. — Raúl A. Galván. — Mario A.*  
*Losada. — Luis A. León*

## ANEXO

Buenos Aires, 1 de julio de 1997.

*Señor presidente del Honorable Senado de la Nación,*  
*doctor Carlos F. Ruckauf*

Presente

Ref.: Expediente N° C.D.: 41/97

Señor presidente:

Me dirijo a usted a los efectos de observar, en el tiempo y forma previstos por el artículo 115 del Reglamento de este Honorable Senado de la Nación el orden del día correspondiente al expediente C.D.-41/97 relativo a la creación de un Fondo Fiduciario integrado por las acciones del Banco Hipotecario Nacional que se destinará a financiar un programa de desarrollo regional y de generación de empleo.

Fundo esta observación en disidencia total con el contenido del proyecto por cuanto considero que las finalidades que se enuncian como sustento y razón de la propuesta simplemente constituyen una pantalla que oculta el verdadero fundamento de ella y que no es otro que la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

Esto se pone claramente de relieve en el artículo 7° inc. a) en conjunción con lo proyectado en el artículo 35 que dispone asignar al Banco de la Nación Argentina un capital adicional de \$ 100 millones para la creación de un área de crédito hipotecario.

Desearé destacar que tan pronto tomó difusión hace casi un año la decisión del gobierno nacional de encarar la privatización del Banco Hipotecario Nacional, hice pública mi opinión en contra de tal medida, señalando las deficiencias y falacias que aquella encerraba.

En aquella ocasión observé que si el objetivo a cumplir era la creación de 1.000.000 de empleos que se generarían a partir de la aplicación a obras públicas del producido de la venta, encerraba la contradicción de que no hay actividad generadora de mayor cantidad de trabajo que la construcción y que ello quedó evidenciado a partir del saneamiento de la administración del centenario banco.

En efecto, cabe recordar que el Banco Hipotecario Nacional fue creado en el año 1886, por el gobierno del general Julio Argentino Roca, máxima figura del Partido Autonomista y tuvo un desarrollo progresivo que llevó su cartera hipotecaria a fines de la década del 20 a un importe cercano al 20% del producto bruto interno. Aquel crecimiento fue posible merced a la utilización de un instrumento financiero importantísimo como lo fue la Cédula Hipotecaria que a la vez que acordaba una razonable renta fija a los inversores con garantía real permitía otorgar los créditos a una tasa no superior al 6% anual, propia de un país con moneda estable como la que actualmente circula en nuestro país, aun cuando las tasas para el crédito dupliquen las de entonces.

Por otra parte ha sido una constante hasta el presente que ninguna de las privatizaciones realizadas se constituyó en generadora de empleo; antes bien, en la mayoría de los casos la expulsión de la mano de obra se realizó despiadadamente generando las situaciones que hoy han hecho estallido, como ocurrió con las ciudades de Cutral-Có en la provincia del Neuquén, en Tartagal, en la provincia de Salta y en la de San Pedro en la provincia de Jujuy. También lo sucedido en Cruz del Eje en la provincia de Córdoba es resultado de estas políticas.

Nada lleva a pensar que sucederá lo contrario. Asimismo, parecen haber quedado en meras expectativas las cifras originales que se presentaron como justificatorias de la privatización en función de las inversiones en obras públicas que se harían. Así, los montos primitivos se enunciaran alegremente en el orden de los 3.000 millones de pesos, cifra que fue decayendo ostensiblemente a medida que avanzaba la posibilidad de alcanzar efectivamente la venta de las acciones.

Pero tan pronto comenzó a tomar visos de realidad esta operación, comenzaron a descender las estimaciones, desconociéndose actualmente su valor de realización que habrá caído a la par que el descenso en las tasas de interés producido a raíz de la nueva ola crediticia hipotecaria. Añádese que las restricciones al valor de los créditos actualizados, sin duda, razonables, que establece el artículo 38 del proyecto, para concluir que difícilmente se obtenga aquel importe primeramente estimado.

Por otra parte, profundas dudas me genera la redacción del artículo relativo al funcionamiento futuro del fondo fiduciario a crearse. La forma de nominación de su consejo de administración lleva a la ineludible conclusión de que sólo tendrán acceso a dicho fondo quienes gocen del favor oficial.

La lamentable experiencia que hemos vivido los habitantes de las provincias que no contaban con tales favores en relación al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, donde 1.250 millones se distribuyeron entre 12 provincias y una de ellas absorbió el 20% nos lleva a no creer en futuras ecuanimidades.

Por otra parte, la asignación de carácter extrapresupuestario al fondo a crearse, constituye a mi juicio una grave violación de las normas constitucionales y de las leyes vigentes, particularmente en cuanto supone un apartamiento del artículo 75, inciso 8° de la Constitución Nacional, provoca la ruptura de la unidad presupuestaria y soslaya las normas nacionales de administración financiera y de inversión pública.

Por estas razones expresadas brevemente y que serán ampliadas en el recinto, fundo mi disidencia total con este proyecto.

*José A. Romero Feris:*

**Sr. Presidente.** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por La Pampa, del Partido Justicialista.

**Sr. Verna.** — Señor presidente, señores senadores: tenemos en consideración un proyecto de ley sancionado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyas disposiciones de diverso carácter tienen como hilo conductor la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

La idea rectora del proyecto ha sido hacer de esta privatización un caso diferente de las anteriores realizadas por este gobierno; principalmente, en lo que hace al destino de los recursos y al cuidado en preservar las funciones tradicionales del banco en el campo del crédito hipotecario para la vivienda de los sectores populares.

En particular, el destino a dar a los recursos originados en la privatización ha producido largas polémicas dentro y fuera del oficialismo. Pero finalmente ha prevalecido el propósito de atender prioridades reconocidas por todos, que se refieren al desarrollo de las economías regionales en concomitancia con la generación de empleo, con procedimientos que permitan conservar la integridad de tales recursos a lo largo del tiempo.

No nos cabe dudas, señor presidente, acerca de que las polémicas y discrepancias referidas al presente proyecto nacen del significado histórico del Banco Hipotecario Nacional, institución de larga trayectoria, ya que fue creado por la ley 1.804 en 1886 y que, por más de un siglo, se constituyó en el principal impulsor del acceso a la vivienda propia para un amplio sector de la población, además de ser el generador de un legendario instrumento de ahorro popular, como fue la cédula hipotecaria.

Sin embargo, también durante largos períodos, su rol se vio drásticamente reducido hasta pasar desapercibido por causa de la inestabilidad económica, principalmente a través de uno de sus mayores efectos —la inflación—, que desarticuló tanto la posibilidad de captar fondos para el financiamiento como su recupero real para realimentar el sistema. Asimismo, la inflación destrozó la capacidad de pago de los deudores cuando se instauraron los sistemas de indexación.

La estabilidad económica de estos años permitió al Banco Hipotecario recuperar su función clásica, operando en esta última etapa como banco mayorista; esto es, como proveedor del financiamiento que se encauza a través de las instituciones del sistema financiero que operan directamente con el público.

Sin duda, esta historia toca el sentido afectivo de todos nosotros y también, naturalmente, de quienes impulsamos este proyecto de ley que estamos considerando.

Por esta razón se ha tenido cuidado en los aspectos sustanciales que a todos nos preocupan y que pueden sintetizarse en los siguientes puntos: preservar el rol del banco como rector del mercado del crédito hipotecario para el financiamiento, asegurar el destino de los recursos producidos por la privatización hacia fines de contenido económico-social, con alto impacto en las economías regionales; y, finalmente, resguardar el capital humano que constituye uno de los principales caudales de la institución.

Estas diversas cuestiones determinaron la configuración del proyecto de ley que, en definitiva, sancionó la Cámara de Diputados con una estructura de 45 artículos, agrupados en 5 capítulos.

El capítulo I, titulado "Naturaleza y objeto", con su contenido programático, expresa claramente la intención de encuadrar la privatización del Banco Hipotecario en un marco más amplio que el de la privatización de un activo público, de forma de dar a esta operación un carácter trascendente que exceda el simple contenido económico de proveer al Tesoro de un recurso más.

Tal como surge con claridad de los artículos 1º y 2º que constituyen este capítulo, el conjunto del proyecto forma un programa de alcance nacional dirigido a producir efectos en el campo económico y social por vía de obras de infraestructura, con especial atención a su repercusión en el desarrollo regional en los niveles de empleo y en el acceso a la vivienda propia para los sectores de medios y bajos recursos de la población.

Estas disposiciones también anticipan que el instrumento básico para la consecución de tales propósitos es la institución de un fondo fiduciario complementado por la creación de una reserva especial en el Banco Hipotecario y la capitalización del Banco de la Nación Argentina a efectos de asignar los fondos a una línea de crédito especial para la financiación de la vivienda familiar única.

El capítulo II lleva como título "Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional" y abarca los artículos 3º a 14.

El capítulo III instituye el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, en tanto que el artículo 4º determina, como objeto del fondo, la financiación de obras de infraestructura económica y social, las que a modo indicativo, según el inciso d) del artículo 9º, se ejemplifican en una planilla anexa.

Asimismo, el artículo 3º especifica que el fondo tendrá carácter extrapresupuestario.

Personalmente, considero que esta mención es innecesaria porque va de suyo que debe ser así, ya que operará fuera del ámbito administrativo, en manos del agente fiduciario que será el Banco de la Nación Argentina, tal como lo determina el mismo proyecto de ley en el artículo 6º; y es el banco el que deberá instrumentar un sistema de registro y control apto para rendir cuenta de su responsabilidad como gestor.

Lo que no puede quedar al margen del presupuesto y tampoco es necesario que se especifique en la ley, es la figuración del producido de la privatización como un recurso del Tesoro y, luego, la entrega de los activos por parte del Tesoro al fondo en concepto de inversión financiera.

Todo ello, y también sin necesidad de que la ley lo diga, queda sometido al régimen general de control establecido en la ley de administración financiera.

El artículo 5º, tal vez con una redacción no del todo precisa o feliz, coloca la responsabilidad de la aplicación del fondo en la Jefatura de Gabinete, incorporando un Consejo de Administración compuesto de siete, miembros designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de dicha Jefatura, de los cuales, dos lo serán a propuesta de la Asamblea de Gobernadores del Consejo Federal de Inversiones.

Este Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º, impartirá las instrucciones a las que deberá ajustarse el Banco de la Nación.

El artículo 7º enumera los recursos que integrarán el fondo, que consisten en: las acciones del Banco Hipotecario Sociedad Anónima y el producido de su venta, exceptuadas las de propiedad del Estado y las de propiedad participada; los recursos que le asignen el Estado nacional, las provincias y los organismos internacionales; el producido de los empréstitos que contraiga el fondo; con lo cual debe entenderse que será el Estado nacional quien actúe como parte contratante en tales empréstitos,

dada la falta de personería del fondo; y la renta y los frutos de los activos del fondo, excepto el 10 por ciento de los intereses ganados que, según el artículo 36, se capitalizarán en una cuenta especial en el Banco de la Nación para la formación de un fondo de garantía de créditos para viviendas únicas, permanentes y no suntuarias, destinadas a personas de ingresos medios y bajos, y para subsidios de tasas de interés de créditos para viviendas populares.

Asimismo, según el artículo 8º, del patrimonio del fondo se deducirán 100 millones de pesos que se reservan para la demanda de las provincias de menor densidad de población y menor desarrollo relativo.

Igualmente, en dicho artículo se dispone que los recursos se destinarán por mitades al financiamiento de proyectos propuestos por la Nación, por una parte, y por las provincias, por la otra, efectuándose la distribución del financiamiento entre las provincias según los índices utilizados en el régimen de coparticipación federal de impuestos actualmente vigente, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es decir que la distribución se hace según lo indican los artículos 3º, incisos b) y c), y 4º de la ley 23.548.

El mismo artículo 8º, en su último párrafo, faculta al jefe de Gabinete para disponer las reestructuraciones del presupuesto para el corriente año necesarias para incorporar los recursos y gastos derivados de la ejecución de los proyectos que correspondan al Estado nacional.

Los artículos 9º, 10 y 11 establecen las condiciones a que deberá ajustarse la operatoria del fondo y el otorgamiento de la financiación. Al respecto cabe destacar que, según el último párrafo del artículo 11, las provincias deberán garantizar con su participación en el régimen de coparticipación el cumplimiento del plan de inversiones, el cronograma de obras y la devolución del crédito y sus intereses.

El artículo 12 establece la exención de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, existentes o a crearse en el futuro para las operaciones relativas al fondo, invitando a las provincias a adoptar igual temperamento.

A través del artículo 13 se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de las operaciones de constitución, aplicación y liquidación del fondo fiduciario, integrada por cinco senadores y cinco diputados de la Nación, que producirá informes trimestrales y una memoria anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación.

Siguiendo con el análisis del proyecto me referiré al Capítulo III, titulado "Privatización del Banco Hipotecario Nacional", que comprende los artículos 15 al 32. Por el artículo 15 se declara al Banco Hipotecario Nacional sujeto a privatización en los términos de la ley número 23.696, de reforma del Estado. Para este propósito, siguiendo el texto del artículo 16, el Poder Ejecutivo deberá transformar el Banco Hipotecario Nacional en una sociedad anónima con el nombre de Banco Hipotecario Sociedad Anónima, que será continuadora del actual, tanto en los derechos como en las obligaciones.

A través del artículo 17 se procura asegurar a lo largo del tiempo la continuidad de las funciones históricas del banco, con amplia repercusión social, referidas al financiamiento de construcción y adquisición de viviendas, promoviendo una armónica distribución regional del crédito y la accesibilidad al mismo para los diversos sectores de la comunidad.

Para preservar el cumplimiento de estos fines el Estado deberá poseer siempre, por lo menos, una acción, para que por vía de lo previsto en el artículo 21, incisos a), b) y c) del proyecto que consideramos, el manejo de la sociedad no pueda desviarse de los objetivos previstos en el proyecto.

El artículo 18 establece la composición del capital de la futura sociedad anónima, instituyendo diversas clases de acciones según la distinta calidad de los accionistas. Así, la clase A está reservada para el Estado; la clase B se integrará con las acciones correspondientes al programa de propiedad participada, sujeto a la reglamentación. No excederán del cinco por ciento del capital social y serán de libre transferencia una vez pagadas. Las acciones de clase C se ofrecerán a personas jurídicas que tengan por objeto el desarrollo de actividades vinculadas con la construcción de las viviendas o con la actividad inmobiliaria. Pueden llegar hasta el cinco por ciento del capital social y son también de libre transferencia. La clase D corresponderá a las acciones que se transfieran al capital privado, y su propiedad deberá estar fraccionada ya que una persona física o jurídica que pertenezca a un mismo grupo económico no podrá poseer más del cinco por ciento del capital social.

Las acciones de clase A, en caso de transferencia, se convertirán automáticamente en acciones de clase C o D, y las de clase B y C, en igual caso, se convertirán automáticamente en acciones de clase D.

Como queda dicho, el Estado nacional deberá poseer siempre una acción, como mínimo.

Conforme con el inciso *d*) del artículo 21, cuando los accionistas de la clase D superen el 25 por ciento del capital social, tendrán el derecho de elegir a la mayoría de los miembros del directorio y, en tanto el Estado mantenga más del 42 por ciento del capital social, las acciones de la clase D tendrán tres votos por acción.

A su vez, mientras los accionistas de la Clase B representen más del dos por ciento del capital social, tendrán derecho a elegir un miembro del directorio, al igual que los accionistas de la Clase C, en tanto representen éstos más del tres por ciento de dicho capital.

Las acciones, tanto de Clase D como de Clase C, se colocarán mediante oferta pública en bolsas y mercados de valores nacionales e internacionales.

El mismo artículo 21 establece que el Estado deberá siempre dar su voto afirmativo para la fusión o escisión de la sociedad, para la modificación del objeto social, para la transferencia del domicilio social al extranjero o para la disolución de la sociedad.

En el artículo 22 se resguarda el derecho actual de los empleados del banco a su participación en el fondo complementario móvil, contenido en el convenio colectivo de trabajo número 18/75.

Seguidamente, y tal como lo dispone el artículo 24, se excluyen del activo del patrimonio del banco sujeto a privatización: el inmueble donde el banco actualmente radica su sede central, los inmuebles incluidos en el convenio suscripto entre el Banco Hipotecario y la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los inmuebles afectados al Programa Arraigo, las acciones del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y los créditos contra el ex Banco Nacional de Desarrollo.

Otra exclusión importante, pero esta vez situada en el pasivo, es tratada en los artículos 26 y 27, los cuales deben ser considerados complementarios.

En el artículo 26 se excluye una deuda del Banco Hipotecario con el Banco Central, y se la transfiere al fondo fiduciario que ya he comentado. Esta deuda, que es de 526 millones, ha sido refinanciada por el Banco Central con un plazo de veinte años y una tasa del 2 por ciento anual.

A su vez, el artículo 27 obliga al futuro Banco Hipotecario Sociedad Anónima a constituir, por el equivalente al monto de la deuda transferida con más los frutos posteriores originados en su aplicación, una reserva especial destinada a fi-

nanciar la construcción y adquisición de viviendas nuevas en hasta el 95 por ciento de su valor.

Señor presidente: con esto se contempla la situación de quienes se encuentran pagando un alquiler y no tienen capacidad de ahorro para afrontar el 30 o 40 por ciento que hoy se requiere para complementar el crédito para la adquisición de una vivienda y que, según se estima, constituyen un tercio de los aspirantes. Asimismo, esto puede contribuir a un aumento de la actividad, en un ramo que emplea mano de obra en forma intensiva.

La reserva especial será utilizada también para la reestructuración de la cartera minorista y el cumplimiento de los requerimientos técnicos que impone el Banco Central.

El artículo 28, continuando con el análisis del proyecto, deroga la ley 24.143, que dispuso la reestructuración y saneamiento del Banco Hipotecario y, en lo sustancial, convirtió a la entidad en un banco mayorista, sin perjuicio de la continuidad de las operaciones previas vigentes, así como su carta orgánica, según el texto ordenado por el decreto 540/93, con excepción de aquellos artículos que, en términos generales, se refieren a los derechos, garantías y privilegios del banco en relación con los créditos otorgados, señalando la continuidad en el futuro de las operaciones ya concretadas y de las que se concreten dentro del plazo de los diez años; a partir de la vigencia como ley del presente proyecto. Así se dispone la continuación de los artículos 24, inciso 1), 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 54 y 56.

Hacia el final de este capítulo tercero, el artículo 31 dispone que la comisión bicameral que se crea por el artículo 13 verifique que las transferencias accionarias se realicen conforme se prevé en el proyecto y, subsidiariamente, en la ley 23.696.

Finalmente, el artículo 32 encomienda a la Sindicatura General de la Nación la realización de la tasación del Banco Hipotecario, según lo establece el artículo 19 de la ley 23.696, pudiendo recurrir al apoyo de asesoramiento profesional y técnico nacional o extranjero, con cargo al Banco Hipotecario Sociedad Anónima.

El proyecto que consideramos continúa con el capítulo cuarto, titulado "Banco de la Nación Argentina", que abarca del artículo 33 al 37. Las disposiciones de este capítulo tienen como propósito establecer una especie de resguardo o de reaseguro, no obstante las previsiones adoptadas en el capítulo tercero, para preservar la exis-

tencia de un sistema de crédito para el financiamiento de vivienda para los sectores populares, valiéndose para ello del Banco de la Nación Argentina.

Es así que se incluye esta actividad en forma específica en la carta orgánica, a través del artículo 33 del proyecto que estamos considerando y el mandato que se otorga en el artículo 34.

Para este fin, y tal como lo establece el artículo 35, la base del "fondeo" para el financiamiento radicará en una transferencia de 100 millones de pesos proveniente de la venta de las acciones del Banco Hipotecario como aporte de capital al Banco de la Nación, con más una suma igual proveniente de la renta neta que produzcan los activos del fondo fiduciario.

Con esta capitalización de 200 millones de pesos se espera conformar, con el transcurso del tiempo, una masa de fondos del orden de los 2.000 millones de pesos, teniendo en cuenta la capacidad de captación que aquella suma de capital otorga vía depósitos o bien por emisión de títulos.

Esta acción del Banco de la Nación se complementará, según se dispone en el artículo 36, con un fondo especial que se formará con el 10 por ciento de los intereses que generen los recursos del fondo fiduciario, con el cual se atenderán garantías de créditos para viviendas únicas, permanentes y no suntuarias, de personas de bajos y medios ingresos, así como subsidios de tasas de interés en los casos de créditos para viviendas populares destinadas a sectores de bajos ingresos.

Por último, el capítulo quinto corresponde a las "Disposiciones Complementarias" y abarca del artículo 38 al 45. En lo esencial, los artículos 38 y 44 establecen un sistema de recálculo de las deudas por créditos hipotecarios originados en operatorias del Banco Hipotecario Nacional vigentes con anterioridad al 1º de abril de 1991, las cuales contenían sistemas de indexación del capital y, por lo tanto, de las cuotas.

Teniendo en cuenta que las soluciones adoptadas hasta ahora no resultaron satisfactorias para encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de recuperar los fondos por parte del banco y la capacidad de pago de los deudores, se establece un nuevo sistema basado en los valores actuales de las viviendas, con una tasa de interés que no podrá exceder del 9 por ciento anual, con un tope del 4 por ciento en el conjunto de los gastos administrativos, de escritura traslativa de dominio y de constitución de hipoteca y adecuando los montos de las cuotas y los plazos de

forma que no se supere el 25 por ciento de los ingresos del grupo familiar. Además, se establece el procedimiento para los casos de discrepancias entre el banco y los deudores.

Finalmente, el artículo 45 instruye al Poder Ejecutivo para que garantice a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación de recursos para la financiación de proyectos que ésta proponga en un porcentaje no menor al 6 por ciento de la masa de recursos que corresponda a la Nación, según el artículo 8º.

Señor presidente, señores senadores: el contenido y los fundamentos del proyecto sobre el que acabo de exponer nos colocan frente a una de las iniciativas de mayor trascendencia que a este Honorable Senado le ha tocado considerar en estos últimos años, aunque la real medida de dicha trascendencia solamente podrá ser establecida en el mediano y largo plazo.

Tal como señalé al comienzo de mi exposición, no estamos frente a una privatización más de las muchas que signaron la transformación de la estructura económica de nuestro país. El propósito de este proyecto es perpetuar en el tiempo los recursos derivados de esta privatización, con un claro sentido federal de apoyo a la recuperación de las economías regionales, cuidando no ya de no perder, sino, más aún, de incrementar la actividad propulsora del acceso a la vivienda para amplios sectores de la población, todo ello con la mira apuntada a fomentar la utilización intensiva de mano de obra.

No obstante que recién manifesté que el tiempo permitirá apreciar la trascendencia del presente proyecto, existen elementos objetivos que nos habilitan para anticipar los efectos que su ejecución puede producir a través de la realización de obras de infraestructura y de construcción de viviendas.

Algunas evaluaciones previas estiman el probable producido de la colocación de las acciones del Banco Hipotecario en el orden de los 3.000 millones de pesos, lo que representa cuatro veces y media el crédito total previsto para este año en el presupuesto general de la Nación para la inversión en obras públicas, que asciende — como todos los señores senadores saben — a 667 millones de pesos.

Pero nuestro cálculo no puede detenerse aquí, ya que a lo largo del tiempo podemos imaginarlo multiplicado a través de la recuperación y la reinversión de los fondos con más sus frutos y, más aún, a través del efecto multiplicador que el aumento de la demanda originada por estas in-



versiones ejercerá sobre el nivel global de la actividad económica.

Por todo ello, señor presidente, anticipamos el voto afirmativo de la bancada justicialista al proyecto de ley en consideración.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa, de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: estamos ante una de esas cosas que son como paradojas de la historia, ya que en la misma sesión en que hemos rendido homenaje al general Perón, a Leandro N. Alem y al movimiento nacional popular, resaltando el desarrollo de una clara conciencia de afirmación tan combativa y vilipendiada — como se dijo aquí — para tratar de afirmar los valores nacionales, estamos tratando la privatización del Banco Hipotecario.

Y paradójico también es el hecho de que — como se dijo — ese banco fue creado en 1886 por un hombre que, pese a que era un liberal a ultranza — como el general Julio Argentino Roca —, estaba convencido de que el Estado tenía que realizar políticas activas. Por ello, dispuso la creación del Banco Hipotecario.

Y hoy que los tiempos cambiaron y que las circunstancias son otras — ello es obvio —, tenemos que debatir y analizar esta privatización.

Sé que esta iniciativa ha llenado de dudas a muchísimos legisladores, y seguramente a funcionarios, no sólo de la oposición, sino también del oficialismo, porque no es fácil establecer la privatización de una de las grandes herramientas que hacen a mejorar la decisión política y la autonomía de decisión de los estados, cual es la herramienta financiera.

Hace algunos años, no tantos, desde muchas bancas — y por qué no decirlo, tribunas — se hablaba hasta de la nacionalización de los depósitos bancarios. Hoy no sólo no están hablando de eso, que parecería quizá no estar al nivel de los tiempos, no están hablando de la nacionalización de los depósitos, sino de la privatización de la banca oficial.

No puedo dejar de recordar que hace pocos meses, cuando el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía, el señor Carlos Rodríguez, habló de la privatización de algunos bancos oficiales, se escucharon rasgaduras de vestiduras desde todos los sectores del espectro político argentino, salvo de aquellos sectores económicos vinculados al *establishment*, al poder financiero, que obviamente estaban apoyando aquellas decisiones que impulsaba el Fondo Monetario y que en un primer momento tenían por portavoz público a Carlos Rodríguez.

Hace apenas unas semanas hubo otra dura polémica entre un representante del Grupo de los Ocho, Eduardo Escassany, un hombre del mundo financiero que dijo que había que privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En esa ocasión, el gobernador Duhalde, apoyado por grandes sectores de la vida nacional, dijo que jamás iban a entregar las herramientas que hacen a mejorar la decisión política y la autonomía de decisión del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones.

Cuando se habló de nacionalizar el Banco Nación, hasta Roque Maccarone, un hombre que proviene de la banca privada, dijo: "No vamos a permitir que se privatice el Banco Nación". Y fue apoyado por todo un directorio, cuyos miembros también provienen en gran parte del mundo financiero y han tenido su desarrollo a través de la banca privada.

Cualquiera que sea la posición que en algún momento se tuvo, existe el convencimiento de que a los efectos de una mayor autonomía de decisión es conveniente mantener las herramientas de política financiera que aún se tienen. Y no estamos hablando de nacionalizar sino de no privatizar lo que es del Estado.

Cuando llegó el proyecto de privatización del Banco Hipotecario, muchos dijeron que esa iniciativa no iba a pasar en el Congreso. Reconocemos que en la Cámara de Diputados todos los sectores hicieron un esfuerzo para dar una mayor ecuanimidad al proyecto del Poder Ejecutivo, fundamentalmente teniendo en cuenta la situación de los actuales deudores hipotecarios del Banco Hipotecario.

¿Quién no recuerda la intervención del propio diputado Maqueda, entonces vicepresidente del bloque Justicialista, cuando se trató el artículo 38? ¿Cómo se establecieron los sistemas de recálculo de deudas para evitar aquellos índices deformantes de una mala época económica de la historia argentina que nos tocó protagonizar, en la cual los valores de los inmuebles nada tenían que ver con la realidad?

Y así fue como se establecieron varias mejoras que desde el punto de vista parcial trataron de mejorar esta privatización, que a nuestro entender en lo sustancial es absolutamente inconveniente.

Y decimos que es inconveniente, porque a nadie le quepa la menor duda de que la influencia que ha tenido el Banco Hipotecario, no sólo en la construcción de viviendas sino en la regulación de la tasa de los créditos hipotecarios, ha sido fundamental.

El mercado hipotecario en la Argentina está en el orden de los 11.500 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento corresponde a hipotecas para vivienda, y de ese 60 por ciento el 52 por ciento está controlado o tiene como acreedor al Banco Hipotecario de la Nación. Es decir que el Hipotecario es abosolutamente determinante en la formación de tasa en los mercados de la vivienda.

Forma tasa, y lo hace de tal manera que consiguió en pocos años bajarla del 18 al 11 por ciento. Y no al precio de tener que subsidiar operaciones y producir déficit y pérdidas sino con balances superavitarios como los de los tres últimos años.

Debemos reconocer la gestión eficiente que ha realizado la actual administración en el Banco Hipotecario, y que ha hecho que los últimos balances, y más concretamente el último de ellos —de hace muy pocos días— arroje 285 millones de utilidad. El anterior fue de 320 millones de utilidad, de los cuales 120 se derivaron, por una decisión política del Tesoro, a "Rentas generales", conspirando contra el crecimiento y la posibilidad de mayor desarrollo del Banco.

Alguien podrá decir: "El Estado es dueño del Banco. El Estado en algún momento tuvo que ponerle al Banco, ahora se lo saca". Estas son decisiones políticas.

Alguna vez se utilizó como argumento para las privatizaciones la falta de eficacia y de eficiencia; por eso, se decía que había que privatizar los ferrocarriles, aunque hoy les estemos dando a través de subsidios directos o indirectos más de mil millones de dólares.

Si en algún momento alguien pensó que a través de las privatizaciones se iba a mejorar la eficiencia, yo preguntaría: ¿cuál es el motivo ahora?

Alguien dirá: "El motivo no es el aspecto deficitario o la ineficiencia de gestión del Banco Hipotecario". Reconocemos que su eficacia es obra del actual equipo, cosa que no se logró durante nuestra gestión. Pero en la actualidad el Banco Hipotecario es de todos los argentinos. Y el hecho de que un equipo haya hecho bien las cosas es para bien de todos los argentinos, y nosotros, como argentinos, estamos haciendo estas consideraciones, reflexiones y análisis.

Escuchaba recién al miembro informante cuando decía que a través del proyecto que estamos tratando se va a mantener el rol del Banco Hipotecario Nacional a través de este nuevo Banco Hipotecario Sociedad Anónima, porque el Estado va a tener una *golden action*. Pero esta

acción de oro no es para regular las tasas. Ni siquiera es para crear viviendas populares.

Tanto es así que en el último capítulo se crea en forma especial un pequeño fondo de apenas cien millones de dólares, que a lo mejor se podrá incrementar en otros cien para que sea administrado a través de una línea especial por el Banco de la Nación, para viviendas populares.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Berhongaray.** — Pero esta acción de oro lo único que va a evitar es que durante los diez primeros años no se tomen algunas de las medidas que aquí se establecen, como la venta, la fusión, el cambio de domicilio, la desnacionalización, la apertura de sucursales fuera del país, etcétera. Esto es lo que puede hacer la acción de oro. Pero el Estado, a través de su *golden action*, no va a decirles: "Señores, aquí hay que hacer viviendas populares; aquí hay que establecer tasas que mantengan un criterio de rentabilidad pero no de lucro excesivo". No es ésa la función de la *golden action*. Entonces, lamentablemente, no es correcto afirmar que en el proyecto de ley que estamos tratando esté previsto que el nuevo instituto que surge del Banco Hipotecario va a mantener un rol similar al anterior. No; va a ser un banco privado, con algunas pequeñas limitaciones en temas decisorios fundamentales como los que aparecen establecidos expresamente en el proyecto. Va a ser un banco que estará en posición dominante en el mercado. Y como banco privado su función va a ser el lucro. Entonces, así como con la situación dominante derivada del 52 por ciento de participación que hoy tiene el Banco Hipotecario pudo tener utilidades y, a su vez, llevar la tasa a la baja, esa misma situación dominante le va a permitir tener muchas más utilidades y manejar la tasa del mercado. Ese es el tema de nuestra preocupación.

Sé que estas preocupaciones las tienen seguramente muchos de los señores senadores.

Se ha puesto como título de la ley "Ley del Desarrollo Regional y Generación de Empleo". Entonces, se dice: "Vendamos esto, que va a seguir siendo lo mismo en manos privadas, y con eso generemos empleo". No voy a venir a hacer análisis de que estos fondos son electorales, para las campañas. Quiero manejarme con la realidad de los hechos. Si ocurriera eso y se hiciera bien, no me importaría tanto. Pero no estoy tan convencido de esto, porque en el presupuesto de 1996 votamos una partida de inversión real del

orden de los 1.000 millones de dólares, y solamente ejecutamos 640 millones, con lo cual casi 400 millones no fueron destinados a obras de infraestructura.

Si el motivo que fundamenta este tema es generar actividad económica y empleo, lo razonable hubiera sido cumplir el presupuesto.

En última instancia, si hubiera que tomar una decisión de tipo keynesiano, en el sentido de generar una gran actividad, aunque sea en forma forzada, ¿el único modo de hacerlo sería a través de la venta del Banco Hipotecario?

El diario "Clarín", en su edición del 14 de abril de este año —si no me equivoco—, publica que el Eximbank japonés y el Banco Mundial ofrecieron 1.800 millones de dólares para obras de infraestructura en la Argentina. Concretamente, se habla de caminos, obras de riego, etcétera. Alguien podría pensar en términos macroeconómicos y decir que si el Estado nacional, a través del Banco Hipotecario, tiene un ingreso o una renta del orden de los 300 millones de dólares anuales, podría compensar cualquier ampliación del endeudamiento para una actividad de infraestructura con la renta que produce actualmente dicha institución bancaria. Esto podría hacerse sin necesidad de vender el Banco Hipotecario ni de perder este instrumento de regulación del mercado de viviendas.

De todas maneras, se nos ocurre pensar que las cartas están echadas. Sabemos que The First National Bank of Boston y el Morgan Green Field van a ser los bancos encargados de la colocación de las acciones clase C y D de que habla el proyecto.

La tasación a valor libro realizada por el Banco Hipotecario está en el orden de los 2.780 millones de dólares.

La capacidad prestable no utilizada actualmente supera en seis veces la vigente. En la Argentina hay un mercado hipotecario fantástico. Alguien dirá que todo esto favorecerá la colocación de las acciones. Sí, probablemente, si es que las cosas se hacen bien. Lo que no nos parece razonable es darle al fondo fiduciario el carácter de extrapresupuestario.

Escuchaba al miembro informante que decía que aunque el proyecto no lo diga, se debe aplicar la ley 24.156; es decir, la ley de administración financiera del Estado, que todos votamos con entusiasmo porque, entre otras cosas, dijimos que daba transparencia a la gestión administrativa. Lamentablemente, esa ley no se va a aplicar porque no está citada, más allá de que sí figura en el artículo 23 cuando hacen referencia

al banco. Sin embargo, en el artículo 4º, donde se hace referencia al fondo fiduciario, expresamente está fuera del control. Reitero: la ley 24.156 expresamente está excluida, y es reemplazada por una comisión bicameral. El instrumento jurídico que le da seriedad al control de las inversiones no va a estar. Es más. Ni siquiera figura la Auditoría General de la Nación. Es un fondo de carácter extrapresupuestario. En una palabra, para mí lo que se está haciendo no es constitucional.

No sólo se evitan los controles en el orden federal sino que también se establece la federalización del descontrol. Lo digo porque en el inciso c) del artículo 9º de este proyecto de ley se establece lo mismo para las provincias. Dice el inciso c): "En cada jurisdicción los fondos recibidos integrarán una cuenta especial, la cual no formará parte del Fondo Unificado Nacional o provincial, ni de ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando total autonomía operativa y funcional." Es decir que no sólo se establece el descontrol en el orden nacional sino que se lo lleva también a las provincias para que éstas tengan como fondos extrapresupuestarios los que les correspondan por el fondo fiduciario.

Realmente, esto nos parece un retroceso. Que el Congreso de la Nación tenga que delegar atribuciones en un consejo de administración designado por el jefe de Gabinete, donde solamente dos representantes son de las provincias sobre un total de siete es, sinceramente, algo que no admite justificación, máxime considerando las funciones del Congreso y, en especial, las del Senado de la Nación.

El hecho de que el Banco de la Nación, que actúa como fiduciario, tenga que establecer la regulación del fondo tampoco es exactamente así, porque recibe las instrucciones del consejo de administración designado por el jefe de Gabinete.

Sé que muchos señores gobernadores se han sentido tentados por esta carnada que significa la posibilidad de realizar obras públicas en su provincia y, sin distinción de partidos políticos, han adherido a la sanción de este proyecto de ley. Pero quiero hacer una reflexión por encima de los aspectos generales que estamos puntualizando.

No sé qué va a pasar cuando se aplique el artículo 10 —y esto lo hablamos en el seno de la comisión— porque sabemos que el Fondo Monetario Internacional, el señor Carlos Rodríguez y el ministro Roque Fernández en las reuniones de gabinete dicen que lo recaudado por la venta

del banco se deberá destinar al pago de la deuda. Entonces, qué pasará con el artículo 10, que dice: "Los recursos del fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines previstos en el artículo precedente podrán ser invertidos en títulos o valores públicos, tanto de origen nacional como provinciales, previamente calificados". Es decir que, no bien se produzca la venta, todo eso será para comprar bonos.

¿Y después se podrán vender esos bonos? ¿U ocurrirá que algunos de los grandes tenedores de esos bonos en los mercados internacionales nos van a mostrar alguna cosita y se colocan en posición vendedora y nos digan: "Cuidado, que si nosotros vendemos un poquito más de la cuenta, los bonos se vienen abajo y el índice Merval se les cae en la Argentina y se produce una corrida allá"? Ya lo han hecho otras veces. Lo vivimos, en carne propia; es lo que alguien llamó —quizá fuertemente— golpes de estado financiero y demás.

Pero sabemos la dependencia que tenemos y este artículo crea la posibilidad de que llegue a ocurrir alguna jugada en el mercado internacional, de modo que ese dinero, que de buena fe muchos de los que están acá piensan que debe volcarse en obras públicas, en infraestructura económica o social, no llegue a cumplir la función que por esta ley se está estableciendo.

Simplemente queremos alertar sobre esta situación para que aquellos que tengan mayores posibilidades de decisión tomen las medidas concretas para que nada de esto ocurra.

Ustedes saben que hay una discusión muy fuerte en el seno del gabinete, de gente que está afirmando que este dinero se debe destinar al pago de deuda pública. Y tengamos cuidado de que por ese artículo 10 no se permita la posibilidad de que nos hagan ese *gambito*.

Imaginemos que las cosas vayan mejor de lo que uno puede llegar a pensar. Me da la impresión de que esta enumeración que se ha hecho en el Anexo I, si bien es indicativa de obras a realizar, no es seria. Algunos proyectos podrán ser serios, pero en la inmensa mayoría no hay estudios de rentabilidad, de retorno; no hay cálculos estimativos sobre lo que ellos significan. Se trata de grandes títulos y nos vamos a encontrar con que no sé si todas las obras tendrán la posibilidad del retorno que hoy sí tienen las hipotecas del Banco Hipotecario Nacional. Porque por cada una de las 269 mil hipotecas que hizo el Banco Hipotecario, por cada una de las 150 mil hipotecas de los institutos provinciales de vivienda que administra el Banco Hipotecario y

por cada una de las 4.500 hipotecas de las Fuerzas Armadas y de seguridad que dio el Banco Hipotecario, hay una vivienda y por cada una de ellas se generaron cuatro puestos de trabajo y sistemas de repago que han permitido que el banco hoy tenga los balances y los resultados a los que nos estamos refiriendo.

¿Cómo se determinará el valor del Banco? Dicen que la Sindicatura procederá a su evaluación.

Quiero mencionar unas cifras para que se tengan en cuenta. En los Estados Unidos, el valor promedio de un banco, en función del crecimiento que puede tener, es de 1,8 sobre el valor libros; en Brasil, es de 1,42 sobre el valor libros; en varios países de Latinoamérica el promedio de evaluación es de 1,78. Por ejemplo, en Chile es de 2,36 y ahí hay una situación muy parecida a la nuestra, porque en Chile influye mucho la gran concentración de dinero que han provocado las AFJP en los años que están funcionando; si bien los bancos no actúan en las AFJP, los fondos que han concentrado las AFJP hacen que la valoración de los bancos, de acuerdo con el valor de libros, tengan un sobreprecio con relación a la media de los países.

¿En cuánto vamos a valorar el Banco Hipotecario Nacional, si 2,78 millones de dólares es el valor de libros? ¿En 1,5 o 1,6? ¿Quién va a determinar eso exactamente? Quiero puntualizar estas cosas porque ya estamos en la puerta y ahora van a venir el vértigo y la aceleración de los tiempos por la privatización.

Lamentablemente, muchas de las cosas que en su momento dijimos respecto de otras privatizaciones se fueron dando. Por eso estamos un poco preocupados también por la que estamos tratando. Esta es la más importante de todas, sin ninguna duda. Estamos hablando de 3 mil millones de dólares. Enormes títulos en los diarios hacían referencia a las megafusiones que en los bancos privados llegaban a 700 millones de dólares, hace apenas uno o dos meses, y se estaban transfiriendo el 35, el 40 o el 50 por ciento de los principales bancos argentinos. Repito que estamos hablando de 3 mil millones de dólares, por lo menos. Queremos señalar nuestra real preocupación.

Estamos convencidos de que el país va a perder un instituto eficaz como es el Banco Hipotecario y una gestión eficaz como la que está realizando. Esta administración del Banco Hipotecario logró que su cobrabilidad subiera del 19 al 74 por ciento. Está bien saneado.

En la calificación de los organismos internacionales de riesgo, el Hipotecario está muy por encima de la que le dan a la República Argentina como país. Esta última es ABB mientras que la del Banco Hipotecario es AAA —triple a, aunque traiga alguna mala connotación—, que corresponde a la mayor calificación que tienen los países del primer mundo.

¿Todo esto para realizar un plan de obras públicas que puede realizarse por otros medios? Se han presentado en el Congreso de la Nación varios proyectos para realizar fondos de desarrollo de infraestructura con diversos recursos generados por distintas actividades.

Ahora, parece que éste es el comienzo de una nueva etapa: la privatización de la banca oficial. ¿Va a seguir el Banco Nación? Si lo dejan a Carlos Rodríguez, seguro que sí. Si lo escuchan al Fondo Monetario, seguro que sí. ¿También se va a privatizar el Banco Provincia, utilizando los mismos argumentos que se utilizan para privatizar el Hipotecario? Alguien dice: Eso ya está. Bueno, tomemos esos fondos y hagamos otra cosa.

¿Es una sana decisión política desprenderse de un instrumento financiero en un país tan dependiente como el nuestro? Porque esto no es Estados Unidos.

¿No será por un problema de escala? Alguien podrá decir: "Claro, las megafusiones sacaron de escala a los bancos oficiales". Si así fuera, quizá tendríamos que orillar la solución por otro lado y así como hay megafusiones en el sector privado, planteárnoslas en el sector oficial —entre el Banco Nación y el Hipotecario, por ejemplo, si es que fuera necesario, aunque no lo creo—.

Alguien puede decir: "Que los bancos provinciales que quedan busquen un sistema de megafusión", si creemos que el instrumento financiero sigue siendo un instrumento válido de políticas autónomas o medianamente autónomas. Porque nadie va a caer en la ingenuidad de que en el mundo globalizado tenemos márgenes de autonomía totales.

Pero frente a la globalización y a la confiscación de la decisión nacional, ¿cuál es la respuesta que damos? ¿Cruzarnos de brazos y decir "nada se puede hacer"?

¿Dejémonos llevar por la corriente? ¿O plantear alternativas razonables a fin de mantener un poco más la capacidad de decisión del país?

Los Estados Unidos privatizaron su banco oficial después de resolver el problema de la vivienda.

Acá, en la Argentina, todavía tenemos un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas. Por eso decimos que el mercado hipotecario potencial es altísimo.

No me niego a adoptar ninguno de los instrumentos o caminos que podamos seguir; simplemente, creo que éste no es el mejor. Y estoy seguro de que muchas de estas preocupaciones y reflexiones son compartidas por miembros de todos los sectores de este Parlamento y de la política en general.

Algunos podrán decir que en lo que hace a la opción costo-beneficio, ésta es la mejor alternativa. Nosotros creemos que están equivocados.

Gas del Estado, al momento de su privatización, era una empresa bastante parecida a esta, porque estaba eficientemente administrada, era rentable y ahora nos encontramos con que, en plena convertibilidad, desde la privatización de Gas del Estado, el aumento del precio del gas natural fue del 35 por ciento y el del gas licuado, del 120 por ciento; en plena convertibilidad, repito.

¿Qué nos hace pensar que esta función de tendencia a la baja, con respecto a las tasas, que realizó desde siempre —y últimamente con mayor calidad y eficiencia— el Banco Hipotecario Nacional, se seguirá manteniendo? Yo creo que no habrá de mantenerse. Lo dije recién: la posición dominante en el mercado hipotecario que tiene el Banco Hipotecario Nacional —el 52 por ciento del mercado hipotecario de viviendas está en manos de ese banco—, en manos del Estado significa tasa a la baja y en manos privadas, tasa para arriba.

Si no, veamos lo que pasa con el Banco de la Nación. El Banco de la Nación vive con el permanente propósito de bajar las tasas, dentro de sus posibilidades.

Ayer, el presidente de la Nación, durante la reunión de ABRA (Asociación de Bancos de la República Argentina), que reúne a los principales bancos extranjeros que operan en nuestro país, repitió lo que viene diciendo desde hace tanto tiempo: que hay que bajar las tasas. Sin embargo, no tiene respuesta.

Recuerdo lo que alguna vez dijo un ex ministro radical: "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo". Aquí ocurre lo mismo, en cierta forma. Uno les habla en términos de la racionalidad, desde el interés general, y ellos contestan con los balances que deben rendir ante sus casas matrices que están afuera.

Podríamos seguir hablando mucho más sobre este tema pero no quiero cansarlos. Dije que emplearía sólo treinta minutos y ya he cumplido ese término.

Por eso, señor presidente, quizás cuando traemos el proyecto en particular, podríamos sugerir una serie de modificaciones. Sin embargo, sabemos que existe la decisión política de aprobar la iniciativa a libro cerrado.

Simplemente, queríamos alertar sobre algunas cosas, como las que dijimos. Cuidado con el artículo 10; no vaya a ser que aquello que Roberto Alemann dijo en "El Cronista", de que ese dinero iba para pagar deudas, se cumpla; no vaya a ser que lo de Carlos Rodríguez se cumpla; no vaya a ser que en aquellas discusiones de gabinete ganen los que escuchan más al Fondo Monetario Internacional y que nuestros gobernadores, legisladores y nosotros mismos — que pensamos que a través de esto se podría, a lo mejor, generar fuentes de empleo — nos encontremos con una realidad que no tiene nada que ver con lo que hoy se está diciendo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del bloque autonomista.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: llega en revisión de la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual se establece un programa de desarrollo personal y de generación de empleo a partir de la creación de un fondo fiduciario, cuyo patrimonio estará integrado por las acciones del Banco Hipotecario S.A.

En nombre del bloque autonomista, adelanto mi voto negativo en general y en particular al referido proyecto de ley; tan es así que he firmado un dictamen en minoría, con disidencia total, sobre este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados.

Al fundar esta decisión voy a señalar que este tema me provoca un profundo rechazo porque, en primer lugar, me afecta en el sentimiento y, en segundo término, porque en mi criterio las razones esgrimidas para llevar adelante su sanción enmascaran otros compromisos contraídos con la banca y organismos internacionales y, a la vez, atienden circunstanciales necesidades de tipo electoral.

Me duele enormemente que se private el Banco Hipotecario Nacional, centenaria institución, creación del autonomismo, ya que fue durante el gobierno del general Julio Argentino Roca, en septiembre de 1886, cuando su ministro de Hacienda Wenceslao Pacheco protagonizó un notable debate parlamentario y logró la

sanción de la ley 1.804 que dio vida a esta institución.

La presidirían después Juan Agustín García y Carlos Pellegrini, otro prohombre del autonomismo y fundador, a su tiempo, del Banco de la Nación Argentina, constituyendo ambas instituciones pilares fundamentales del desarrollo argentino.

Cabe recordar que el Banco Hipotecario Nacional, a partir de su creación, tuvo un crecimiento sostenido y constante, valiéndose de un instrumento que resultó fundamental en la historia de las finanzas argentinas como fue la cédula hipotecaria amortizable, que, en tanto acordaba una interesante renta fija a los inversores, permitía otorgar los créditos con garantía hipotecaria a una tasa no mayor al 6 por ciento anual, propia de un país con moneda estable.

Ello debiera servir de modelo para reformular nuestras instituciones actuales, si nos atenemos a que hoy también se ha alcanzado la estabilidad de aquel entonces recreándose otra ley sustantiva del autonomismo nacional como es la de convertibilidad de la moneda argentina.

Como dato ilustrativo de aquel crecimiento que posibilitó el acceso a la vivienda a cientos de miles de habitantes, muchos de ellos inmigrantes que trajeron solamente su espíritu de trabajo y progreso, la cartera crediticia del Banco Hipotecario — que se distribuía en todo el territorio nacional a través de más de 50 sucursales — alcanzó al 20 por ciento del Producto Bruto Interno nacional, cifra cuya magnitud debemos tener presente en esta hora de decisiones, máxime si la comparamos con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que no han llegado a superar el 2 por ciento del P.B.I. en sus tres años de funcionamiento.

El Banco Hipotecario fue una institución que sufrió tremendamente los embates de la inflación, hecho tardíamente corregido por mecanismos indexatorios que muchas veces resultaron desproporcionados e injustos pero que pudieron revertir su situación financiera deficitaria en los términos de la ley 24.143.

En la actualidad, el banco es ampliamente superavitario, excediendo sus utilidades los 300 millones de pesos, que posibilitan una buena tasa de capitalización anual. Por ello, cuando hemos visto revivir al gigante que fue en nuestras finanzas, nos apena sobremanera que al mismo tiempo el Estado nacional pretenda desprenderse de un activo trascendente, fundamen-

talmente para el diseño de la política habitacional.

Señor presidente: he afirmado previamente que no me convencen las razones esgrimidas para la creación de este fondo fiduciario supuestamente promotor de generación del empleo y del desarrollo regional.

Saño que tan pronto trascendió la concreción del proyecto privatizador, el 2 de octubre de 1996 presenté en este Honorable Senado de la Nación un proyecto de resolución por el que debía ponerse en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional el rechazo de este cuerpo y, a su vez, la profunda preocupación que le causaba la resignación por parte del Estado nacional de conducir la política habitacional del país.

Una semana después ingresaba por la Honorable Cámara de Diputados el mensaje del Poder Ejecutivo remitiendo la propuesta que hoy examinamos, aunque corresponde aclarar que con muchas y muy notables modificaciones introducidas por la Cámara baja.

Decía aquel mensaje que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional tendría por objetivos financiar un programa de inversiones públicas destinado a recrear los medios que permitan una mayor eficiencia de la producción nacional, preservar el medio ambiente y fortalecer institucionalmente al Estado.

Se afirmaba también que la realización de obras de infraestructura mejoraría sustancialmente los niveles de empleo, que se disminuirían los desequilibrios socioeconómicos y que se procuraría un impacto redistributivo del ingreso.

El voluntarismo de esos conceptos halló posterior reflejo en el nuevo artículo incorporado en primer término a los que añadió otros objetivos no menos importantes de modo grandilocuente.

Sin duda, aparece aquí un vuelco importante en la política económica seguida hasta ahora por el Poder Ejecutivo nacional. Basta tener a la vista los presupuestos nacionales para 1994, 1995, 1996 y 1997, donde la inversión real directa descendió de 1.534 a 1.289 y 1.036 millones —en los años 1995 y 1996, respectivamente—, hasta reducirse finalmente a 920 millones para el año en curso.

Pero de inmediato sobreviene la duda respecto de qué inversiones se está pensando financiar. Desconocemos si se tratará, acaso, de una megaobra que absorberá la totalidad de esos fondos —como podría ser la aerolínea porteña—, tal vez, de miles de pequeñas obras en las es-

feras provinciales, al estilo del conurbano bonaerense.

Ahora bien, esta infraestructura económica y social —que en los términos del informe del jefe de Gabinete del 7 de mayo próximo pasado constituye parte de la deuda social acumulada en la República Argentina que no ha sido atendida durante las últimas décadas— pasará a ser manejada por un consejo de administración formado por siete personas designadas por el Poder Ejecutivo nacional, cinco de ellas a propuesta de la Jefatura de Gabinete, en tanto que las dos restantes surgirán de la asamblea de gobernadores del Consejo Federal de Inversiones. ¿Qué duda cabe acerca de cómo quedará integrado dicho consejo de administración en cuanto al oficialismo de sus integrantes?

Tampoco abrigo esperanzas respecto de las obras que en el futuro decidan hacerse. Me basta como ejemplo el denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, constituido en marzo de 1995 como supuesta compensación a las provincias por la cesión íntegra de los tres puntos del incremento del IVA, sancionado para paliar la recesión nacida del efecto "tequila".

Dicho fondo, que actuaría paralelamente al aporte que se obligaba a efectuar la Nación por 1.200 millones —según el artículo 3° de la ley 24.468—, se distribuyó solamente entre doce provincias, adjudicándosele a Mendoza 260 millones para cubrir parcialmente las pérdidas generadas por la administración de sus dos bancos oficiales a lo largo de la última década.

Pero, al mismo tiempo, se asigna a este fondo el carácter de extrapresupuestario. Es decir, se excluye del Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Nación una suma que se estima entre 2.000 y 3.000 millones de pesos.

Ya por el citado Fondo Fiduciario de Desarrollo provincial se excluyeron 1.250 millones y otros 2.000 millones se apartaron para constituir el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria. Estos son hechos sumamente graves.

El apartamiento de las normas de la unidad del presupuesto nacional y, por ende, de las leyes de administración financiera de inversiones públicas, constituye un modo oscuro de soslayar las exigencias para la realización del gasto público y su contralor, que la reforma constitucional de 1994 encomendó al Congreso, a través de la Auditoría General de la Nación.

No creo, señor presidente, que la futura comisión bicameral de seguimiento de este fondo fiduciario, cuyas funciones se verán restringidas a la producción de informes trimestrales y a una

memoria anual, según lo establece el artículo 13, pueda realizar una tarea provechosa en materia de contralor de la obra pública.

Es claro que, además, se procura evitar el debate parlamentario del destino de los fondos, pero de ese modo estamos transgrediendo los preceptos constitucionales en la materia, más precisamente el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional.

No encuentro ningún justificativo para aprobar de este modo la discrecionalidad, que fácilmente se convertirá en arbitrariedad, en el manejo de los fondos públicos. Es en estos procedimientos donde aparece con claridad el contraste entre los países del denominado primer mundo, en donde se respeta íntegramente la legislación porque ello es la base de sustentación de la seguridad jurídica, respecto de otros países —entre los que nos debemos incluir— donde se va creando una suerte de paralelo legal, acomodado a las necesidades del momento, a las que no son ajenas las urgencias electorales.

No quiero extenderme más sobre este aspecto del proyecto de ley sin dejar de recordar que en la anterior ley de coparticipación federal de impuestos, la 20.221, se destinaba para el Fondo de Desarrollo Regional el 3 por ciento de la recaudación total de tributos coparticipables, lo que en términos actuales significa una suma del orden de los mil millones, que anualmente ingresarían, y sobre los cuales no existirían plazos exigüos ni estrictos de reembolsos, porque no todas las obras de infraestructura, y mucho menos las de carácter social, son rentables y capaces de generar los fondos de reintegro.

Por ello, por la conveniencia de una norma de esta naturaleza fue que procuré dar entidad constitucional a esta cuestión al proponer en la Convención Constituyente de 1994 su incorporación al texto constitucional.

Señor presidente, continúo con el examen de las razones financieras por las cuales se intenta justificar la venta de los activos del Banco Hipotecario Nacional para lo cual, previamente, se lo convertirá en una institución bancaria que girará con el nombre de "Banco Hipotecario Sociedad Anónima" y cuyas acciones pasarán, como aporte de la Nación, al citado fondo fiduciario.

Esta nueva institución será continuadora de la estatal, salvo las excepciones que se fijan por este proyecto.

A partir de la decisión del Poder Ejecutivo de llevar adelante esta privatización, se manejaron cifras que oscilaban en los 3.000 millones de pesos como valor probable de realización del

banco. Tenían en cuenta que los activos superaban los 4.100 millones de dólares, en tanto que la deuda con el Banco Central de la República Argentina ascendía a mil millones, aproximadamente.

Cuando dicha decisión amagó concretarse, las cifras comenzaron a descender rápidamente y ya el propio mensaje del Poder Ejecutivo estimó entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos a los recursos iniciales del fondo fiduciario, es decir que se registró una brusca declinación del entusiasmo original.

La existencia de un sector en conflicto de la cartera del banco, debido a que la aplicación de mecanismos indexatorios había distorsionado seriamente la deuda original, ha llevado con razón suficiente a que los señores diputados introdujeran el Capítulo Quinto, por el cual los deudores tendrán derecho a recalcular sus deudas acorde con la mecánica que allí se desarrolla.

Sin duda alguna, así se atienden razonablemente las circunstancias de los deudores; pero obviamente ello está influyendo sobre la futura cotización, si nos atenemos a las versiones de los medios sobre el particular.

Tras ello, sugestivamente, en los últimos días, se ha registrado una intensa campaña publicitaria de importantes bancos ofreciendo nuevas líneas de créditos hipotecarios a mayor plazo y a menor tasa. Aún no resulta evaluable de qué manera esto se proyectará en el futuro precio de venta, pero cabe esperar una notoria reducción, habida cuenta de la disminución del *spread* bancario.

Ahora bien, como en su momento este Congreso de la Nación sancionó la ley 24.441, por la que se normaba la securitización de los créditos hipotecarios, a la vez que se legislaba sobre otras operaciones financieras como la titulización de hipotecas, con el expreso propósito de posibilitar el allegar nuevos recursos a los sistemas nacionales y provinciales de financiación de viviendas, no resulta razonable que el Estado nacional se despoje de su capacidad de conducir la política habitacional del país meramente para obtener recursos que podría generar por los otros medios a que nos hemos referido.

Ahora, en tanto continúe con su política de retiro y omisión sobre las decisiones fundamentales que le competen en materias indelegables como la seguridad, la salud, la educación, la justicia, el trabajo y hoy la vivienda, veremos retroceder a la sociedad argentina a una disociación de clases, exarcebándose las diferencias crecientes que registran las estadísticas del INDEC.



Señor presidente: he manifestado mi oposición a la aprobación de este proyecto, fundamentalmente porque considero que el Estado nacional no puede resignar su misión indelegable de decidir la política habitacional del país.

El Banco Hipotecario Nacional constituyó durante décadas el instrumento idóneo, y las cédulas hipotecarias amortizables fueron fuente de financiamiento suficiente para crear un mercado de capitales cuya solidez le permitió superar todo tipo de crisis financieras.

Se posibilitaría de ese modo dar cumplimiento al mandato constitucional y hacer factible el derecho del trabajador a acceder a su vivienda propia, en tanto que habilitar en el Banco de la Nación Argentina un sector hipotecario como prevé este proyecto equivale a vender la empresa para quedarse con el quiosco.

Aclaro que participo de la idea de apoyar fuertemente la realización de obras que generen una auténtica infraestructura federal, económica y social, pero considero que ellas deben ser tomadas por decisión de este Congreso de la Nación, cumpliendo todos los requisitos que establecen las leyes vigentes en materia de contrataciones de obras públicas y fiscalización de las inversiones realizadas. De otra manera, estaríamos habilitando un sistema paralelo y sustitutivo de este Congreso de la Nación, menoscabando su investidura y violando la Constitución Nacional.

Se transgreden así la unidad del presupuesto nacional y las leyes de administración financiera y de inversiones públicas. De igual modo, se abre un horizonte de dudas sobre la posibilidad para una ulterior actuación de la Auditoría General de la Nación.

Señor presidente: para terminar manifiesto que creo que este tipo de leyes, finalmente, acaban por degradar la esencia de las instituciones republicanas, creando un clima de suspicacias y de favoritismo que considero realmente nocivo para la sociedad argentina. Dejo así fundado mi voto negativo con respecto al proyecto de ley.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

**Sra. Fernández de Kirchner.** — Señor presidente: el proyecto que estamos tratando presenta para su abordaje una primera dificultad de carácter metodológico: lo principal, es decir, la privatización del Banco Hipotecario Nacional, está presentado casi como lo accesorio, en tanto que bajo la pomposa denominación de "ley de desarrollo regional y generación de empleo" se

presenta lo que, aparentemente, es la parte principal.

¿Por qué digo esto, que debiera ser al menos la parte principal? Porque en un país como el nuestro, fragmentado en lo social, con tres zonas muy delimitadas —un Norte muy pobre, un Centro concentrado y un Sur despoblado—, el desarrollo regional debería ser promovido desde lo simétrico, frente a tanta asimetría histórica.

¿Y por qué hablo de generación de empleo? Porque además de ser la nuestra una sociedad absolutamente fragmentada, está azotada hoy por el flagelo del desempleo. Parecería ser, entonces, al abordar esta norma, que lo principal sería la promoción de un desarrollo regional a través de obras de infraestructura básica y de generación de empleo. Pero esto no es así.

Uno se pregunta por qué se adopta esta metodología. Tal vez porque para poder abordar lo esencial —la privatización del Banco Hipotecario— era necesario, en cierta manera, disfrazar o enmascarar esto con un fondo de desarrollo regional.

Y voy a ser muy breve en cuanto a las características de esto que es accesorio. ¿Por qué? Porque creo que es conveniente analizarlo a la luz de lo que debe ser la creación de un fondo fiduciario que persiga —como se dice— equilibrar el desarrollo regional. Son tres o cuatro características distintivas de un proyecto que debería perseguir, para cumplir —claro está—, esos objetivos.

Primero una correcta fijación de un criterio de asignación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce? Muy simple: si lo que estamos persiguiendo es el desarrollo regional, deberemos tomar nota de que el país se ha desarrollado en forma histórica de manera muy asimétrica, como señalaba recién en la introducción: un Norte pobre, un Sur despoblado.

¿Cómo debería ser, entonces, el criterio de asignación de este fondo? Inversamente proporcional a ese desarrollo asimétrico. Esto es, si vamos a destinar recursos públicos extraordinarios, como lo presupone una privatización para el desarrollo regional, el grueso debería asignarse a aquellas regiones donde el mercado no asigna recursos privados. ¿Cómo? Inversamente proporcional, por ejemplo, al criterio de la ley de coparticipación —número 23.548—, que está fundada, esencialmente, en la densidad poblacional.

Sin embargo, no será así; ése no va a ser el criterio, sino que se va a repartir entre la Nación y las provincias un 50 y un 50 por ciento, criterio

que podríamos definir, tal vez no tan académicamente, como "miti" y "miti", que no responde a la realidad de lo que hoy es el Estado nacional, que se ha desprendido de todos los servicios básicos vinculados con la calidad de vida de la gente y que además, luego de una política de concesiones y privatizaciones, cuenta con muy pocas cosas. Entonces debería haberse asignado un criterio absoluto y diametralmente opuesto al que se fijó.

También, y a los efectos de cumplir el otro objetivo "generación de empleos" debió haber una correcta identificación y definición del perfil de las obras, que el anexo I, a mi criterio demasiado genérico, al igual que los tres objetivos del artículo 1º, no contemplan. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir qué tipo de puestos de trabajo necesitamos generar; si un tipo de puesto de carácter coyuntural en un plan de obras —que es muy importante también para paliar la situación— o uno para generación de puestos de trabajo estructurales. Es decir, definir correctamente a qué actividades económicas deberían corresponder esas obras de infraestructura básica: a turismo, a comunicación, a un modelo de exportación. Tampoco lo tienen.

Y, por último, la cuarta característica después de "asignación, definición de perfil e identificación de todo fondo fiduciario": la administración. Creemos que la designación en cabeza de la Jefatura de Gabinete, con siete miembros —de los cuales solamente dos corresponden a las provincias, donde se centraliza absolutamente la administración del fondo—, reedita lo que fue un antecedente no muy feliz en materia de administración, como lo fue la Secretaría de Vivienda de la Nación cuando administraba el FONAVI.

Este primer abordaje, distinguiendo lo accesorio de lo principal y viendo que no se van a cumplir los objetivos prefijados, nos lleva a una primera síntesis.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Pedro G. Villarreal.

**Sra. Fernández de Kirchner.** — La metodología adoptada, la metodología funcional, la asignación de recursos, la administración del fondo fiduciario por propia incapacidad funcional, difícilmente contemplan los objetivos de lo que —repito— va a constituir un fondo conformado por recursos extraordinarios de origen público.

¿Por qué extraordinarios? Porque el patrimonio que representa el Banco Hipotecario Nacional va a poder ser vendido una sola vez. Creo que huelga aclarar por qué.

Debemos abordar entonces lo que realmente se persigue: la privatización del Banco Hipotecario Nacional. En efecto, estarán quienes de acuerdo con un criterio de cierta connotación ideológica —por supuesto, con todo lo que esto conlleva de inflexible— propiciarán la no privatización, la conservación del Banco Hipotecario en el patrimonio estatal, a partir de una concepción que alguna vez tuvo nuestro país, denominada Modelo de Estado de Bienestar que después, por múltiples y variadas circunstancias que en numerosos debates hemos enumerado aquí, devino en un Estado distorsionador que terminó subsidiando a los ricos, protegiendo a los ineficientes, expropiando a los pobres a través del impuesto a la inflación y, por lo tanto, no sirviendo a nadie. Era un modelo de Estado de políticas sociales universales a ultranza, sin importar el *target*, sin interesar a quiénes servía. Un modelo que murió de muerte natural en 1989.

Quienes sean nostálgicos de ese Estado y de esa concepción, tal vez propicien a ultranza y a rajatabla la no privatización y la inclusión en el patrimonio estatal.

Están también los otros, los que conciben que el Estado tiene una maldad intrínseca, que nunca puede administrar nada y que, por lo tanto, debe reducirse a un Estado mínimo, y frente a aquel Estado distorsionador convertirse en un Estado desertor de las políticas sociales y de los instrumentos básicos que preserven mínimamente su autonomía de decisión.

Algunos fueron bien intencionados y se compraron el "verso" del fin de la historia y la muerte de las ideologías, de la globalización acrítica y del mirar la globalización desde afuera y no desde la Argentina. Y están los otros —los que siempre han estado— que han servido históricamente a intereses que poco tienen que ver con lo nacional.

Frente a esta situación de quienes conciben desde lo ideológico la toma de una decisión, estamos quienes pensamos que debemos hacerlo desde otra perspectiva que es la de la realidad. Y en esto, señor presidente, me voy a permitir una digresión.

Señor presidente: al escuchar los homenajes al general Perón tal vez le haya llamado la atención que nuestro bloque, el Justicialista de Santa Cruz, no hiciera un homenaje; extraño. Lo que sucede es que somos de los peronistas que creemos que a Perón no se lo homenajea en los discursos, sino en la política y en los hechos.

Entonces, desde esa conceptualización, desde la realidad, es que queremos analizar, no con una pregunta desde lo ideológico sino con una pregunta mucho más clara y concreta: ¿le conviene al país privatizar hoy el Banco Hipotecario Nacional?

Y hago esta pregunta porque escucho a una señora senadora que decía que no sabía qué hubiera hecho Perón hoy. Yo, que me incorporé a la política con la generación del "luche y vuelve", peleando por el retorno de Perón, aprendí a conocerlo no a través de los discursos ni de los libros. Yo soy de las que siguen creyendo que a Perón se lo comprende desde lo que hacía. Perón era fundamentalmente "hacer". Algunos interpretaban, muy superficialmente, que un día hacía una cosa y otro día otra, y que lo que ayer había levantado hoy estaba mal. Esto no era versatilidad o volatilidad argumental o ideológica. Era simplemente "hacer".

Yo estoy segura de lo que hubiera hecho Perón en una situación similar. Perón nunca decidió en contra de lo que beneficiaba al país. Nunca lo privó de los instrumentos. Perón no fue estatista, como dijo alguien; Perón hizo un modelo de Estado en la Argentina, que era necesario para incorporar a los trabajadores y a la mujer.

¿Hay posibilidades de desarrollar esto hoy en la Argentina, en este mundo globalizado? No, seguramente que no. No con aquellos instrumentos, no con aquellas políticas. Pero creemos sí en la necesidad de tener un Estado que no deserte frente a la cuestión social.

No un Estado interventor a la vieja usanza. Queremos un Estado que interactúe con la actividad económica, de modo tal que tenga políticas sociales activas, universales en los sectores que deban ser universales y focalizada en los sectores que así lo requieran.

Pero tampoco creemos en un Estado "Ejército de Salvación", que deje todo librado al mercado y que únicamente se ocupa de los pobres, de los sectores más vulnerables. No creemos en ese Estado "Ejército de Salvación" con cierto sesgo asistencialista-social.

Creemos que es posible desarrollar un modelo de Estado diferente. Es más, en el mundo se está discutiendo esto en estos momentos; es decir, cuál es el rol del nuevo Estado después del consenso de Washington, de la doctrina de Santa Fe y de tantas otras cosas que siempre cambian en ese movimiento pendular del surco de la historia. Esto hay que definirlo, y se trata de una discusión en la Argentina y también en

nuestro propio partido, con defensores de un lado y del otro.

Entonces, en este marco, en este estado por el que atraviesa la sociedad argentina, a los pobres estructurales, que fueron una realidad muy marginal de la Argentina de los años 70 —apenas un 8 por ciento— ha surgido una nueva pobreza, constituida fundamentalmente por los sectores medios pauperizados.

Es el fin del sueño argentino. ¿Cuál fue el sueño argentino, señor presidente? En esto, aunque parezca tonto, el Banco Hipotecario tuvo algunas cosas que ver, no como instrumento puntual sino como una decisión política del Estado de promover la movilidad social ascendente. Ese era el sueño argentino, como se lo denomina sociológicamente.

En este estado de cosas, en el que están en crisis algunas cuestiones que creíamos definitivamente superadas, y viendo que la historia, no con una visión mecanicista, retorna pendularmente y comienzan a discutirse nuevas cosas en la Argentina, desde el Estado argentino decidimos desprendernos de una herramienta básica como es el Banco Hipotecario Nacional, herramienta que había sufrido correcciones a través de la modificación de su Carta Orgánica y de la propia ley 24.441, que introduce nuevas metodologías en materia de securitización y de titulación de hipotecas.

Quiero recordar una reunión que mantuvimos en el Senado el año pasado, hace poco más de un año, cuya versión taquigráfica tengo aquí, en la que estuvo presente el licenciado Pablo Rojo, titular del Banco Hipotecario Nacional, invitado por la Comisión de Vivienda. Allí explicó cuál es el rol que hoy juega en la economía dicha institución. Pido, señor presidente, que la versión taquigráfica de esa reunión —que tengo aquí y que fuera remitida amablemente a cada uno de los señores senadores por el titular de la Comisión de Vivienda de este cuerpo— sea incluida en la presente sesión para que nadie en el día de mañana diga que no sabíamos qué era lo que pasaba con el Banco Hipotecario. En ella se explica muy bien toda la metodología de los Tiavi, el rol que van a jugar las cédulas hipotecarias en materia de ahorro interno, ese ahorro interno que en definitiva tanto nos está faltando a los argentinos y por el cual tenemos que recurrir al endeudamiento externo para financiarnos.

Se describen también los planes que se armaron para que juntamente con las provincias argentinas se mejore la gestión de los institutos provinciales de viviendas, con políticas que permitan recuperar los fondos.

Se describe muy claramente cómo numerosas provincias argentinas —entre las cuales se menciona también a Santa Cruz—, a partir del Banco Hipotecario y de su gestión han recuperado créditos, con lo que, a su vez, al producir nuevos recursos, se permiten nuevas titularizaciones, creando así toda una rueda.

Así está trabajando el Banco Hipotecario. Se lo mejoró, no solamente en la administración, que realmente es muy eficiente, sino, además, en la dotación de los instrumentos correspondientes. Esto es importante porque si no dotamos al Estado de los instrumentos necesarios, siempre va a ser un mal administrador. Pero está visto que se pudo revertir la situación y, a partir de la aplicación de estas políticas, comenzar a tener una injerencia muy importante, con más del 60 por ciento de participación —como se dijo aquí— en el mercado hipotecario. Esto lo hizo el Banco Hipotecario como banco mayorista y regulando la tasa al 11 por ciento, habiendo llegado al 18 por ciento, en materia de créditos hipotecarios.

En ese marco, el Estado decide desprenderse del Banco Hipotecario Nacional. Recuerdo que cuando se privatizaron numerosas empresas del Estado y, particularmente, la que tal vez tuvo mayor influencia en la vida de la provincia que represento y de esa región —me refiero a YPF—, los argumentos fueron las pérdidas —perdía más de 1.000 millones de dólares por año, no pago de impuestos, falta de producción, gran necesidad de un ingente flujo de inversión para producir más, etcétera. Pero este caso no es igual. Entonces, uno se pregunta por qué hacen esto quienes lo propician. No quiero prestarme a interpretaciones, como la que me formulara algún periodista, acerca de negocios o de lo que le interesa al sector privado. Quiero señalar una crítica a los que no comprenden cómo viene la historia; se han quedado en un punto del péndulo y compraron con moño y todo el verso de la globalización. No advierten que globalización no significa subordinación y no comprenden que es necesario conservar instrumentos básicos en poder del Estado de modo tal que, al menos podamos tener injerencia en las políticas sociales que se avecinan.

Por eso, señor presidente, y como un tardío homenaje que no hice en el momento que correspondía, el bloque justicialista de la provincia de Santa Cruz votará negativamente el proyecto de privatización del Banco Hipotecario Nacional.

**Sr. Presidente (Villarreal).** — Su pedido de inserción será sometido oportunamente a votación del cuerpo.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: está en consideración del cuerpo un proyecto de ley que dispone la creación de un fondo fiduciario y, al mismo tiempo, busca la privatización del Banco Hipotecario Nacional.

Sin duda, estamos ante un asunto de una enorme trascendencia social, tanto más en el presente, caracterizado por graves desequilibrios en la asignación de recursos y la asistencia financiera a la población en el marco de la seguridad social.

El déficit habitacional en la Argentina constituyó desde siempre una materia pendiente e irresuelta por gobiernos que se fueron sucediendo en la conducción del país.

No ignoro, señor presidente, que existen posturas encontradas en esta cuestión. Unas en favor de la privatización del Banco y otras en sentido contrario. Se sostiene en favor de la privatización la necesidad de capitalizar nuestro sistema financiero destinado a la vivienda.

Nuestro país, en este aspecto, se ha apartado de manera sustancial de la media mundial, ya que tan sólo destina el 3 por ciento de su producto bruto interno al otorgamiento de créditos para la vivienda, de los cuales más de la tercera parte es provista por el Banco Hipotecario Nacional. Esta situación es evidente si observamos que otras naciones de características similares a las nuestras destinan no menos del 15 al 20 por ciento del producto bruto interno para este objetivo.

Otro punto para analizar cuando se afirma la importancia de privatizar el Banco Hipotecario Nacional es la alegada necesidad de eliminar los riesgos derivados de administraciones deficitarias. Sin embargo, en la actualidad esto no es precisamente así, y ya fue remarcado en el curso de este debate. Sucede que el Banco Hipotecario ha dejado de ser un banco minorista para pasar a ser mayorista, según resulta de lo dispuesto por la ley 24.143. Canaliza los créditos hipotecarios a través de bancos minoristas, que son los que otorgan el financiamiento en forma directa.

Por lo tanto, con esta nueva operatoria, el potencial riesgo derivado de una mala administración que distribuya de manera equívoca o errónea los recursos es, prácticamente, nulo porque el Banco Hipotecario no atiende carteras de clientes en forma directa. Sin embargo, y al margen de la inconsistencia de los argumentos que se traen para justificar la privatización, no

debemos soslayar que un punto muy importante es el referido al papel que el Banco Hipotécaro ha venido jugando en los últimos años como entidad reguladora de las tasas de interés en los créditos para la vivienda, algo que, como se destacó, ha favorecido una baja de las mismas, pero que podría quedar sin efecto en el momento en que el banco se transforme en una entidad privada desprovista del interés social que el Estado, en general, y el Banco Hipotécaro, en particular, tienen que atender.

Si recordamos las palabras del señor presidente de la Nación, en la apertura de la Convención Nacional de Bancos organizada por ADEBA hace un mes, donde exhortaba a una reducción de las tasas de interés, puede concluirse a mérito de lo expuesto anteriormente que la existencia y el funcionamiento del Banco Hipotécaro en cuanto ente regulador de esa tasa es esencial para la correcta canalización de los fondos destinados al otorgamiento crediticio, evitando una suba indiscriminada del costo financiero para adquirir la vivienda.

Pero además hay un punto fundamental. No es cualquier banco el que aquí se va a privatizar. Acá no hay problema de desequilibrio de caja. Es la necesidad de un gobierno de obtener rápidamente fondos, que serán administrados en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objeto de realizar —según se proyecta— obras de infraestructura y de generación de empleo, definidas en forma general y distribuidas en función de los índices de coparticipación federal.

Pero no se debe olvidar, señor presidente, el efecto multiplicador que tiene la construcción de viviendas, que es superior —creo yo y lo creen muchos— al que pueden resultar de las obras de infraestructura.

No sólo es discutible quién potencia más la generación de empleo, sino también el hecho de que fondos provenientes de la venta de un banco destinado a financiar viviendas se destine para otro fin, máxime si se tiene en consideración que el déficit habitacional es muy elevado y que cientos de miles de familias carecen de techo propio.

En este punto no podemos olvidar que en la reforma constitucional del año 1957, que incorporó el artículo 14bis a nuestra Ley Fundamental, se previó expresamente entre los beneficios de la seguridad social que debe otorgar el Estado al acceso a una vivienda digna. A nadie escapa que la mayoría de la población carece de posibilidades económicas de adquirir una vi-

vienda con el solo auxilio de sus ahorros o de sus ingresos corrientes y por ello necesariamente debe recurrir al crédito hipotecario.

El evidente papel social que ha venido desarrollando el Banco Hipotecario, y que hizo posible que miles de argentinos pudieran concretar lo que la Constitución predica en ese artículo 14bis, constituye un factor de indudable peso para que, en nuestro carácter de legisladores y representantes del interés de los habitantes, ponderemos con especial cuidado y prudencia la posibilidad de privatizarlo.

Quizá algunos de los que me escuchan se estarán preguntando si el senador que habla es el representante del Partido Liberal en esta Cámara. Adelantándome a esa pregunta digo enfáticamente que sí, que soy representante del Partido Liberal, y muy fiel a sus postulados y principios, porque entiendo que la esencia del hombre es precisamente gozar de su libertad y luchar por su defensa. No puedo resistir la tentación de recordar en tal sentido las palabras de mi correligionaria, la diputada Pando, cuando en la Cámara de Diputados se trató este mismo proyecto de ley.

Leo textualmente de la versión taquigráfica de la sesión de mayo próximo pasado lo que dijo la diputada Pando: "Ser liberal no quiere decir ser irresponsable; ser liberal quiere decir liberar de las obligaciones al Estado, pero de aquellas que son secundarias, no cuando el rol fundamental del Estado no puede ser cumplido por otro. La preservación de la educación, de la seguridad, y del bien social protegido, que es la familia —y obviamente su vivienda—, no pueden ser delegados".

Más adelante, continuaba diciendo la diputada Pando: "Esta es una entidad que tiene que resolver el bien social de la vivienda de cada uno de los argentinos. Esto no es Telecom, no es YPF, no es Agua, ni tampoco es Energía. Se trata de la tranquilidad de treinta y tres millones, porque los que tenemos vivienda para vivir mejor, tenemos que tratar de que los que no la tienen la posean. Entonces, si creemos que en este recinto estamos privatizando un banco, nos engañamos; estamos privatizando el rol social fundamental del Estado".

Nadie puede negar que desde esta misma banca mi partido prestó su más sincero apoyo a todas las medidas que contribuyeron a modificar las bases económicas, jurídicas y administrativas de nuestro país. Lo hice con la convicción de que ese apoyo era indispensable, en aras del progreso de la Nación, para erradicar estructuras

vetustas que ponían freno a toda posibilidad de desarrollo. Así fue con las columnas vertebrales de la transformación que ha caracterizado a la actual gestión de gobierno, comenzando con las leyes de reforma del Estado y emergencia administrativa, la convertibilidad, la consolidación de deudas, las reformas fiscales; en fin, todo aquello que dio sustento al país que hoy tenemos, con moneda estable, ingreso de capitales, apertura económica, privatizaciones, competencia y crecimiento.

Pero claro está, subsisten problemas graves aún no resueltos, empezando por la desocupación que golpea duramente y trae desesperanza a una franja considerable del país.

Se ha dicho —y así surge del propio proyecto— que los fondos provenientes de esta privatización se destinarán a programas de obras de infraestructura, que al requerir mano de obra vendrían a paliar el déficit ocupacional. Pero realmente tengo muy serias dudas en este punto y si bien el objetivo es plausible, entiendo que la elección no es acertada, ya que no se justifica que el Estado se desprenda de una institución de carácter social que ha venido solucionando una necesidad básica de la población como es el techo, la vivienda.

En otras palabras, no creo que para crear fuentes de trabajo —objetivo que, reitero, comparto plenamente— sea indispensable o necesario privatizar nada menos que el Banco Hipotecario. Es ésta una institución que pertenece a la comunidad toda y la función social que desempeña es indelegable.

Considero que aun en calidad de banca mayorista el Banco Hipotecario presta un eficaz servicio en lo que hace al crédito para la vivienda. No es aconsejable desvestir a un santo para vestir a otro.

Otro aspecto que me crea dudas es el que se refiere al trámite parlamentario de este proyecto de ley. Si bien, en principio, las leyes pueden iniciarse en cualquiera de las cámaras, algunas sólo pueden tener origen en una de ellas y no en la otra, por expresas disposiciones constitucionales. En este proyecto se dispone, además de la privatización del Banco Hipotecario, la creación de un denominado “Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional” que, conforme lo expresa el artículo 4º, tendrá por objeto (leo textualmente): “asistir a las provincias y al Estado nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, El fondo tendrá carácter extrapresupuestario”. El artículo 8º aclara

que “El patrimonio del Fondo se destinará a la financiación de obras de infraestructura económica y social, nacionales y provinciales.

Y bien, señor presidente, como lo señala y dispone el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, entre las atribuciones que tiene el Congreso está la de “...promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.” Y agrega: “Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.”

En este aspecto, debemos reivindicar las atribuciones que la Constitución confiere al Senado, representante genuino de los intereses de las provincias.

No quiero hacer una cuestión de privilegio ni mucho menos, pero me hago eco de una observación que en este aspecto que señalo formuló también mi correligionaria, la diputada Pando, cuando se debatió este proyecto en la Cámara de Diputados.

No es mi intención cansar a la cámara con exhaustivas argumentaciones, así que iré concluyendo mi exposición.

Comparados los argumentos en pro y en contra de la privatización, creo que tienen más peso estos últimos, especialmente —vuelvo a repetirlo— por el indudable rol social que desempeña el Banco Hipotecario Nacional y la cláusula del artículo 14 bis con relación al acceso a una vivienda digna.

Es en este punto quizá, juntamente con el acuciante problema del desempleo, donde tenemos una de las asignaturas pendientes de la actual administración.

Debe quedar en claro que la reforma económica iniciada hace casi diez años y que ha posibilitado la transformación de la economía nacional, requiere en la actualidad el inicio de una nueva etapa en su afianzamiento definitivo; esto es, la necesidad de una cada vez más equitativa distribución de los recursos a los efectos de eliminar asimetrías económicas y sociales que puedan marginar de los beneficios del mercado a un importante número de argentinos.

Recuerdo en este momento unas palabras del señor presidente de la Nación, quien años atrás parafraseando a la ex primer ministro de Gran Bretaña, la señora Thatcher, expresó que aspiraba a un país de propietarios y no de proletarios.

Este es precisamente el espíritu que debe impulsar al Estado. Temo que con la privatización del Banco Hipotecario Nacional se esté llevando

a cabo un paso atrás en esta aspiración presidencial que, por cierto, comparto.

Por estas razones, fundamento mi voto negativo al proyecto que está en consideración.

**Sr. Presidente** (Villarreal). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan de la Cruzada Renovadora.

**Sr. Avelín**. — Señor presidente: no nos debe alarmar el tipo de política que estamos presenciando. Lo conocemos perfectamente bien: es un modelo que responde a un sistema y a una óptica diferente de la que pensamos muchos argentinos.

Pero yo creo que en un clima democrático, de respeto mutuo, hay que aceptar las diferentes opiniones y buscar el camino de la verdad para ver cómo es posible lograr la grandeza del país y los grandes objetivos nacionales.

Considero que al privatizar el Banco Hipotecario Nacional estamos sacando el alma y el espíritu social de toda la Nación Argentina, porque el Banco Hipotecario Nacional es expresión social, es espíritu, es columna, es vibración de anhelo y de esperanza de millones de argentinos para cubrir toda la extensión de nuestro territorio.

Durante los 111 años de vida del Banco Hipotecario Nacional pasaron por la vida del país muchos presidentes; presidentes de envergadura, presidentes con concepción nacional, presidentes con objetivos claros —entre ellos, Pellegrini, Yrigoyen, Perón, Frondizi e Illia—, presidentes que trabajaron para y por el país, y que respetaron esta institución de profunda proyección nacional.

Se habla de las economías regionales. Pero las economías regionales deben contar con el estímulo de la banca nacional; deben contar con el estímulo de lo que significa el desarrollo integral del país en el agro, en la minería, en la industria y en la ganadería.

Nuestros hombres del interior están esperando una política de expansión y de desarrollo a través del estímulo bancario. Y el estímulo bancario lo dará la banca nacional; no la banca internacional o la de las multinacionales que agobian, destruyen, disgregan, aprietan y marginan esperanzas populares.

Por eso considero que vamos a cometer un tremendo error —lo digo con todo respeto hacia el proyecto de la mayoría—, porque indudablemente va a desaparecer el sueño de la casa propia; el sueño que dignifica la esperanza de tantos sectores de la vida nacional que esperan algo más y mejor.

Encontramos villas miseria, encontramos marginación, encontramos pobres, encontramos asalariados que ganan poco —casi nada— y que trabajan poco —o casi nada— como consecuencia de la desocupación imperante.

Se habla de la existencia de la corrupción. ¡Claro que existe corrupción! Pero a la corrupción hay que eliminarla, hay que desterrarla, es necesario arrancarla de cuajo. Y tenemos capacidad para hacerlo.

En el país existe reserva moral suficiente para eliminar de cuajo la corrupción que está entroncada en muchas instituciones. ¿O no son corruptas las multinacionales? ¿O no son corruptos los monopolios que estrangulan la vida de los pueblos, que aprietan y que succionan el esfuerzo nacional?

Debemos comenzar a trabajar con lo que tenemos: con los argentinos, para que las instituciones tengan el aval moral y el de los hombres que luchan, que sueñan y que predicán objetivos de grandeza para el país.

El Banco Hipotecario tiene una ganancia anual de aproximadamente 300 millones de pesos que vamos a regalar, que vamos a privatizar. Vamos a dejar en manos ajenas una herramienta social que puede posibilitar el acceso a la vivienda de millones de argentinos.

Muchos de ustedes recordarán la famosa prima implementada durante la época de Evita, cuando se ofrecía estímulo bancario a millones de argentinos para comprar su terreno y construir en ellos la vivienda propia. Fue así como muchos argentinos lograron acceder al sueño de la vivienda propia durante aquella época, estimulados, beneficiados, respaldados y orientados por créditos bancarios a largo plazo y con baja tasa de interés.

Ahora, señor presidente, vamos a despreciar esta herramienta privatizando este banco; y ni siquiera sabemos a qué valor. Algunos hablan de 2.000 o 3.000 millones; otros, de 1.800 millones. Y es posible que tratemos de obtener recursos de otras fuentes para ver si podemos brindar al Fondo Monetario Internacional lo que nos está exigiendo.

Seguramente, se va a efectuar una consulta con el Fondo Monetario Internacional para ver si con este fondo fiduciario se podrán cumplir los objetivos previstos en este proyecto de ley. Y si el Fondo dice: "No, señores: hay que pagar los intereses de los intereses; hay que cumplir con la banca internacional; hay que privatizar", entonces el dinero deberá ir a manos y bancos ajenos.

Por eso, señor presidente, sostengo que estamos a punto de cometer un tremendo error; no lo hagamos. Comencemos a defender nuestras instituciones; abarquemos la geografía nacional; brindemos apoyo a los sectores alejados, sobre todo en el interior del país. Bien dijeron los representantes del sur que están totalmente marginados y olvidados. ¡Cuántas cosas podríamos explotar en el sur argentino, estimulando la producción y el trabajo creativo, con un desarrollo armónico y positivo a través de la banca oficial! Tenemos un enorme potencial económico en agricultura, ganadería, minería, en hidroelectricidad, en la marea motriz, en la gran plataforma submarina de un millón de kilómetros cuadrados que podría posibilitar la industrialización de la pesca argentina. ¡Cuántas cosas podríamos hacer con el estímulo de la banca nacional! Y estamos detenidos. ¡Claro! La banca nacional nos presta y nos sigue prestando plata, y cada vez estamos más endeudados y debemos seguir pagando intereses sobre intereses. Estamos ahogados y oprimidos. Estamos atravesando una encrucijada de la que es muy difícil salir porque si la economía no se ensambla con la parte social, indudablemente, habrá dos Argentinas: una opulenta, para unos pocos en los que se concentrará el poder económico, y la Argentina sumergida, marginada, raquítica, enflaquecida y subterránea que espera la decisión política de los gobernantes para que miren para adentro y no únicamente del puerto hacia afuera.

Por eso, señor presidente, considero que para desterrar la desocupación y las villas miseria, para dar trabajo a los argentinos, y para que exista un estímulo real no debemos privatizar la herramienta social que tenemos en nuestras manos y que produce un superávit bastante importante para multiplicar las reservas que necesita nuestro país y que puede proyectar la creación de fuentes de trabajo. ¿Acaso la construcción no es una fuente de trabajo, no es un estímulo para dar ocupación a millones de argentinos? Debemos tener albañiles, encofradores, carpinteros, obreros, ingenieros, arquitectos, transportistas, azulejistas, ceramistas y una industria multiplicada a través del desarrollo de la construcción de viviendas.

Por ello, no ahoguemos las esperanzas nacionales. Veamos cómo podemos modificar este modelo de claudicación, de sometimiento, de permanentes empréstitos y que puede llevar a muchas generaciones a una desgraciada situación que no permitirá proyectar el desarrollo que requiere, precisa y necesita nuestro país.

Hay que industrializar el país. Hay que multiplicar las reservas económicas. Debemos hacer que la industria sea el eslabón para evitar la desocupación. Corea del Sur tiene cien mil kilómetros cuadrados —la misma cantidad de mi provincia, San Juan— y lo único que produce es arroz. Sin embargo, exporta cien mil millones de dólares. Nosotros, que tenemos tres millones de kilómetros cuadrados, con un potencial extraordinario en materia energética, con ríos, montañas, mesetas, llanuras, agricultura, ganadería, estamos totalmente oprimidos y huérfanos para posibilitar una estructura que desarrolle el país y lo ensamble con la justicia social. Todos pregonamos y queremos justicia social; inclusive, hoy hemos rendido un homenaje a quien fue bandera de la justicia social, Juan Domingo Perón. ¿Pero habrá justicia social cuando privaticemos el Banco Hipotecario? ¿Van a dar créditos a largo plazo y bajo interés? ¿Van a permitir que un obrero, un hombre pobre, que sueña con la casa propia, tenga una vivienda? No nos hagamos ilusiones, no seamos ingenuos. El capital internacional no tiene frontera, no tiene alma, ni espíritu, ni solidaridad. No le importa ni le interesa el sufrimiento de los pueblos.

Por ello, le pido a la bancada justicialista, que tiene una fuerte doctrina social y nacional, que no se embarque en esta política de privatizar. Por lo menos, dejemos de privatizar para que de esa manera el pueblo empiece a creer y tener fe en la concepción nacional que todos queremos y pretendemos.

Para terminar, quiero decir que éste es un tipo de política que yo no acepto.

Respeto, por supuesto como dije al principio la óptica de cada uno dentro de este clima democrático. No estoy en contra de hombres o de personas, estoy en contra de esta política que nos está llevando a marginaciones muy lamentables.

Si usted viera el hambre que hay en las provincias, señor presidente; si usted viera la desesperación que tienen muchos niños. ¡Cinco pesos por día gana un obrero! Y trabaja tres días por semana. Ha aumentado la tuberculosis, han aumentado los abortos en el claustro materno por falta de alimentación. Los hospitales están disgregados y sin posibilidades de ser equipados.

He pedido un tomógrafo para un hospital público de San Juan, y lo han negado, lo han postergado. Me pregunto entonces muchas veces si el pobre que se accidenta y que padece un traumatismo craneo-encefálico, irremediablemente tiene que morir porque no tiene la posi-



bilidad de acceder a un diagnóstico eficaz y a una terapéutica apropiada.

Todo esto está ocurriendo y es por eso, señor presidente y señores senadores, que debemos hacer el esfuerzo de modificar esta situación, respondiendo a la Nación y a las aspiraciones populares.

Millones de argentinos están esperando una actitud valiente y decidida; debemos ponernos de pie, no claudicar y responder a nuestras ideas, a nuestra doctrina y a nuestras convicciones.

Sé que muchos senadores y mucha gente piensan con un sentido nacional en la Patria y en los objetivos que el país viene reclamando. Quizá haya quienes miran de reojo y no dan importancia a lo que significa la fe y el volcán de sentimientos del pueblo argentino.

La gente pobre, los que no tienen nada están trabajando por el país. Entonces, nosotros debemos hacer algo por el país.

Por último, señor presidente, voy a solicitar la inclusión de un trabajo en el Diario de Sesiones.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — ¿Usted está solicitando una inserción, señor senador?

**Sr. Avelín**. — Así es, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Oportunamente será sometida a votación.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Ulloa**. — Señor presidente: creo que participar en este debate es, en cierta forma, predicar en el desierto, y no sólo por lo desierto del recinto, sino porque existe ya una decisión política de aprobar este proyecto sin aceptar ninguna modificación.

Este es un proyecto que lleva un título importante: "Ley de desarrollo regional y generación de empleo". Realmente es un título cautivante para nuestra Argentina, tan necesitada de desarrollo y de empleo.

Peró, lamentablemente, a medida que uno se va introduciendo en la lectura de esta iniciativa, empieza la decepción.

El desarrollo regional se puede lograr si conseguimos una redistribución de la inversión en el espacio geográfico nacional, para poder compensar así las desigualdades que, a lo largo de los años, han ido produciendo un desarrollo desparejo.

Cada vez que oímos la palabra regional nos suena a regiones apartadas que necesitan, más que nunca, su desarrollo. Sin embargo, cuando vamos a los hechos nos encontramos con que se

trata, en definitiva, de un crédito que hay que devolver; de un crédito cuya devolución y utilización se debe garantizar mediante la coparticipación federal, en plazos que no sabemos y para obras que no tenemos claras, y en donde, en definitiva, las provincias simplemente reciben lo que la ley de coparticipación federal establece.

Al modificarse la Constitución Nacional, aquellas provincias que tenemos un índice de necesidades básicas insatisfechas muy alto, creímos, con mucha esperanza, que con aquella ley había llegado nuestra hora, la hora de la justicia federal, en el sentido de la reparación de aquellas desigualdades que la historia y la evolución de la economía fueron introduciendo.

Pero no. Este proyecto de ley simplemente le da más al que más tiene y menos al que menos tiene, porque se cumple estrictamente con la ley de coparticipación federal. Es decir que, en el mejor de los casos, seguiremos con la misma brecha de desarrollo que el resto de las provincias; no hay una compensación que nos pueda interesar.

Este es un primer aspecto que quería comentar, al margen también de señalar que queda poco claro el contralor de la utilización de estos fondos, con la existencia de un sistema extrapresupuestario y de comisiones especiales.

El segundo aspecto que quiero comentar es el vinculado con el origen de los fondos, para cuya obtención tenemos que enajenar una institución que ha tenido especial importancia en nuestro desarrollo.

Y en esto también vuelve a frustrarse la esperanza que indica el título de la iniciativa, es decir, "ley de desarrollo regional y generación de empleo".

Quisiera hacer un comentario muy simplista. Se trata de vender el Banco Hipotecario en el orden de los 2 mil millones de pesos, cifra que colocada a tasa Libor implica un interés de 120 millones por año. Pero ocurre que el Banco Hipotecario, que es una inversión de todos los argentinos, produce 300 millones de dólares por año. Entonces, en esto hay algo que no funciona.

Cuando analizamos la ley de privatización, tuvimos en cuenta la situación coyuntural de las instituciones que íbamos a privatizar, que normalmente daban pérdida, y era el pueblo argentino quien con sus impuestos estaba sosteniendo estos ineficientes organismos; pero, como ya se dijo aquí, éste no es el caso.

El Banco Hipotecario fue creado en 1886, bajo la presidencia del general Julio Argentino Roca, con la idea de formar una entidad fuerte para fo-

mentar la construcción, la vivienda propia, el crédito hipotecario y la atención de préstamos a largo plazo con garantía real, y tomó como modelo al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Pero pareciera que los avatares de la historia le concedieron a la provincia de Buenos Aires más suerte que al resto de los estados federales, porque aquella entidad que nació tomando como modelo al Banco de la Provincia de Buenos Aires, hoy viene a agotarse y a morir antes que su par, que continúa siendo un instrumento de desarrollo en manos del Estado.

Ya sabemos que el banco fue un intermediario entre el inversionista que compraba las cédulas hipotecarias y el deudor que las tomaba.

De todas maneras, el Banco Hipotecario tuvo sus crisis. En efecto, en 1890 una tremenda crisis económica hizo que el banco estuviera a punto de naufragar, pero hubo una firme decisión política, y así, en 1891, el Estado le entregó 5 millones de pesos y así salió a flote y superó la crisis, para seguir siendo el instrumento que sirviera para concretar las esperanzas de miles y miles de personas de clase media —que hoy están tan vapuleada—, que soñaban con tener una casa propia y que ya en 1890 estaban definiendo el destino y la característica de la sociedad argentina: una clase media fuerte, pujante, de gente que vino aquí a “hacer la América”, a trabajar, a construir nuevas familias. ¡Cuántos de nosotros venimos de ese esfuerzo, de ese tremendo esfuerzo que el Banco Hipotecario apañó a lo largo de los años!

Luego vinieron diversas modificaciones que se fueron haciendo en la política económica.

En 1946, por ejemplo, cuando se produce la nacionalización de los depósitos, este banco se convirtió en la única entidad que podía dar créditos. De todos modos, ésta fue una mala política, porque cuando hay un monopolio, el que lo controla termina siendo ineficiente.

Después, en 1957, se abrieron nuevamente los créditos hipotecarios a través de la sanción de una ley de bancos.

En 1973, por su parte, el Banco Central implementó un nuevo régimen de préstamos hipotecarios.

Pero a lo largo de estos avatares, de estas continuas variantes en la legislación, el Banco Hipotecario permaneció siendo la esperanza para poder solucionar el problema de la vivienda. Fue un instrumento de desarrollo social. Yo mismo he construido mi casa con un préstamo del Banco Hipotecario. De manera que no

puedo negar la influencia de esta institución en nuestro desarrollo social y económico.

A partir de 1974 y 1975, el país se sumergió en una tremenda crisis de inflación y de hiperinflación, que estuvo a punto de hacer naufragar al banco. Pero sobrevivió. Restringió su accionar, porque aquellos coeficientes de actualización que se utilizaban para compensar la inflación distorsionaban todos los valores y se hacía imposible trabajar. Pero, con todo, el banco se mantuvo. Con errores, a veces con corrupción, mas el instrumento estaba ahí, latente, permanente, para poder utilizarlo con una finalidad social.

En 1992/93 se produce una modificación sustancial: se convierte en banco mayorista. Deja de estar en el detalle, en el planito de la casa, responsabilidad que pasa a ser del banco que da el crédito. Sin embargo, el banco mayorista —es decir, el Banco Hipotecario— es el que fomenta el desarrollo del crédito. Y fíjense que gracias a su incursión agresiva en el mercado hipotecario, logró una baja en las tasas de interés, que estaban en el 18 por ciento a pesar de la estabilidad. O sea, aun con la ley de convertibilidad en vigencia, se pagaba el 18 por ciento de interés y a veces más. Pero bajó por la tasa testigo. Y como bajó la tasa el Banco Hipotecario, tuvieron que bajarla el resto de los bancos.

Así llegamos a la situación actual, con un banco que tiene 2.780 millones de dólares de valor libros, que no sabemos en cuánto se va a vender, que ha dado beneficios por 300 millones de dólares y que controla el 40 por ciento o más de los créditos hipotecarios.

Sin embargo, ahora el Poder Ejecutivo decide desprenderse de esta magnífica herramienta, en el momento en que es eficaz, en el momento en que no tiene problemas.

Quizás la política de privatización, que yo he compartido y apoyado, era necesaria, pero para privatizar estaba además el estímulo de sacarse de encima la tremenda carga que significaba el déficit de las empresas del Estado. Mas no es éste el caso. El Banco Hipotecario es una herramienta eficaz, que nosotros estamos en condiciones de usar y que hemos sabido utilizar los argentinos, nuestro gobierno. Sin embargo, curiosamente la desechamos.

Ahora son otros los argumentos que se invocan. El señor jefe de Gabinete de Ministros, contestando preguntas de los señores senadores, manifestó cuál era la finalidad de la privatización del banco: constituir un fondo para obras. Ahora bien, desde el punto de vista de las provincias, no existe ninguna diferencia entre un crédito in-

ternacional y éste, ya que las provincias pueden sacar un crédito internacional con el respaldo de la Ley de Coparticipación Federal, pagando la tasa Libor o algún punto más. Este crédito cuesta lo mismo.

También se habla de la imposibilidad de capitalizarlo en los próximos años, más allá del crecimiento que va a tener la operación de créditos hipotecarios. Esto no es tan así. Bien puede emitir títulos públicos y empezar a captar toda esa plata que va a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones —las AFJP—, que tendrían una buena oportunidad de contar con garantías reales a través de la canalización de sus ahorros en el Banco Hipotecario Nacional.

Pero aquí también hay otro objetivo que estimula la privatización, que no critico. Es el interés, legítimo por cierto, de los sectores financieros nacionales e internacionales que quieren tomar el control de un brillantísimo negocio financiero como lo es en este momento el del Banco Hipotecario Nacional. Esto también hace que el *lobby* de estos sectores esté permanentemente formando opiniones y dando razones para que se privatice este banco.

Pero el banco no es una entidad financiera más. Reitero: tiene una función social absolutamente necesaria como tasa testigo en el mercado financiero del crédito inmobiliario, especialmente hoy, cuando la clase media tiene tantas dificultades para obtener financiamiento.

Y esta función social no es de ningún modo menos importante que la que podría significar el desarrollo regional y la generación de empleo, aun en el caso en que realmente se hicieran bien las cosas, aun en el caso en que este desarrollo regional sirviera para equilibrar el desarrollo de la Nación, cosa que no sucede con este proyecto, como lo he explicado anteriormente.

Otro aspecto importante a considerar que siempre estubo en el debate público cuando se habló de privatizaciones es el destino de los fondos. Desde que se inició el proceso de privatización, todos —tanto el oficialismo como la oposición— creímos que con esto íbamos a achicar la deuda pública, sobre todo la deuda externa, y no ha sucedido así, sino al contrario.

Cuando el otro día analizaba la cuenta del ejercicio 1995, la última que se ha publicado, y la evolución de los ejercicios actuales, en un trabajo que realicé, observaba que en los últimos meses se había incrementado la deuda en mil millones de pesos por mes. Es decir que al ritmo en que se ha incrementado el endeudamiento en los últimos meses, lo que eventualmente po-

dríamos obtener por la venta del Banco Hipotecario compensaría ese endeudamiento. En 1991 hablábamos de 60 mil millones de pesos de deuda externa.

El último dato preciso fue uno que dio el jefe de Gabinete de Ministros: 98.255, es decir cien mil millones. De 1991 hasta este año la deuda ha crecido un 67 por ciento.

De manera que aun desde el punto de vista de sacarnos de encima este tremendo peso de la deuda externa, que nos lleva este año en intereses el 14 por ciento de todo lo que recauda el Estado nacional, no es solución. Apenas compensamos tres meses de endeudamiento.

No voy a incursionar en el análisis de la ley porque como podrán inferir de lo dicho hasta ahora, mi voto es negativo para esta iniciativa que propicia el paso a manos privadas de esta institución.

Quiero recordar que estuve ayer por la mañana en la apertura de las jornadas de ABRA. El señor presidente de la Nación, en una actitud que comparto plenamente, reiteró una vez más la necesidad de que el sistema financiero baje las tasas. Esto lo viene repitiendo, pero la baja de las tasas no es simplemente la vocación o la decisión política del señor presidente sino que tiene que ser la respuesta del sector financiero.

Y las tasas no bajaron. Solamente bajaron las tasas hipotecarias cuando el Banco Hipotecario Nacional salió a competir y a presionar hacia abajo con las tasas. Entonces sí se obtuvieron resultados. Fue la única vez en que las tasas bajaron, y estamos a punto de deshacer al organismo que lo logró.

Yo me animaría a analizar otra alternativa, por lo menos quizá con la intención de manejar sueños. El Banco ha ganado 300 millones de dólares. Supongamos por un momento que 200 millones de esos 300 los destináramos a subsidiar —no es pecado esta palabra en ciertos casos— tasas de interés para créditos destinados a la pequeña y mediana empresa.

Supongamos que llegemos a subsidiar diez puntos de interés para la pequeña y mediana empresa que genere empleo. Tendríamos una masa crítica de dos mil millones de dólares de créditos.

Es bien sabido que una gran empresa necesita invertir 150 mil dólares para crear un puesto de trabajo y que una pequeña empresa hace lo mismo con la décima parte o menos. Con diez o quince mil dólares una pequeña o mediana empresa puede crear un puesto de trabajo.

Italia salió de la crisis a través de las PYMES, con una política inteligente de apoyar a la pequeña y mediana empresa. Yo oí hablar muchas veces del apoyo a estas empresas. Ahora tenemos una brillante oportunidad de hacerlo.

Quisiera hacer unas últimas reflexiones. No estoy con esto propiciando la dádiva, el distribucionismo o el clientelismo político —bastante nos costó esa política distribucionista, a veces irresponsable— sino tratando de dar una solución concreta al tremendo y grave problema del desempleo.

Hace unos días estuve leyendo con atención el informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas. Realmente posee una dramática elocuencia cuando expresa un concepto que reitera a lo largo del desarrollo del trabajo. Dice que lamentablemente la idea de que la riqueza se filtra desde arriba hacia los estratos más bajos de la sociedad ha fracasado y que se necesitan políticas activas para poder distribuir la riqueza, porque si no queda en manos de los poderosos. De manera que para hacer políticas activas necesitamos instrumentos, como lo es éste.

Debo decir, a fuer de ser sincero, que la macroeconomía anda bastante bien. Al respecto, debo reconocer el invalorable aporte de la gestión del gobierno actual. Pero en la microeconomía vive la gente.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide**. — Señor presidente...

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Señora senadora: le solicita una interrupción el señor senador por el Chaco. ¿Se la concede?

**Sra. Fernández Meijide**. — Sí, como no.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León**. — Señor presidente: voy a perturbar un poco el desarrollo de la sesión. Simplemente quiero decir que estoy anotado en la lista de oradores pero me debo retirar, por lo que no voy a hacer uso de la palabra. Por eso pido que se inserte en el Diario de Sesiones un trabajo sobre el proyecto en consideración. Es la primera vez en mi vida parlamentaria que pido esto.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Oportunamente lo resolverá el cuerpo, señor senador.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por la Capital.

**Sra. Fernández Meijide**. — Señor presidente: voy también voy a insertar la mayor parte de mi

exposición. Por eso sólo voy a referirme a algunas cuestiones, ya que encuentro graves deficiencias y contradicciones en el proyecto de ley en consideración, que seguramente va a ser ley.

En primer lugar, no se define quién se ocupará de las cobranzas de los institutos provinciales de vivienda, de quienes actualmente actúa como mandatario el Banco Hipotecario Nacional. Si la cobranza que hoy hace dicha institución quedase en poder de bancos privados, seguramente los costos de cobranzas serán elevados y deberán pagarlos los actuales deudores.

Si a ello le sumamos que es posible que se demoren las rendiciones por la propia naturaleza de los convenios de cobranza bancarios vigentes en plaza y por los deficientes controles internos que tienen actualmente los institutos provinciales, se estaría permitiendo la colocación financiera de corto plazo de importantes recursos por parte de los grupos privados. Es decir, se favorecería aún más a los bancos privados.

Por otra parte, no se contempla en el proyecto el pase de personal a otros organismos, tema sobre el que se venía hablando bastante con los representantes del Banco Hipotecario. Entonces, nos vamos a encontrar seguramente ante un nuevo caso de privatización seguido de desempleo, con lo que aumentará la cantidad de desempleados.

En el artículo 21, inciso f), del proyecto se da derecho a la asamblea de accionistas de la clase B —acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada— a elegir un integrante del órgano de administración de la sociedad, mientras esa clase represente más del 2 por ciento del capital de la sociedad.

Esto es inaceptable porque lo que quiere el personal es tener una fuente laboral segura y mantener o mejorar las condiciones salariales y de trabajo. No quiere acciones y representación, minoritaria en todo caso, que no pueden modificar las decisiones de los grandes grupos económicos que manejarán la sociedad. Es decir, en todo caso, estaríamos ante una decisión hipócrita.

Existe una contradicción entre los artículos 20 y 21 en lo relacionado a las acciones clase A, que son las de propiedad del Estado nacional.

El primer artículo, el 20, establece que el Estado deberá conservar como mínimo una acción de dicha clase, mientras que el segundo, en su inciso c), establece el derecho del Estado nacional, mientras conserve al menos una acción, a nombrar dos directores y un síndico. Este inciso no se puede explicar si siempre conservará como

mínimo una acción. Por otra parte, si no conserva como mínimo una acción, no puede ejercer los derechos establecidos en el artículo 21, inciso a).

Si el Estado pierde la mayoría del capital, pierde también la facultad de aprobar los estados contables del banco. Quizás, el mayor problema sea lo que ocurra en este proyecto con la actual cartera deudora.

A partir de la sanción de la llamada ley de saneamiento del Banco Hipotecario Nacional, se dio lugar al aumento de la tasa de referencia anual al 9 por ciento y a la capitalización de intereses.

La aplicación inadecuada de las nuevas pautas financieras dio lugar a distorsiones gigantescas en los montos adeudados por cada familia. El valor de lo adeudado, aun descontando el monto de deuda cancelada, supera en muchísimos casos el valor de la vivienda que garantiza el crédito. Esto está pasando en muchos lugares del país y hay numerosas familias muy desesperadas por esta situación.

A principios de este año presenté un proyecto de comunicación por el que solicitaba que el Banco Hipotecario Nacional hiciera un recálculo de las deudas a partir del establecimiento del valor de mercado de las viviendas, al cual había que deducirle lo efectivamente pagado hasta la fecha. El monto resultante tenía que ser refinanciado con tasas y plazos adecuados a la familia deudora. Esto estaba dirigido a corregir la situación de numerosos conjuntos de viviendas de la ciudad de Puerto Madryn, reclamo que había llegado hasta mi despacho.

La comisión que aprobó el dictamen, que luego fue sancionado por este cuerpo, lo hizo extensivo a todo el país. Esto ocurrió hace muy pocos meses. Pero en el proyecto de ley en consideración el recálculo se hará sobre el valor venal, que será establecido por el Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Esto es contradictorio con el proyecto de comunicación. Si se vota el proyecto de ley en consideración, se estará borrando lo que se aprobó hace pocos meses, aunque se deja un resquicio abierto para discutir el valor venal "ante discrepancias debidamente fundadas".

En este caso, el Banco de la Nación Argentina y los colegios profesionales vinculados a la construcción de cada jurisdicción, que son los organismos más apropiados para realizar peritajes y tasaciones relacionados con lo que tratamos, serán los que determinen este valor venal. Pero considerando la cantidad de casos en esta situa-

ción, más de 70 mil, y el plazo para presentar las "discrepancias", de sólo sesenta días, nos podemos imaginar el caos administrativo que resultará de estas disposiciones y, por lo tanto, la inviabilidad de las mismas.

En síntesis, no dudamos de que el Banco Hipotecario Nacional precise "fondeo", especialmente para respaldar las operatorias referidas a la titulación de hipotecas y financiamiento de emprendimientos constructivos con transmisión de dominio fiduciario. Pero creemos que la evolución de la entidad, como banco estatal o como sociedad anónima de capital mixto o privado, debería plantearse y discutirse en el marco de una política de vivienda nacional explícita, clara y creíble. De no ser así, la contradicción entre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional y esta política expresada en los documentos y presentaciones oficiales hasta hoy, lamentablemente sólo confirmaría su precariedad y, desde luego, la sospecha —que es legítima— de que esta venta se ha hecho exclusivamente para pagar una campaña electoral.

Estos son los motivos por los que rechazo el presente proyecto de ley. En cuanto al resto de mi exposición, voy a pedir que se inserte.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** — Señor presidente, señoras y señores senadores: debo comenzar diciendo —aunque no quisiera hacerlo porque lo que diré tiene aspecto de queja, lo que no sirve para mucho— que este proyecto, que fue girado también a la Comisión de Economía, no llegó a ella, si bien muchos senadores que la integran —y que forman parte de otras comisiones— lo suscriben. Son malos precedentes que se vienen repitiendo y por esto lo señalo.

¿Cómo poder brindar un panorama de cómo este sector político ve este proyecto de ley? Si observamos el panorama político, social y económico, deberemos tener en cuenta algunos aspectos para lograr una visión adecuada del problema.

Hace pocos días un asesor del presidente norteamericano estuvo en la Argentina por el tema del empleo. Decía que en el siglo que viene se prevé un mundo sin empleo en la forma tradicional que nosotros lo vemos hoy y que posiblemente sociedades intermedias, agrupaciones solidarias, a través de subsidios del Estado, vayan a ser los principales generadores de empleo.

Esto requiere obviamente un Estado fuerte, con instrumentos poderosos de política económica, para poder llevarse a cabo; no el Estado

ausente o prescindente que este modelo económico se ha propuesto en el país.

Hace pocos días llegó al país el presidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, a decirnos que, luego de observar la realidad económica del país, éste necesitaba políticas solidarias importantes, políticas activas de empleo para poder garantizar el bienestar a los sectores que estaban quedándose marginados del proceso y del sistema social argentino.

Ayer, en una reunión de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, empresarios españoles nos hacían notar que, solamente las sociedades de garantías recíprocas habían podido surgir en el mundo a través del subsidio estatal, con un Estado fuerte, obviamente, con herramientas financieras y económicas poco importantes que dieron apoyo en sus inicios a las pequeñas y medianas empresas y que garantizaron con un aporte de capital su surgimiento, asegurando su acceso al crédito bancario.

En la misma charla nos hacían notar que en el siglo que viene, aproximadamente para el 2030, la principal lucha en el mundo será por el agua. Esto requiere también un Estado fuerte y poderoso, que garantice que este vital elemento para la vida humana llegue al conjunto de la población.

En el contexto de la política nacional y cuando nos acercamos a una elección legislativa, los análisis hacen prever que el partido oficialista puede llegar a tener alguna disminución importante en sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Este hecho quizá lo obligue a lograr consenso en la instrumentación de políticas. Desde el propio sector del partido oficial, los candidatos que aparecen mejor instalados como para lograr una renovación de autoridades en el gobierno nacional en 1999 están señalando que necesitan instrumentos económicos importantes: un Estado un poco más fuerte y más activo en la intervención de políticas económicas y sociales que redunden en una mayor equidad. Son los candidatos que se vislumbran desde el propio partido oficialista quienes están señalando esto.

En este contexto estamos aprobando la privatización de una de las principales herramientas político-financieras que le quedan al Estado nacional: el Banco Hipotecario. Cien años de historia; un millón o más de viviendas construidas en el país; institución superávitaria que en este momento genera recursos importantes, convertido en banca mayorista, esquivando los riesgos que significa ser prestatario de primera ins-

tancia. Porque la banca minorista es la que está garantizando que esos fondos vuelvan al Hipotecario y éste sea todavía una palanca de desarrollo importante para generar vivienda, lo que en definitiva es una herramienta fundamental para generar empleo en el país.

Por esto —y no porque quizás haya alguna inconstitucionalidad en la ley, una norma que no nos gusta o que choca contra otra, o porque tengamos el capricho de levantar una voz opositora o marcar una diferencia— es que venimos a decir que estamos absolutamente en contra de esta privatización encubierta bajo el epígrafe de una ley “para el desarrollo regional y la generación de empleo”.

Quiero recordar que ya tuvimos una ley de empleo con pésimos resultados, allá por 1991. Aquella ley no generó empleo. Aparentemente, tampoco ésta va a generarlo, tal como lo han destacado muchos señores senadores en este recinto durante el transcurso de esta sesión.

Un economista del *establishment*, Walter Graziano, ha escrito un artículo que luego fue contestado parcialmente por el jefe de Gabinete de Ministros. Allí dice que se privatiza lo que no existe, porque lo que se privatiza no es el Banco Hipotecario Nacional sino el monopolio y los privilegios del monopolio que tiene el Estado, cuando éste es el responsable de generar una herramienta de desarrollo importante para el país como es el Hipotecario. Walter Graziano no pudo desmenuzar en ese artículo el conjunto de estos privilegios, pero decía que se privatizaba un tratamiento impositivo diferencial que tiene el Banco Hipotecario, que no paga diversos impuestos en sus operatorias de crédito; que lo que se estaba vendiendo era el cobro extrajudicial de las hipotecas, que no tiene el sistema bancario pero sí el Banco Hipotecario Nacional; que lo que se estaba vendiendo era la posibilidad de imponer seguros a los prestatarios y, con esto, generar una cartera subsidiaria, una clientela segura que generara ganancias para quien comprara el banco; que lo que se estaba privatizando era el privilegio de que goza el Estado en cuanto a que los créditos del Banco Hipotecario Nacional —respecto de sus cancelaciones—, cuando deben hacerse operaciones escriturales en los registros de propiedad, no pagan honorarios y se realizan mediante actas del propio banco.

Entonces, el señor jefe de Gabinete de Ministros le refutó las primeras dos objeciones que había hecho Graziano a esta privatización, diciéndole que el tratamiento impositivo diferencial sólo se produciría hasta que se terminara de

cobrar la cartera de créditos ya otorgada al momento de la privatización y que el cobro extrajudicial de hipotecas iba a caer, porque el proyecto había sido modificado en la Cámara de Diputados de la Nación; y cabe señalar que eso le había costado la vicepresidencia del bloque oficialista al hombre que la detentaba, por oponerse terminantemente a que esa cláusula fuera insertada en la ley de privatización del banco.

Pues bien, uno dice: se terminaron los privilegios. No es así, porque continúa el tema del seguro, respecto del cual podrá operar como una banca aseguradora sin los controles con que cuenta una compañía aseguradora en el país y sin el cumplimiento del requisito de tener un fondo determinado en garantía de los seguros que otorga.

Ese privilegio sería transferido a un ente privado y se decía que por eso iban a obtenerse los 1.800, 2.000 o 3.000 millones de dólares que algunos de los señores senadores preopinantes señalaron como posible precio de venta del Banco Hipotecario Nacional.

Personalmente, estudié con cierta profundidad este tema y puedo decir que son muchos más los privilegios monopólicos de que gozará quien compre el Banco Hipotecario Nacional. Seguirá teniendo el privilegio de que sus créditos y los inmuebles que estén afectados a ellos serán inembargables por parte de otros acreedores, porque el artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional continuará vigente.

Además, tendrá un privilegio especial, del que no goza ninguna otra entidad bancaria del país, respecto de la cobranza de los créditos que otorgue en caso de falencia; se trata de un privilegio que está por sobre los sistemas de privilegios establecidos en el Código Civil de la República Argentina. Va a ser agente de retención de impuestos. Tendrá derecho a ampliar la hipoteca prácticamente cuando quiera, lo cual figura en el artículo 41 de la Carta Orgánica, que se transferirá, con este monopolio, a quien lo compre. Tendrá la posibilidad de quedarse con la propiedad subastada en caso de subastas fracasadas, por el valor a que fue ofrecida en venta, por el artículo 45 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional que, como dije, seguirá vigente.

Por otra parte, el propio banco actuará como martillero y cobrará la comisión que como tal le corresponde en caso de subasta, porque el artículo 47 de la Carta Orgánica continuará en vigencia.

Lo que contestó el señor jefe de Gabinete de Ministros no alcanza a refutar las afirmaciones del citado economista —que no pertenece a mi partido, sino que responde en general a los lineamientos del plan económico en vigencia—, que básicamente ha formulado críticas a esta iniciativa y ha manifestado que lo que se habrá de privatizar es un privilegio, razón por la cual habrá acreedores.

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional no tendrá la posibilidad de contralor legislativo por parte de este Congreso nacional porque el fondo tendrá carácter extrapresupuestario. Y, curiosamente, la comisión cabecera de este Senado de la Nación, que es la de Presupuesto —el tema fue girado pero no llegó a la Comisión de Economía— es la que está aconsejando que ellos no tengan el control del fondo que se va a crear.

Pero en las jurisdicciones provinciales tampoco va a ser controlado por las Legislaturas ya que el inciso c) del artículo 9º establece que en cada jurisdicción los fondos recibidos integrarán una cuenta especial, la cual no formará parte del Fondo Unificado Nacional o provincial ni de ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando total autonomía operacional y funcional.

El diputado Trettel Meyer, miembro informante del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación, hizo una impugnación prolija de estas disposiciones desde el punto de vista constitucional, así como de las delegaciones manifiestas y encubiertas que el Poder Legislativo nacional realiza en el Poder Ejecutivo, e incluso en terceras personas, de facultades que le son propias. Esta es una facultad fundamental: me refiero a controlar el presupuesto, y no habrá control no sólo del fondo fiduciario sino de los gastos que genere.

Se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros —eso es otra delegación— para que durante 1997 corrija el presupuesto por sí mismo, —cosa que no puede hacer porque es una facultad de este Congreso— para ingresar esos fondos si es que durante 1997 se vende el Banco Hipotecario Nacional.

Lo que dice Trettel Meyer es prácticamente irrefutable, a tal punto que cita, por ejemplo, al doctor González Calderón en *Derecho Constitucional Argentino*, Tomo III, editado en 1931, quien, comentando estas disposiciones que no pueden ser delegadas, indica que en un sistema de gobierno representativo y libre no se concibe que el Poder Ejecutivo pueda gastar las rentas

nacionales o invertirlas a su capricho, sin autorización alguna de los representantes directos del pueblo que provee las fuentes de donde manan aquéllas.

Esto mismo ocurrirá en las Legislaturas provinciales, que tampoco podrán controlar como gastan los recursos sus gobiernos a través de este fondo que se va a convertir en un presupuesto paralelo al nacional.

Señor presidente: como si esto fuese poco, mientras no se concrete la privatización el Poder Ejecutivo nacional podrá dar en caución las acciones del Banco Hipotecario Nacional y obtener los recursos así caucionados con ese sistema de crédito, volcándolos rápidamente en la operatoria que quiera realizar; y queda ampliamente facultado para reglamentar cómo se hará y en qué se invertirá. El índice que incluye la ley en un anexo es indicativo y deja mucho margen en cuanto a la certeza de los gastos, a cómo se van a gastar los fondos que sean derivados a cada provincia y a cómo se va a gastar la propia Nación lo que a ella se le deriva.

Entonces, tengo la impresión —digo esto aunque sean gritos en el desierto, como señalé algún otro señor senador— de que vamos a contramano; de que lo que ha llegado a su fin es este Estado ausente de la economía.

Porque lo que aparece claro en 1997 es que las políticas que el propio Fondo Monetario Internacional recomendó en la década del 80 están siendo corregidas.

Y se vislumbra que esas políticas no servirán para garantizar el bienestar del conjunto de la población en el orden mundial; mucho menos el de estos países en vías de desarrollo, muy lejos del primer mundo con que se soñaba hace tres o cuatro años cuando parecían en auge las políticas oficialistas en este marco globalizado.

Tengo la sensación de que estamos otra vez a contramano de la historia. Alguna vez vamos a contramano por tardíos y ahora vamos a contramano por muy tardíos, porque estamos violentando la posibilidad de un Estado poderoso que pueda, de alguna manera corregir los desfases de la brecha de la equidad que señala la CEPAL en su último informe de abril para América latina y para las regiones de América Central.

La privatización del Banco Hipotecario, independientemente de las impugnaciones constitucionales, de las violaciones de leyes vigentes que imponían otras posibilidades para el tratamiento de una ley de semejante naturaleza, en este contexto político y social mundial y de la República Argentina, en el panorama político que estamos

viviendo los argentinos, evidentemente, es un error político garrafal por el que tendrá que responder la mayoría que la apruebe.

No creemos en este Estado ausente. Creemos que el Banco Hipotecario Nacional es una herramienta financiera indispensable de una política de vivienda que debe dictar la Secretaría de Vivienda de la Nación pero que debe instrumentarse a través del Estado. Consideramos que, saneado como está, es una palanca importantísima de desarrollo, que va a generar muchísimo más empleo y que va a garantizar la financiación de muchísimas más viviendas de las que puedan garantizarse a través del fondo fiduciario que se crea y que no tendrá control alguno.

Porque, además, no sabemos si ese fondo fiduciario va a llegar a crearse y si la plata de la caución que se haga de las acciones no se va a distribuir rápidamente y se va a agotar sin control alguno en pocos meses; a lo mejor, en menos de un año. Así, tal vez, el próximo año las provincias y la Nación se habrán gastado esos fondos, sin haberse logrado los beneficios que la mayoría cree que puede provocar este fondo fiduciario.

Otras políticas de empleo han fracasado cuando realmente no se intentó fortalecer a la industria nacional y a la pequeña y mediana empresa. Y acá no se aprecia que este fondo fiduciario pueda traer esos beneficios, por lo menos en forma permanente, garantida y controlada y con una ejecución limpia y transparente.

Por todo ello, estamos en contra de este proyecto. No es por una razón circunstancial, como decía al comienzo, sino por el convencimiento de que en el próximo siglo vamos hacia un Estado fuerte, con plena libertad de los mercados, que pueda orientar e intervenir para garantizar que la brecha de equidades sea menor y que los sectores marginados de este proceso puedan reintegrarse al mundo civilizado y al progreso social.

**Sr. Presidente** (Villarreal). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero del bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Meneghini.** — Voy a tratar de ser lo más breve posible, en virtud de que los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, en general, han coincidido con mi pensamiento sobre este proyecto de ley al cual me opongo en forma total y terminante.

Escuchaba aquí que esta institución tiene más de cien años. Pero no sólo se trata de eso, sino que está en el corazón de la gente. Hay una confianza innata en el Banco Hipotecario cuando la



gente se acerca para hacer un negocio. Porque, realmente, ha posibilitado el acceso a la vivienda a quienes no podían llegar a ella si no fuera por intervención de esa institución oficial.

Considero que sacar del sistema financiero estatal al Banco Hipotecario es un tremendo error que le provocará un grave daño al cuerpo social de la República. Pero más grave aún es que ni siquiera hay unanimidad de criterio entre los propios economistas del oficialismo.

El señor senador por Entre Ríos citaba a un economista llamado Walter Graziano, que en un artículo titulado "Cuando se privatiza lo que no existe" señala que esto ni siquiera tiene un precio fijo y determinado y puede oscilar entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Que sea que ni siquiera en esto tenemos la certeza absoluta de que se pueda recoger el dinero que el gobierno nacional le ha prometido a los gobiernos provinciales.

Los diarios, en general, han criticado esta iniciativa y un diario de esta ciudad ha dicho que en el caso de no ser corregido extensamente este proyecto por el Senado de la Nación —lo que parece políticamente improbable—, los capitales provenientes de la venta de esta institución irán a conformar un fondo compartido por la administración central y los estados federales, con destino formal a la realización de obras públicas, cuya entidad técnica y sentido económico no ha sido establecido.

Y me voy a referir brevemente a ese punto, dado que voy a solicitar la inserción de mi discurso para no extenderme demasiado en mi exposición.

Tengo una gran preocupación, que es la misma que ha expresado la señora senadora por Santa Cruz con anterioridad. Existe una Argentina periférica y una Argentina central y los fondos no pueden ser empleados con igual criterio dado que a la Argentina periférica no se dirigen los inversores nacionales ni extranjeros preocupados por la falta de seguridad jurídica originada en gobiernos autoritarios.

Por eso promovimos un proyecto de ley 1.311/96 que autorizaba al Poder Ejecutivo nacional a contraer 2 mil millones de dólares para financiar al sector privado de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero —mi provincia natal—, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Se destinará a cada una de ellas cien millones de pesos.

Los fondos que se otorgarían en préstamo al sector privado gozarían de un plazo mínimo de quince años, con un período de gracia de tres años, y llegarían a los destinatarios en las provincias a través del BICE —Banco de Inversión y Comercio Exterior—, que actuaría como banca mayorista, y la banca minorista estaría compuesta por los bancos oficiales que quedaran, o aquellos mixtos que actuaran en cada jurisdicción provincial.

Nosotros no podemos confiar —como aquí se ha reiterado— únicamente en los mecanismos de mercado para impulsar el desarrollo económico de las regiones deprimidas. Por esa razón planteamos ese proyecto en su momento y solicitamos a la bancada justicialista la modificación, o al menos la postergación del tratamiento del proyecto en consideración por una semana o quince días, a fin de que estos fondos no sean destinados a obras de infraestructura, como caminos y obras hídricas —que son indudablemente importantes—, porque son más necesarias las políticas activas y controladas por el mismo sector privado.

Quisiera citar, por ejemplo, el caso de la Unión Europea que nuclea actualmente a más de trescientos millones de personas, con distintas nacionalidades, que han alcanzado un grado de educación, de sanidad y de bienestar económico general parejo, situación totalmente distinta de la que se presenta en nuestras provincias.

En efecto, mientras que el crecimiento general promedio del país ha sido del 18,3 por ciento entre 1991 y 1995, la economía de Tierra del Fuego decreció un 32,4 por ciento; en el mismo período, la de Jujuy bajó un 7,7 por ciento; la de Salta un 3,7 por ciento; y para qué seguir citando al resto de las provincias.

En una palabra, más allá del exacto análisis que realizaron mis colegas de todas las bancadas, me queda la grave preocupación de que estos fondos no lleguen a destino, o si llegan, sean utilizados sin un criterio de crecimiento de la producción, de desarrollo de las provincias.

A mí me sorprende que, en este sentido, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires coincida con nosotros cuando dice que un banco tiene que "colaborar con los sectores productivos para que se desarrollen y exporten. Hay que incorporar valor agregado a la producción primaria, donde tenemos ventajas comparativas". Fíjense qué diferencia con el criterio que estamos aplicando.

Asimismo, le preguntan: "¿Qué sentido tiene mantener una banca pública en un modelo globalizado?" Y responde: "Mientras que la banca pública no le signifique mayores impuestos al contribuyente, y atienda sectores postergados, debe continuar con su función. Hay que tener sentido práctico, no ideológico".

De todas maneras, creo que este tema va está resuelto. La bancada justicialista ha adoptado una decisión y es prácticamente imposible cambiar este proyecto de ley que, como señalaron los señores senadores, no sólo padece de numerosos errores técnicos y problemas que quedarán sin resolver, sino que también nos deja muchas dudas a todos.

Yo escuché al licenciado Rojo y lo felicito, porque con gran certeza, a un banco que prácticamente estaba en un estado de quiebra lo llevó a tener ganancias de 300 millones de dólares anuales. Muchos se preguntan si éste no será el motivo real de la venta.

Nosotros no estamos para sospechar ni para medir las intenciones del oficialismo o las de mis colegas de otras bancadas, pero sí estamos seguros de que tenemos que tratar de corregir este proyecto de ley.

Creo que no hay demasiado apuro en sancionar esta iniciativa, porque el mismo licenciado Rojo, en una revista publicada en junio, dice: "La prudencia no sólo tiene que ver con el trámite legislativo. Una vez aprobada definitivamente la ley, el Banco Hipotecario Nacional deberá llevar adelante un proceso técnico y administrativo para adaptar su estructura orgánica al proceso privatizador y recién después podrá salir a ofrecer las acciones en los mercados de capitales".

Entonces, con esto quiero decir que descarto que aquí haya una intencionalidad política de buscar fondos o recursos para una mera elección. Y, sobre esa base me permito solicitar que se postergue el tratamiento de este proyecto de ley hasta la próxima sesión que realice este Senado. Formulo una moción concreta en este sentido.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — ¿Concluyó, señor senador?

**Sr. Meneghini.** — También había solicitado una inserción.

**Sr. Presidente** (Villarroel). — La inserción se votará oportunamente. En cuanto a la moción de postergación del tratamiento, no hay quórum para votarla; también oportunamente se lo hará.

**Sr. Meneghini.** — Puedo postergar la moción, ya que hay otros oradores, ¿no es verdad?

**Sr. Presidente** (Villarroel). — Sí, hay otros señores senadores anotados.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: podemos leer en los distintos diarios, como en el "Clarín" del 25 de abril de 1997, que es opinión de importantes funcionarios del gobierno, entre los cuales se encuentra el señor jefe de Gabinete, que se puede cubrir parte de la deuda externa con los fondos que se obtengan de esta privatización.

En ese sentido, bien ya ha dicho el señor senador Berhongaray que, dentro de las disposiciones del proyecto que estamos tratando, existe esa posibilidad de hacerlo. Y yo creo, señor presidente, que eso puede ocurrir.

Por otra parte, entre los dos objetivos que puede tener el gobierno, el otro es financiar obras de infraestructura. Pero en definitiva, ello va a significar que se financie la campaña política del oficialismo de este año y de 1999 de una manera tal que, evidentemente, se van a utilizar estos fondos sin ningún tipo de control.

Ya se dijo en este recinto que evidentemente será muy difícil que se constituya la comisión bicameral, que es la encargada de controlar, como no se constituyeron anteriormente respecto de otros fondos fiduciarios. Así, la privatización del Banco Hipotecario traerá, seguramente, la misma consecuencia que tantas otras privatizaciones: la entrega de nuestros servicios públicos a monopolios. En este caso, ello ocasionará que se cobren tasas extraordinarias en perjuicio del pueblo.

En ese sentido, la privatización de YPF y su transformación en una empresa extranjera, que ha provocado desocupación y miseria en la Patagonia y en el norte argentino, de pueblos como Cutral-Có, en donde el 55 por ciento de sus habitantes no tiene trabajo, es un claro ejemplo.

Todo esto nos entristece, porque ya se han privatizado bienes por 25 mil millones de pesos, que se han imputado al pago de la deuda externa y, sin embargo, ésta ha crecido desde 1995 a razón de 40 millones de pesos diarios. Hoy podemos decir que alcanza a 110 mil millones de pesos, 97 mil de los cuales pertenecen a la deuda pública y, el resto, a la privada, mientras que en 1989, es decir, cuando este gobierno toma el poder después de las elecciones de 1989, dicha deuda alcanzaba —apenas— a 62 mil millones de pesos, suma que en aquel entonces ya nos parecía exorbitante y que hoy, prácticamente, se ha duplicado.

Quiere decir que esta privatización servirá nuevamente para traer más perjuicios al país. Y como bien dijo la señora senadora Fernández Meijide, también para provocar más desocupación porque, evidentemente, va a producirse a través de la terminación, en un plazo determinado, de los planes de vivienda para sectores populares necesitados. Entonces el banco, seguramente, restringirá su personal y vendrán todos los reajustes y las consecuencias que han ocurrido anteriormente, creando en el país una situación cada vez más difícil. Porque los desocupados son cada día más y, pese a los vaticinios que hace el oficialismo en el sentido de que la situación económica del país mejora y la desocupación va a disminuir, eso no es cierto, ya que la desocupación seguirá en aumento en virtud de esta política económica que favorece a los grandes capitales y a las grandes concentraciones de bienes, en tanto perjudica a las Pymes, que se encuentran en crisis: han cerrado en un 40 por ciento y no tienen futuro. Y no lo tienen con esta política ni con la política que aplican los bancos, que no les dan créditos a tasas de interés acordes con las que rigen en el mercado internacional.

Entonces creó que ahora vivimos una situación tan grave, o más, tal vez, que aquella que existía cuando se habló de privatizar Yacypetán: tan grave como la que se presentaba al momento de la privatización de YPF, la empresa más grande del país que hoy cayó en manos del capital extranjero y respecto de la cual no podemos decir que es argentina, ya que el Estado tiene solamente el 20 por ciento de las acciones.

El Hipotecario es el banco más grande que tiene el país, probablemente el más importante de América latina y una de las reliquias que ahora, por intereses electoralistas o de otra naturaleza que va a ser difícil determinar, será colocado en un proceso de privatización y sometido a los intereses internacionales y locales para que, de esa manera, la operación relacionada con la financiación de los planes de vivienda quede en manos exclusivas del sector privado y no tengamos más oportunidades de contar con planes de fomento para la vivienda. Ello es así, señor presidente, porque es sabido que la banca privada no fomenta absolutamente nada y solamente le interesan las ganancias que obtiene en el país, que están muy por encima de las de los bancos de los países desarrollados.

Hoy la política del gobierno es de protección a esta fiesta exacerbada de intereses exorbitantes que cobran los bancos, apoyada totalmente por este gobierno, pese a que el presidente Menem

se llena la boca diciendo que tienen que bajar los intereses.

Y yo pregunto, señor presidente, quién es el señor Menem. ¿Es acaso un *boy scout*, o un agente de policía que formula una expresión de deseos? Es nada menos que el presidente de la República, que tiene todas las facultades y los resortes necesarios para que el Banco Central realice una política real de freno a la voracidad de los intereses que cobra la banca privada. Si el Poder Ejecutivo nacional no lo hace es porque está de acuerdo con esa política económica encaminada a beneficiar al sector financiero, comúnmente denominado "la patria financiera", que hoy obtiene intereses seis veces superiores a los de los bancos de los países desarrollados. En su momento voy a demostrar con números esto que digo.

Aquí los bancos ganan sumas extraordinarias. Lo que pasa es que se falsean los balances, se denuncian pérdidas y, desgraciadamente —como dije— la Dirección General Impositiva se dedica a clausurar los negocios de las Pymes, pero no dirige su accionar contra los grandes evasores del país: el sector bancario y la empresa YPF, donde se encontrarán evasiones multimillonarias, respecto de las cuales el gobierno no toma ninguna medida, pese a que he denunciado la situación a través de varios proyectos, sin obtener hasta ahora respuesta alguna.

Desde 1976 teníamos en el país alrededor de 700 bancos privados que fueron quedando en el camino, y que cientos de ellos defraudaron al país en una suma extraordinariamente elevada. En 1981 ya habían defraudado a los ahorristas argentinos en 11.500 millones de pesos, y hasta el año 1989 lo hicieron en 3 mil millones de pesos más. Luego, en 1989, el presidente de la República, Menem, dictó un decreto y confiscó los ahorros del pueblo argentino por la suma de 7 mil millones de pesos para beneficiar al sector bancario.

Y la última rúbrica de este gobierno —que privilegia al sector de los bancos, que privilegia y protege al sector financiero permitiéndole todos los abusos que hoy está cometiendo— la tenemos en 1995 cuando se constituye el fondo fiduciario con la suma de 9 mil millones de pesos para los bancos, el cual tenía que ser controlado por una comisión bicameral, que nunca se constituyó. Esos 9 mil millones de pesos se evaporaron y fueron a manos de los bancos privados y de trece bancos que quebraron y sus directores se quedaron con los millones de pesos depositados por los ahorristas. Ellos se beneficiaron

con esa suma de la cual, hasta hoy, no sabemos absolutamente nada porque se niegan a informar dónde está y porque no hubo ni hay ningún control sobre ese fondo.

Entonces hoy podemos ver todo lo que está sucediendo. La banca privada, pese a la estabilidad monetaria que tiene el país, cobra intereses que son usurarios. ¿Cómo es posible que el Banco Central permita tasas de hasta el 24 por ciento anual y en descubierto hasta el 60 por ciento anual?

¿Por qué lo permite el Banco Central? ¿Por qué no tenemos una política financiera? ¿Por qué el Banco Central no fija un techo a los intereses, de acuerdo con los intereses internacionales, ya que todo en este país se rige por los precios internacionales? Cuando hablamos del ganado aplicamos los precios internacionales; cuando hablamos de los cereales aplicamos los precios internacionales. Pero cuando hablamos de los intereses, el gobierno se olvida de los internacionales.

Aquí tenemos los intereses nacionales, que constituyen realmente un abuso, un procedimiento que está chupando la sangre a todos los argentinos, ya que los que se cobran son exorbitantes y no son admitidos en ninguna parte del mundo. Solamente los admite este gobierno, que está al servicio del sistema actual, en perjuicio de todos los argentinos y, especialmente, de las pequeñas y medianas empresas. Se está favoreciendo al gran capital financiero que solamente viene a la Argentina a ganar lo que no puede obtener en el exterior. En nuestro país, los banqueros ganan seis veces más de lo que perciben en el exterior.

Al respecto, observen los márgenes de la intermediación. En los mercados desarrollados, los bancos tienen un 2,5 por ciento de margen de intermediación. ¿Saben cuánto tienen en nuestro país? Más del quince por ciento. Mientras que a un ahorrista argentino se le paga entre el 6 y el 8 por ciento, los bancos hacen su enorme diferencia cobrando desde 18, 20, 24 y hasta un 60 por ciento, obteniendo así ganancias fabulosas.

Con respecto a los créditos hipotecarios, si no existiera el Banco Hipotecario, que tiene planes con el 11 por ciento de interés ¿usted cree, señor presidente, que la banca privada tendría planes como los que ofrece ahora, del orden del 14 por ciento, que igualmente son elevadísimos? A nivel internacional, los intereses de los créditos hipotecarios a treinta o cuarenta años son del 5 al 6 por ciento, 7 como máximo. Y aquí,

con un régimen de estabilidad, sin inflación, donde todo se rige de acuerdo con los precios del mercado internacional, no se hace nada para que se apliquen también los intereses internacionales.

Ocurre lo mismo con los automóviles, que tienen precios exorbitantes y que el comprador argentino tiene que pagar dos o tres veces más de lo que valen en el mercado internacional.

Esta es la grave distorsión que hoy vive la Argentina, la de un régimen bancario usurero, que no se rige por parámetros internacionales.

Y aquí reside la gravísima responsabilidad del señor presidente de la República, que pide y declara como un alumno de escuela primaria que bajen las tasas de interés, pero no hace nada para que así sea, pese a tener todas las armas a su alcance y pudiendo hacer lo necesario para que los bancos del país no cobren las tasas exorbitantes que están cobrando.

Observen lo que sucede con el encaje mínimo. El porcentaje de encaje mínimo de los bancos en 1992 era de 77 sobre 100. Hoy ha bajado a 15 sobre 100. Es decir que a los bancos se les permite disponer de todo el dinero, pueden prestar cuatro veces más que antes, con lo que, en consecuencia, "sus ganancias" se multiplican por cuatro. Pero a pesar de eso, si se leen los balances de esas entidades, se puede ver que en este país los bancos argentinos son los que menos ganancias tienen en el mundo, cuando no pérdidas. Ganan seis veces más que los bancos internacionales pero tienen pérdidas seis veces mayores.

Realmente, todo esto no tiene explicación. Quien tendría que venir a sentarse aquí para explicar este fenómeno es el jefe de Gabinete, acompañado por la Dirección General Impositiva para, entonces, poder tener un razonamiento lógico ya que, para tal fin, no nos alcanzan ni los balances que ha publicado el Banco Central.

¿Qué hacen los bancos, señor presidente, mientras niegan a las Pymes créditos acordes a las necesidades del mercado? Compran alegremente miles de millones de títulos públicos. Los bancos nacionales llevan invertidos 2.200 millones en bonos del Estado; los provinciales, 1.900 millones; los privados nacionales, 4.300 millones; y los privados extranjeros, 3.500 millones, lo que hace un total de 11.900 millones en bonos.

Podemos afirmar que los argentinos, con sus ahorros y sin saberlo, están financiando los déficit de este gobierno porque se utilizan esos di-

neros, por los que se pagan intereses pequeños, para financiar la compra de los bonos. Si ese dinero se destinara a la plaza a intereses razonables, podríamos desarrollar las Pymes y tener mucha menos desocupación, ya que es sabido que son las únicas que generan fuentes de trabajo. En nuestro país generaban el 80 por ciento de las fuentes de trabajo pero hoy como consecuencia de esta desastrosa política económica, están en crisis y dan trabajo nada más que al 60 por ciento del sector del trabajo. De allí la enorme desocupación que sufre el pueblo argentino y que va a seguir acrecentándose; ello es así, porque este gobierno continúa apoyando a los grandes capitales y a los grandes intereses, y sigue tras este tipo de proyectos, que afectan al país, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, no ocupándose de los problemas integrales para solucionar cuestiones como la desocupación y para que las Pymes se puedan desarrollar y dar mano de obra a los argentinos.

Podemos decir que la banca privada, en los últimos veinte años perjudicó al país en 31.500 millones de pesos, cifra que puso el Estado — 11.500 millones para devolución de depósitos garantizados hasta 1981, luego 3.000 millones más, posteriormente en 1989, 7.000 millones confiscados por el Poder Ejecutivo, y finalmente, en 1995, 9.000 millones del fondo fiduciario para ayuda de los bancos —. En total, los bancos se llevaron 31.500 millones en veinte años. ¿Y qué le dieron a cambio al país? Cientos y cientos de directores procesados, cientos y cientos de funcionarios comprometidos por fraudes a los ahorristas, miles de ahorristas defraudados a los que nunca se les han devuelto sus ahorros.

Ese es el sistema bancario argentino. El sistema más corrupto del mundo, con una impunidad total porque tenemos la Justicia más sometida del mundo, que no termina nunca de procesar a los corruptos que gozan de su libertad gracias a que el gobierno no hace absolutamente nada para combatir la corrupción. En consecuencia, podemos afirmar que la administración bancaria privada fue catastrófica.

El gobierno tuvo que recurrir continuamente a salvatajes, tal el de 1989 —al que ya me referí—, cuando los bancos se quedaron con 7.000 millones de pesos de los ahorros de los argentinos y el gobierno entregó Bonex a cambio. Siempre el pueblo argentino pagando las consecuencias.

En 1995, con los 9 mil millones del fondo fiduciario, se produjo un nuevo salvataje. Trece

quiebras bancarias, miles de ahorristas estafados y fondos no controlados. Hoy ni siquiera tenemos una información al respecto. Ahora bien. Después de todo esto, ¿quién puede afirmar y con qué responsabilidad que la banca privada, realmente, va a financiar planes populares para la construcción de viviendas? Eso es absolutamente ridículo y falso porque la historia bancaria de nuestro país demuestra que los bancos privados están solamente para ganar plata y nunca jamás han aplicado un solo plan de fomento. Por el contrario, su actividad siempre fue la de obtener más ganancias y nunca generar una fuente de financiación acorde a las necesidades del país.

Señor presidente: ¿qué país puede crecer con las exorbitantes tasas de interés que hoy cobran los bancos? Si nos trasladáramos por unos minutos a cualquier país europeo, si fuéramos a Francia, Inglaterra, Italia o España, ¿qué ocurriría con este sistema bancario? No podría existir ni 24 horas. ¿Por qué hoy toda la banca extranjera quiere venir al país? Porque aquí obtienen una ganancia seis veces superior a una inversión realizada en un país europeo. Por eso, hoy se extranjeriza la banca y todos los bancos del exterior quieren comprar bancos en el país. Las ganancias que aquí obtienen no las hay en ninguna parte del mundo. Este es el país de las maravillas para los banqueros porque, evidentemente, son maravillosos los intereses que están cobrando.

Señor presidente: todo esto nos hace pensar en la necesidad de volver al Banco Hipotecario Nacional, que financiaba las viviendas a cincuenta años al 4 por ciento de interés o a treinta años al 6 por ciento de interés, tasas que perduraron por muchos años y que hoy, desgraciadamente, no se aplican. Sin embargo, si conserváramos el Banco Hipotecario Nacional podríamos llegar a aplicarlas en un futuro, financiando planes de vivienda, especialmente populares, a fin de terminar con las villas miseria. Hoy hay dos cosas que se acrecientan en el país: la desocupación y las villas miseria. Cada día hay más viviendas precarias y cada día la gente tiene menos lugares donde vivir.

Hoy podemos decir que con esta nueva privatización daremos un nuevo paso hacia atrás en esta materia ya que habrá menos argentinos con posibilidades de acceder a su vivienda. Toda la financiación del sector habitacional quedará en manos de los bancos privados, entidades que no realizarán ningún plan de fomento para su construcción.

Observe, señor presidente, lo que el Banco Hipotecario Nacional representa dentro del

país. Como dije anteriormente es el banco, más grande ya que su patrimonio alcanza los 2.700 millones de pesos. ¿Cuál es el banco que le sigue? El Banco de la Nación, con 1.900 millones. ¿Cuál es el tercero? El Banco de la Provincia de Buenos Aires, con 1.297 millones de patrimonio. Y, ¡oh casualidad!, son los tres bancos que este gobierno está tratando de privatizar para seguir ese camino de entrega de todo nuestro patrimonio y del manejo total del sector financiero por parte de la banca privada.

Para hacer una comparación, mientras el Banco Hipotecario tiene un patrimonio de 2.700 millones, los diez bancos extranjeros más importantes que operan en la Argentina no alcanzan esa cifra, ya que entre todos apenas tienen 2.300 millones de patrimonio.

Fíjense lo importante que es el Banco Hipotecario Nacional y lo enorme que es, comparado con los otros bancos.

Los bancos nacionales tienen un patrimonio equivalente al 36 % de la totalidad de los bancos que operan en nuestro país, y que alcanza a 4.900 millones de pesos.

La banca privada provincial y municipal tiene 13 por ciento del total —estos son datos a septiembre del año pasado dados por el Banco Central—, con un patrimonio de 1.765 millones. La banca privada argentina tiene un 34 por ciento, con un patrimonio total de 4.782 millones y la banca privada extranjera, un 17 por ciento, con 2.331 millones de patrimonio.

Si hacemos otras comparaciones, por ejemplo, en materia de beneficios, el Banco Hipotecario Nacional, a septiembre del año 1996, había ganado 209 millones que, al completar el año, llegaron a los 300, según informe del Banco Central. En segundo lugar, el Banco de la Nación Argentina tiene una ganancia de 30 millones; luego, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 85 millones; el Banco de Galicia, 28 millones; el Banco Río, 34 millones; la Banca Nazionale del Lavoro, 13 millones; el Banco de Boston, 32 millones y el Banco Morgan, 11 millones.

Esto demuestra que en la Argentina ningún banco se aproxima al Banco Hipotecario Nacional, que tiene 300 millones de ganancia al año. Vemos que los bancos privados que más ganancias han tenido en el año son el Galicia y el Río, con 28 y 34 millones respectivamente.

Si la banca privada hizo pagar al Tesoro argentino su propio seguro de insolvencia cuando en 1995 se constituyó el Fondo Fiduciario por 9 mil millones de pesos para atender las corridas bancarias, y a esa gente se le delegará las funciones

del Banco Hipotecario Nacional, ¿qué nos espera, qué le espera al país y a los argentinos?

Esta venta no tiene ninguna justificación. Es la entrega del patrimonio nacional a los grupos de banqueros que se quieren apoderar totalmente del mercado argentino. Luego de la privatización del Banco Hipotecario Nacional a corto plazo seguramente también se lo hará con el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, únicos bancos que realmente están permitiendo que las tasas de interés no se eleven por las nubes, como lo sigue haciendo y aplicando el sector bancario privado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Maglietti.** — Para la transformación que el país necesita se requieren intereses internacionales y bancos oficiales dispuestos a llevar adelante una política de esa naturaleza.

Con las tasas que hoy se están cobrando no tenemos ninguna posibilidad de crecimiento, porque evidentemente el sector financiero se está llevando la parte del león. Por lo tanto, el futuro de la Argentina, mientras no tenga tasas acorde con el nivel internacional, no prosperará en la medida en que todos los argentinos esperamos.

De tal manera que esta venta no soporta ningún análisis racional. Se está vendiendo el banco más grande del país y no sólo se vende el negocio sino que se está traspasando el poder del Estado para regular el negocio inmobiliario y la capacidad de ahorro popular y se mata definitivamente la rueda generadora de créditos hipotecarios.

A eso le tenemos que agregar que pese a los exorbitantes intereses que, como dije anteriormente, son seis veces más elevados que los de la banca mundial, ¿por quiénes son utilizados los dineros de los depositantes? En primer lugar, por los grandes capitales...

**Sr. Presidente (Menem).** — Si me permite señor senador, ha finalizado su tiempo.

**Sr. Maglietti.** — Solicito una pequeña prórroga, señor presidente.

**Sr. Alasino.** — Vamos a conceder cinco minutos más, para que el señor senador pueda redondear.

**Sr. Maglietti.** — Voy a tratar de redondear, señor presidente.

Pese a que —como dije— la banca privada obtiene ganancias seis veces superiores a las de la banca mundial; pese al elevadísimo régimen de

intermediación —que en el orden internacional es del 2,5 por ciento y en la plaza local es más del 15 por ciento—; pese a que utilizan casi todo el dinero de los depositantes con un encaje mínimo que les permite prestar cuatro veces más que en 1992; pese a todo eso, en 1996 cincuenta y dos bancos han declarado pérdidas, treinta bancos ganan menos de 100 mil pesos y los diez bancos privados más grandes del país no alcanzaron a ganar 200 millones de pesos.

Esto evidencia que las cosas en el sector bancario no son claras y que la privatización del Banco Hipotecario Nacional para invertir los fondos en infraestructura no provocará un aumento importante en la ocupación, porque no hay ninguna inversión que provoque una mayor ocupación que la construcción de viviendas.

Fíjese que las dudas han venido del sector oficialista. Voy a leer una frase pronunciada por el doctor Ruckauf, aparecida en un diario: "Si nosotros tenemos que resolver el problema de las altas tasas de interés que es, en realidad, el verdadero origen del problema del desempleo, ¿quién nos garantiza que con el BHN privado no terminen haciendo lo mismo?" Este es un reconocimiento del doctor Ruckauf a todo lo que estoy diciendo desde esta banca.

La privatización tiene muchas y claras objeciones y desde el ángulo en que se la analice, evidentemente, es criticable.

Antes de terminar quiero decir que la propuesta de sustituir el Banco Hipotecario Nacional por un fondo ridículo de 100 millones de dólares —que puede alcanzar 200 millones de pesos— no alcanzará ni remotamente para cubrir los planes de vivienda que necesita el país.

Además, hoy estamos asistiendo a una ridícula puja entre gobernadores, funcionarios nacionales y provinciales y legisladores en torno a la forma de repartir los fondos. Es como si estuvieran repartiéndose las migajas de los pobres para quedarse con lo que el país necesita. Parece un reparto de personas apresuradas para quedarse con parte de los fondos y poder invertirlos, sea en la campaña electoral o en las obras que dicen tener, pero como no habrá control alguno, no sabemos en definitiva cuáles serán las inversiones concretas.

Se olvidan de los intereses del pueblo. Se olvidan de la necesidad de contar con planes de financiación para que se construyan viviendas populares, para que terminemos con las villas miseria y que el pueblo argentino cuente con viviendas dignas.

Esta ley ofende a los argentinos porque no es más que un reparto de fondos. Diría más: les falta el respeto a todos los argentinos.

Para terminar, quiero abreviar mi exposición trayendo esta frase final: esta Argentina de los grandes negociados, de los grandes multimillonarios surgidos en los últimos veinte años a través de contratos leoninos con el Estado, gracias a funcionarios inescrupulosos. Esta Argentina que tiene el sistema bancario más abusivo del mundo, porque no hay país en el planeta que tenga un sistema bancario parecido con ganancias exorbitantes y con márgenes seis veces superiores a los que ostenta la banca mundial.

A ellos les entregaremos el Banco Hipotecario Nacional y se condenará en forma definitiva a un sector del pueblo argentino a que siga viviendo en viviendas precarias e indignas. También contribuiremos con esta norma a la expansión de las villas miseria.

Si ése es el plan del gobierno, como argentino, desde ningún punto de vista puedo avalarlo.

Por eso, mi voto será negativo tanto en general como en particular.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

— Se llama para votar.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: en todo el proceso privatizador y transformador que ha llevado a cabo este gobierno, tal vez sea con el Banco Hipotecario Nacional que por primera vez se asume la transformación o la privatización con un compromiso casi absoluto con la realidad interna del país y con las urgencias que al respecto tiene nuestra Nación.

Hasta ahora, señor presidente, todas las privatizaciones llevadas a cabo, o bien estaban dirigidas a atender compromisos internacionales —esto es, pagos de la deuda externa— o compromisos internos: viejas y largas deudas morosas con sectores importantes de la población, como son los jubilados o los compromisos con algunas provincias, o bien estaban destinadas a paliar el déficit fiscal.

Esta privatización que, a decir verdad, es el resultado del esfuerzo laborioso, largo y comprometido de los señores diputados que el 14 de mayo promovieron y aprobaron el proyecto de ley que hoy tenemos en revisión y que tiende al desarrollo regional y a la generación de empleo, ha hecho —dicho en grandes términos— que la presente iniciativa destine a la inversión una

suma similar a la que destinan a la obra pública casi cinco presupuestos como el que está en ejecución.

Si los presupuestos destinan aproximadamente 600 millones, este proyecto, con sus tres mil millones holgadamente supera en cinco veces lo que se destina a la obra pública a través de los presupuestos.

Además, antes de entrar a analizar específicamente algunos aspectos muy importantes de esta norma, es necesario decir que el Fondo Fiduciario Federal que se establece tiene una recreación permanente; se repone permanentemente, porque está destinado a dar créditos. El repago asegura continuidad en la recuperación de dichos fondos y, en consecuencia, el objetivo principal que es la generación de empleo será prácticamente un efecto continuado.

También debo decir antes de abordar algunos aspectos puntuales del proyecto de ley, que la función social a la cual se destina el producido de ese fondo no sólo permitirá mantener planes de viviendas sociales y avanzar en ellos, sino concretar la posibilidad que se brinda al Banco de la Nación —a través de los 200 millones que se le destinan— de fondear un crédito de más de 2.000 millones que permitirá afrontar el financiamiento de viviendas por casi el 95 por ciento de su valor. Esta es una situación muy diferente a la actual, donde el Banco Hipotecario se maneja con un límite de crédito de 60.000 pesos o financia entre un 50 o 60 por ciento del valor de la propiedad.

Tenemos la más absoluta convicción de que si bien no estamos ante un proyecto perfecto se trata de una iniciativa que atenderá necesidades y urgencias, que cuenta con algunos elementos que le permitirá un manejo del fondo y una administración con cierta libertad, encaminada a cumplir los objetivos reales que promueve la norma.

El carácter extrapresupuestario del fondo no sólo constituye una innovación importante en el marco de lo que hasta hoy viene desarrollando la gestión económica de este gobierno sino que, de alguna manera, permitirá que su administración, establecida por un consejo de administración de siete personas que se desempeñará en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuente entre sus integrantes a dos miembros designados a propuesta del Consejo Federal de Inversiones, foro habitual en el que las provincias argentinas discuten las obras públicas a definirse y el límite de cada una de ellas.

En este sentido, señor presidente, quiero dejar en claro que este fondo será el fiduciante, el Banco de la Nación Argentina el fiduciario y las provincias o la Nación los destinatarios de los beneficios.

Digo esto, señor presidente, porque el Banco de la Nación Argentina es el organismo que asumirá como fiduciante la administración del Fondo Fiduciario Federal, y actuará —conforme las instrucciones del Consejo de Administración al que ya me he referido— por cuenta y orden de las jurisdicciones que lo soliciten, sea la Nación o las provincias.

El patrimonio del Fondo Fiduciario Federal estará constituido por las acciones del futuro Banco Hipotecario Sociedad Anónima y el producido de su venta, por los recursos que provengan del Estado nacional, de las provincias y de los organismos internacionales, por el producido de los empréstitos que contraiga el fondo y por las rentas y frutos de sus activos, con las excepciones que más adelante prevé el artículo 36.

La idea general que anima al proyecto es la financiación de obras de infraestructura económica y social, nacionales y provinciales.

Pero además, señor presidente, sin perjuicio del alcance que dicha finalidad establece, del total de ese patrimonio del fondo se deducirán 100 millones de pesos para la constitución de una cartera adicional reservada a las demandas de las provincias de menor densidad poblacional y menor desarrollo relativo. Esto lo digo porque no es cierto que a este proyecto le falte un criterio de equidad y de justicia. Muy por el contrario, se establecen partes iguales en función de la ley de coparticipación, pero se fija con toda precisión una cartera de crédito adicional que tendrá como destino final atender el desequilibrio de algunas provincias con menor densidad poblacional y con carencia de infraestructura para su funcionamiento.

Se advierte que el carácter extrapresupuestario al que hacíamos referencia no es una modificación menor —por eso lo hemos subrayado a lo largo de este debate—; se incluye una específica disposición en virtud de la cual se faculta al señor jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones del presupuesto del ejercicio 1997 para incorporar los recursos provenientes del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Adicional y los gastos destinados a obras no incluidas en dicho presupuesto.

La operatoria del fondo no es una cuestión menor y la podemos analizar teniendo en cuenta cuatro aspectos muy importantes. Considero



que la envergadura de la transformación que va a imprimir esta privatización va a atender algunos desfases actuales de ciertos prestatarios del Banco Hipotecario. Permanentemente, los legisladores recibimos quejas al respecto y, de alguna manera, intentamos solucionar este problema. Pero la actual situación del Banco Hipotecario impide arribar a una solución en este aspecto.

Ahora bien, si hay algo que no se puede dejar de reconocer a este gobierno es el éxito que tuvo con el Banco Hipotecario. No nos olvidemos de que cuando asumió este gobierno, cuando comenzó a gobernar el presidente Menem, tal vez el mayor desastre al cual se enfrentaba era el estado en que se encontraba esta importante entidad financiera y de tanto arraigo en la ciudadanía. O sea, me refiero al estado en que asumimos la conducción del Banco Hipotecario Nacional. Con mucho orgullo, hoy podemos decir que a pesar del estado en que lo recibimos es a esta administración a la que, de alguna manera, se le debe no sólo el éxito de la gestión sino también el hecho de haber producido una verdadera transformación en el banco para posibilitar en la actualidad este verdadero impacto revolucionario que provocará su privatización.

Decía, señor presidente, que la operatoria del fondo se puede estudiar en función de cuatro situaciones especiales. La entidad va a estar en condiciones de tener créditos disponibles para obras financiables provenientes de los respectivos cupos de participación. La Nación o las provincias, las jurisdicciones — como se dice en el proyecto de ley — recibirán los fondos inmediata y automáticamente, conforme a las obras de que se trate. En cada jurisdicción, ya sea la Nación o las provincias, el destinatario del crédito constituirá una fuente especial con autonomía operativa y funcional de la que no formará parte el fondo unificado nacional o provincial.

Finalmente, señor presidente, los tipos de obras de infraestructura consideradas necesarias o prioritarias para la integración territorial, el desarrollo regional y el intercambio provincial, tendrán carácter indicativo.

Es importante, señor presidente, definir cómo el proyecto resuelve los préstamos que otorgará el fondo. Los términos y las condiciones de los préstamos, además de prever el cumplimiento de los fines de esta norma, deberán asegurar el repago. Es por eso, señor presidente, que en este fondo la seguridad del repago asegura su continuidad y sus efectos positivos, fundamentalmente en la generación de empleo.

Las demás condiciones generales se establecerán por decreto reglamentario. La tasa de referencia será la Libor, aunque podrá ser deducida en algunos proyectos que ocupen mano de obra intensiva.

Con estas precisiones, señor presidente, volvemos a exponer la forma en que está prácticamente orientado todo el proyecto hacia el principal problema que tiene el país. Nos parece entonces realmente desconcertante que, cuando traemos una propuesta concreta para reducir el desempleo, la otra gran fuerza política se aproveche de esta argucia legal de dejarnos sin quórum para evitar acercarnos a los argentinos soluciones concretas.

**Sr. Berhongaray.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Presidente (Menem).** — Le solicita una interrupción el señor senador por La Pampa.

**Sr. Alasino.** — La concedo con mucho gusto, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Quiero recordar aquí, señor presidente, que este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de mayo, hace casi dos meses. Estaba en comisión aquí en el Senado por lo cual, de existir realmente la decisión política de tratarlo en el recinto, hubieran existido posibilidades de hacerlo en varias sesiones anteriores. Por lo tanto, dejen al menos que nosotros compartamos las dudas razonables que tuvieron ustedes, que mantuvieron dos meses el proyecto en comisión antes de decidir, definitivamente, traerlo al recinto. Y lo trajeron en el día de hoy, a través de un mecanismo cuya validez reglamentaria habría que analizar, porque en el mismo día se aprobó una preferencia con despacho de comisión, de forma tal que con simple mayoría se pudo incorporar la cuestión al orden del día.

Es decir que, a través de ese procedimiento, que es casi un gambito reglamentario, por el cual se eliminó la necesidad de aprobar un tratamiento sobre tablas que requeriría mayoría de los dos tercios de los votos, se introdujo la cuestión.

Entonces, si el oficialismo estuvo al menos dos meses dudando y reflexionando sobre este tema, decidiendo tratarlo hoy, creo que es razonable pensar que la oposición también necesita tiempo para reflexionar, aunque sean algunos días más.

**Sr. Presidente (Menem).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente, no existe ningún esfuerzo dialéctico que justifique esta conducta. Comprendo al señor senador por La Pampa, que ha sacado la cara por su bloque y ha tratado de justificar su estrategia, pero creo que en la situación actual del país esta actitud se inscribe dentro de la intención de hacer jugar las instituciones en ese desfiladero que es o no desestabilizante. No existe entonces justificación posible para esto.

Usted me podrá decir que en otros temas, que no estén vinculados con uno de los problemas más complicados y más álgidos que tienen los argentinos, se trate de evitar aportar soluciones. Pero en esta cuestión, en donde nosotros deberíamos encontrar eco en la oposición, no puedo admitir esta actitud.

Respeto el esfuerzo, respeto la dialéctica y entiendo que, de alguna manera, la Unión Cívica Radical haya decidido dejar un solo senador para cumplir con esta difícil tarea de bloquear algo que los argentinos quieren y necesitan, pero de manera alguna creo que esto se justifique, señor presidente.

De todas maneras agradezco personalmente al senador Berhongaray que nos esté acompañando, al menos para tratar de sacar este proyecto que significa un aporte concreto.

Debo reconocer que ahora hay en el recinto dos senadores radicales.

Voy a continuar, señor presidente. Es importante distinguir que dentro del proyecto de ley que estamos considerando hay una parte referida al fondo fiduciario, del que estamos hablando, y otra vinculada al futuro Banco Hipotecario, que no es una cuestión menor. El Banco Hipotecario que viene es, tal vez, tan importante como el que se va.

Quisiera decir algo, que tal vez se les escapa a los analistas de este tema y que es de capital importancia para las provincias. Cuando el Banco Hipotecario Nacional se hizo mayorista, asistimos al cierre de todas las sucursales provinciales; solamente se dejó en las capitales de provincia una especie de casa matriz. Y esto era lógico, porque se trataba de recuperar al Banco Hipotecario Nacional del estado en que lo había dejado el gobierno anterior, y se proponía hacerlo a través de una operación totalmente distinta, es decir, convirtiéndolo en banca mayorista, para que las otras entidades bancarias actuaran como minoristas y frente a ellas cada ciudadano gestionara el crédito.

Pero esto cambia. Tenemos la convicción de que volverá a haber sucursales en las provincias, porque el negocio del Banco Hipotecario que viene consistirá en prestar dinero a los ciudadanos y para eso precisará abrir nuevas sucursales en cada uno de los pueblos, a fin de captar la gente que quiera créditos.

El Banco Hipotecario volverá a ser minorista y ello asegurará más ocupación o, por lo menos, mayor generación de empleo y créditos con un mejor acceso para los ciudadanos.

¡Cuánto hace que nosotros venimos tratando de explicar en las provincias por qué se cierran las sucursales de los bancos y no podemos hacerlo! Sin embargo, ahora podremos decir que habrá sucursales.

Además, señor presidente, quiero señalar otra cosa que no es menor. Hasta que se constituya el nuevo Banco Hipotecario, será el gobierno nacional quien podrá definir la apertura de sucursales. Con esto queremos decir que la conducción política de este gobierno puede empezar a establecer, por ejemplo, cuántas sucursales habrá en Corrientes y cuántas en Tucumán o Santa Fe. Entonces, cuando decida vender el banco, no lo hará sólo con las casas matrices o las sucursales de las capitales provinciales sino también con otra cantidad de delegaciones instaladas en distintas poblaciones de cada uno de los estados federales.

Señor presidente: quiero señalar que con esta segunda parte del proyecto de ley, ya concretamente con relación al futuro Banco Hipotecario Sociedad Anónima, se cumple específicamente con lo establecido por la ley 23.696, de reforma del Estado, que fue la norma madre que dio origen y constituyó el punto de inflexión del proceso transformador que sufrió nuestro país.

Esta ley 23.696 declara al Banco Hipotecario Nacional sujeto a privatización. Por lo tanto, con este trámite se cumple específicamente con la norma que mencionaba y, además, con la aspiración que tuvo este gobierno cuando definió la ley de reforma del Estado y el método transparente para avanzar en las privatizaciones.

Así como cuando el gobierno o el Estado decide incorporar bienes del patrimonio privado al público los declara sujetos a expropiación, cuando el Estado nacional decide sacarlos del patrimonio público y ponerlos a disposición del privado, los declara sujetos a privatización y cumple así con uno de los requisitos formales más importantes que hacen al estado de derecho y a la defensa del derecho de propiedad.

En ese sentido, en uno de los artículos del proyecto en consideración se declara al banco sujeto a privatización y se propone, en cabeza del Poder Ejecutivo nacional, su transformación en una sociedad anónima, a la vez que por medio de la ley se exceptúa al procedimiento respectivo de las formalidades que a ese efecto exige la ley de transferencia de los fondos de comercio.

Por otra parte, aquí se ha dicho que el Estado, al vender el Banco Hipotecario, se desentenderá de él. Es decir, que no se le ponen condiciones, que no se dice lo que tiene que hacer y que, en definitiva, no va a cumplir ninguna de las funciones que cumplía antes.

En ese sentido, debo decir que nadie se ha propuesto, ni siquiera, estudiar la normativa del proyecto para despejar este tipo de dudas, porque es importante señalar que dentro del plazo de diez años, la operatoria de la nueva sociedad anónima estará circumscripita a las siguientes actividades: financiar la construcción y adquisición de viviendas por sí o a través de terceros en la forma y condiciones que las hagan accesibles a todos los sectores de la comunidad; establecer y mantener líneas de crédito para la financiación de viviendas en pequeñas localidades, con poca cantidad de habitantes; preservar el fondo especial referido a los actuales deudores hipotecarios de emergencia, a través de un seguro obligatorio de cobertura a los deudores hipotecarios desempleados —que no son pocos—, situación que hoy existe y que la actual normativa del Banco Hipotecario no puede contemplar.

¿A cuántos señores legisladores han venido aquí a ver deudores hipotecarios desempleados que no pueden pagar y que no pueden establecer ningún mecanismo que les pueda salvar su casa? Para evitarlo, este proyecto de ley fija, con toda precisión, un seguro obligatorio de cobertura para los deudores del Banco Hipotecario desempleados.

Con respecto al capital del futuro Banco Hipotecario Sociedad Anónima, del que también se ha hablado, debo decir que estará representado, en primer término, por acciones de clase "A", que son las que estarán en poder del Estado nacional. Al respecto, debo decir que alguna vez cuando analizamos los distintos tipos de privatización nos enteramos, hace cuatro o cinco años, de que cuando el imperio británico había privatizado la British Company, había establecido un mecanismo con relación a lo que llamó las "acciones de oro", mediante el cual el Estado vendía prácticamente la totalidad de las acciones

y se reservaba un número menor a las que les otorgaba una categoría especial. Ellas tenían una serie de derechos, tal como se resuelve hoy en este proyecto.

Por otra parte, las acciones clase "B" formarán parte de la propiedad participada, otro de los grandes logros que este gobierno incorporó a la mecánica de la privatización.

Antes de que el gobierno peronista inventara la figura de la propiedad participada, se conocía la participación de los empleados en las ganancias de las empresas. Cuando ingresamos en el derecho público argentino esta nueva caracterización no sólo posibilitó que los trabajadores participaran de las ganancias, sino que fueran de alguna manera propietarios en una parte importante de la empresa del Estado a la cual ellos habían dedicado su vida.

Por eso es que los actuales empleados del Banco Hipotecario Nacional —aproximadamente mil— serán titulares de la propiedad participada en el orden del 5 por ciento, lo que les permitirá no solamente intervenir sino ser dueños del banco a cuyos éxitos y fracasos han contribuido.

Con esta iniciativa los argentinos estamos dispuestos a transformar el Banco Hipotecario para que siga siendo útil al país y a su gente.

Habrà un tipo de acciones clase "C" que no podrá exceder el 5 por ciento. Serán destinadas a constructores y a la actividad inmobiliaria. Esto será reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional, a través del cual estableceremos un registro de las empresas y sociedades que podrán adquirir esta parte del capital del banco que en el futuro se individualizará como acciones tipo "C".

Finalmente, señor presidente, hay acciones clase "D" que se transferirán al dominio privado, con las limitaciones que establece la ley para los grupos económicos de eventuales clientes.

Uno advierte que la venta del Banco Hipotecario Nacional se hace para que sea en serio y no para que un sector se apropie del Banco y, adquiriendo o acumulando acciones, lo desvincule para siempre de los objetivos que esta ley impone al futuro Banco Hipotecario S.A.

**Sr. Cantarero.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Alasino.** — Con todo gusto.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Cantarero.** — Señor presidente: dentro de la operatoria, el actual Banco Hipotecario Na-

cional adeuda al Banco Central la suma de 526 millones de pesos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a jugar este monto en la distribución de los fondos entre provincias y Nación? ¿Está clara la pregunta, senador? Si no, la repito.

**Sr. Alasino.** — Repítala, por favor, señor senador.

**Sr. Cantarero.** — Dentro de la operatoria hay 526 millones de pesos que el Banco Hipotecario Nacional adeuda al Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo juega esto: en desmedro de las provincias, de la Nación, en partes iguales, o es un préstamo a veinte años?

**Sr. Alasino.** — Al hacerse cargo de esa suma, el futuro Banco Hipotecario deberá armar créditos para viviendas individuales del nuevo Banco Hipotecario Nacional por la misma suma, haciendo una especie de fondo adicional por el mismo monto por el cual el Estado le perdona la deuda, haciéndose cargo de la misma.

Esto, que mejora de alguna manera el precio del banco, tiene como contrapartida la obligación de que la futura entidad cree un fondo con destino industrial.

La sanción de Diputados proyecta poner en oferta pública todas las acciones clase C y D, o sea las vinculadas a los sectores destinados a constructores, a la actividad inmobiliaria y las que serán cotizadas libremente por medio de agentes en las bolsas de los distintos lugares del mundo.

Incluso debo decir que el Estado nacional podrá transferir las acciones clase A a adquirentes privados, pero siempre deberá conservar por lo menos una acción.

Entre las acciones del Estado que integran el patrimonio del fondo fiduciario, los derechos para-políticos —por decirlo de alguna forma— corresponderán íntegramente al Estado nacional.

La nueva condición política va a influir mucho en las sucursales del banco. Por eso todos los senadores que están aquí pueden ir anotándose para sugerirle al futuro Banco Hipotecario Nacional la creación de sucursales en sus provincias, según la urgencia que tengan por tener bancos minoristas en cada uno de los pueblos importantes.

Podemos hacer una lista para alcanzársela a la conducción económica que tendrá a cargo esta situación para que evalúe y amerite la conveniencia de acceder a las sucursales, que esperamos que sean muchas y variadas en cada una de las provincias.

Se establecen también limitaciones de índole societaria para garantizar la intervención del Estado nacional en materia de decisiones esencialmente intrasocietarias: aprobación de estados anuales contables y la designación de por lo menos dos directores y un síndico.

Respecto del personal del Banco Hipotecario Nacional, y esto es una cuestión que debe quedar en claro y que ha sido acordada por los empleados del Banco Hipotecario Nacional, deberá respetar íntegramente la convención colectiva vigente para las entidades bancarias.

Se autorizará a la nueva sociedad a actuar como banco comercial con sujeción a la ley de entidades financieras, lo cual asegura la posibilidad de las nuevas sucursales a las que hice referencia.

El Estado nacional se reserva el absoluto dominio de los inmuebles que posee el Banco Hipotecario Nacional en todo el país, aun aquellos que eventualmente estén en préstamo o en comodato en algunas reparticiones públicas o a particulares, así como también las acciones que posee en el Banco de Inversiones de Comercio Exterior y los créditos contra el ex Banco Nacional de Desarrollo.

—Comentarios en las bancas.

**Sr. Alasino.** — Cuando se agote mi tiempo, avíseme, señor presidente. Tengo acumulado el mío, el del bloque...

**Sr. Presidente (Mengem).** — No se puede acumular el tiempo, señor senador. Cuando el suyo termine, se lo voy a decir.

**Sr. Branda.** — Le podemos dar una prórroga... (*Risas.*)

**Sr. Alasino.** — El señor senador por Salta, tal como nos tiene acostumbrados, hizo una importante observación. Requirió insistentemente que explicáramos por qué el Estado nacional perdonaría —por decirlo así— a través del Banco Central una deuda importante que tiene con él el Banco Hipotecario. Hay que tener muy en cuenta que esa deuda será transferida al fondo de complementación móvil del nuevo Banco Hipotecario.

Como dije en su momento, dicho monto deberá destinarlo a la constitución de una reserva especial para la instrumentación de una línea de crédito individual para la adquisición de viviendas o construcción de viviendas nuevas, financiadas por importes de casi el ciento por ciento de su valor, y para consolidar o reestructurar la cartera minorista, que si bien hoy la

tiene se canaliza a través de los distintos bancos que actúan como bancos minoristas, ya que actualmente su característica es de banco mayorista.

Es importante destacar que el proyecto establece una modificación a la Carta Orgánica del Banco de la Nación, ya que hasta hoy no puede dar préstamos hipotecarios. ¿Por qué? Porque esa función está reservada al Banco Hipotecario Nacional o a otro tipo de bancos. Se trata de una autolimitación que tiene en su Carta Orgánica el Banco de la Nación Argentina. Pero el proyecto de ley en consideración establece específicamente la facultad de otorgar créditos para adquirir, construir o hacer refacciones de viviendas.

A su vez en el texto legal se determina la creación de un área de crédito hipotecario destinada a operar un programa especial para financiamiento de la vivienda familiar única y de las llamadas viviendas populares, que se van definir a partir de un monto límite de su valor.

Para cumplir con los objetivos a que me he referido, en el sentido de otorgar créditos hipotecarios para adquirir o refaccionar viviendas, al Banco de la Nación Argentina se le van a transferir 100 millones de pesos del producido del Banco Hipotecario Nacional y, además, la renta neta que devengue el fondo fiduciario hasta alcanzar el total de 200 millones, monto que en el futuro el Banco de la Nación destinará a viviendas.

Por eso, cuando se nos dice que el Estado nacional de desentiende de todo lo que es función social, de promover y procurar viviendas familiares y populares, se lo hace de mala fe o porque ni siquiera se han tomado el trabajo de leer el proyecto de ley que estamos a punto de votar, para lo cual contamos con el apoyo de un solo integrante de la bancada de la Unión Cívica Radical —a quien le agradecemos la presencia—, el senador Berhongaray.

**Sr. Branda.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Alasino.** — Sí, como no.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: quisiera que el señor presidente del bloque informara a este Senado cómo va a ser la distribución del fondo fiduciario para las provincias y cuáles son los montos y porcentajes previstos para la distribución.

**Sr. Alasino.** — Si me deja continuar con la exposición, ya voy a llegar al tema que tanto le preocupa al señor senador Branda.

**Sr. Figueroa.** — Perdón, quería hacer la misma pregunta al senador por Entre Ríos.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no les molesta a los señores senadores, se ruega que se dirijan a la Presidencia.

**Sr. Figueroa.** — Perdón, señor presidente.

Lo que quiero preguntar al señor presidente de bloque es cómo se van a distribuir esos fondos entre las provincias más carecientes. De esa forma, sabremos quiénes nos acompañan y quiénes no en la votación de este proyecto tan importante. Lo digo no sólo por Santiago del Estero sino también por el resto de las provincias.

**Sr. Presidente (Menem).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Me hago eco de la preocupación del señor senador por Santiago del Estero por todo el derecho comercial y financiero que introdujo pequeñas pero enormes reformas que han llegado a conmover a toda la infraestructura jurídica de la Argentina en esta cuestión. Sin embargo, al igual que la pregunta del señor senador por Formosa, si me dejan continuar con mi exposición, la contestaré prontamente.

Quiero hacer mención de un tema importante que, básicamente, se ha omitido en este debate, salvo alguna pequeña referencia del señor miembro informante en su exposición general.

Señor presidente: hemos recibido, y recibimos a diario, quejas de gente que viene con el siguiente planteo. Nos dicen que hace diez años que pagan la cuota, que tienen un crédito a veinte años, que la casa que vale 35 y que pagaron 15 ahora vale 85 y por ese importe pagan la cuota. ¿A cuántos señores legisladores les hacen este planteo en cada una de las provincias? A todos. ¿Por qué nadie le podía dar solución al problema? Por la forma en que estaba estructurado el actual Banco Hipotecario.

¿Cuál fue la decisión del Banco Hipotecario? Su decisión fue cobrar o recuperar los créditos y el capital que tenía. Su capital fue lo que había prestado y la garantía su hipoteca. Entonces, la forma de establecer un mecanismo contable que lo hiciera sólido y solvente era fijar un revalúo de las propiedades hipotecadas, darle un valor actual y establecer una cuota acorde a dicho valor. Esto, contablemente, produjo la recuperación del Banco, pero, al mismo tiempo, una serie de injusticias a todo lo largo y ancho del país.

Por ello es que creo que todos los senadores, seguramente, han recibido no menos de cuatro o cinco delegaciones que se quejaban por la enorme cuota que cobraba el banco, totalmente fuera de lo que era la realidad, ya que valuaba la propiedad cinco veces más de lo que la propiedad valía en el mercado.

Señor presidente: este proyecto corrige esta deformación y, si los señores senadores de la oposición estuvieran aquí y votaran el proyecto, podrán decir que, aunque es tarde y están cansados, tienen un instrumento para dar solución a los deudores. Sin embargo, un solo señor senador de la oposición radical nos acompaña en estos momentos.

Los beneficiarios de préstamos individuales anteriores a las diversas operaciones tendrán derecho a requerir al Banco Hipotecario el recálculo de la deuda a fin de que la suma resultante no supere el valor venal de la deuda financiada por, el ex Banco Hipotecario Nacional.

—El señor senador Berhongaray ocupa un lugar en el recinto, fuera de su banca.

**Sr. Alasino.** — Nos abandona el único radical que hasta este momento nos acompañaba.

**Sr. Maya.** — Quiero saber si el comportamiento del señor senador Berhongaray implica apartarse de la banca para pasar a ser espectador o si se va a reintegrar a ella, porque este comportamiento no está previsto en el Reglamento del Senado...

**Sr. Presidente (Menem).** — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Esta norma a la que hago referencia va a satisfacer numerosas presentaciones que diversos clientes deudores del banco han hecho llegar a legisladores nacionales y provinciales, ya que el Banco aplicó defectuosamente las nuevas condiciones de financiación establecidas por el artículo 10 de la ley 24.143, con una suerte de anatocismo. Se entiende por anatocismo una forma de cálculo de intereses tan grave, tan manifiestamente usuraria, que no sólo está prohibida en el Código Civil, totalmente condenada, sino que además está reñida con los principios morales absolutos de la renta del capital.

En cuanto a esta situación a la que hice referencia, por vía del artículo 10 de la ley 24.143 se abrió la puerta para que se aplicara la norma. Se ha producido un desfase, que llevó a una situación de injusticia de algunos clientes o deudores del banco.

La ley establece una norma que suspende por 180 días las intimaciones a escriturar y también las ejecuciones de propiedades como únicas viviendas adquiridas o construidas con créditos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional.

Frente a esta disposición, diversos señores senadores han manifestado sus reparos porque si bien —obviamente— tiene un criterio de justicia, también establece un mecanismo que pone al Banco Hipotecario en riesgo de bajar sensiblemente su valor.

Quizá a través de esta norma, por un lado, conseguimos solucionar una situación; por otro, de alguna manera perjudicamos al conjunto al establecer la posibilidad de que sustancialmente caiga el valor de la institución que se pretende privatizar.

Finalmente, la ley incorpora a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que se le asignan recursos no inferiores al 6 por ciento de la masa que corresponde a la jurisdicción del Estado nacional.

El proyecto intenta avanzar dentro de una situación de justicia. Por otro lado, atiende al establecimiento de los mecanismos de coparticipación teniendo en cuenta el índice repartidor de los recursos.

Cada senador es celoso de la participación que corresponde a su respectiva provincia. Hacemos una alerta en el sentido de que esta asignación pone de alguna manera en riesgo la coparticipación que tendrá cada estado provincial.

Tal vez la norma no debió incluirse en el texto de la ley. Sí debiera ser motivo de preocupación del gobierno nacional en el momento en que reglamente la ley.

Dentro de la parte de ese 50 por ciento que queda en poder del Estado nacional, debería haberse establecido un número, índice o porcentual con destino a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el debido respeto hacia la opinión de los señores diputados que han optado por la primera de las variantes y no por la que prima en el Senado con relación a la defensa de los derechos de las provincias, opinamos que el proyecto debe mantenerse como está, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo, a través del decreto reglamentario, decida cómo y cuándo se establecerá la participación hasta ese adicional del fondo fiduciario y la participación de la Ciudad de Buenos Aires.

Asistimos a la primera privatización distinta que realiza el gobierno justicialista del presi-

dente Carlos Menem. Está íntegramente destinada a la inversión, a la construcción de obras, a la generación de empleo y, fundamentalmente, a que las distintas obras soñadas, esperadas y postergadas por cada una de las provincias argentinas se hagan realidad.

El fondo fiduciario permitirá destinar 100 millones de pesos a la construcción del puente Victoria-Rosario. Por eso hacemos desde mi provincia una defensa tan importante y decidida de esta iniciativa.

En la Argentina empezaremos con esa suma a construir rutas que no comienzan y terminan en la Capital Federal. Por primera vez en el país, empezaremos a hacer las autopistas transversales, sin que el principio y el fin de esas rutas —el alfa y el omega, por decirlo de alguna manera— confluyan en el Obelisco.

Esta vez empezaremos a establecer las rutas y los caminos que no tendrán como centro a nuestra Capital Federal. Se trata de un puente que habrá de posibilitar, tal vez, la conformación definitiva de la ruta bioceánica, que permitirá que la Argentina empiece a tener otro sentido, otro destino y que el moderno federalismo, el de la descentralización, la regionalización, empiece a cobrar vida y comience a ser realidad en nuestro país.

Señor presidente: como no quiero excederme en el término asignado —aunque ya veo que se me ha concedido una prórroga— y dado que se está llamando para votar, solicito que se continúe haciéndolo durante unos minutos más. En caso de que no logremos quórum, pido que se tome lista y que por primera vez se descuenta de la dieta de los señores legisladores la ausencia a esta sesión.

Considero además que debemos proponer a los ausentes no solamente el descuento de la dieta de hoy sino la donación de la dieta del mes —por este mes— a alguna de las instituciones que se ocupan de la atención directa de reclamos sociales; concretamente me refiero a algunas de las organizaciones de bien público, como Caritas, que destinan todo su esfuerzo a atender a los más necesitados.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se declara cerrado el debate.

Por Secretaría se pasará lista al cumplirse cinco minutos de espera.

Mañana tendremos sesión de tablas a partir de las 15.

Se toma nota del pedido del señor senador por Entre Ríos respecto del descuento de dieta a los señores senadores ausentes.

**Sr. Alasino.** — Si tenemos quórum pido que también se traiga al recinto y se ponga en mesa el orden del día 212, señor presidente.

— Se llama para votar.

— Luego de unos minutos:

**Sr. Verna.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Verna.** — Señor presidente: solicito que se amplíe el tiempo de espera previsto para formar quórum, de ser posible, por quince minutos más, habida cuenta de que algunos señores senadores comunicaron que están llegando al Senado.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no hay oposición, vamos a llamar por quince minutos más.

**Sr. Branda.** — No hay oposición...

— Se continúa llamando.

— A las 23 y 39:

**Sr. Presidente (Menem).** — Ha vencido el término establecido para la prórroga del tiempo de espera para formar quórum.

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Solicito que se establezca una nueva prórroga de quince minutos porque hemos tomado conocimiento de que hay algunos señores senadores que están en camino hacia esta Cámara.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se continuará llamando para formar quórum.

— Así se hace.

— Luego de unos minutos:

**Sr. Branda.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

**Sr. Branda.** — Señor presidente, en el caso de que se obtenga el quórum necesario, solicito que se vote por capítulos en atención al tiempo transcurrido y a tratarse de un tema que el bloque Justicialista y los partidos provinciales tienen suficientemente estudiado.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Oyarzún.** — Pido la palabra.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente, solicito permiso para abstenerme.

**Sr. Presidente (Menem).** — Señor senador, debió haberlo solicitado con anterioridad a la votación. Si quiere, puedo hacer constar que usted no ha votado favorablemente.

**Sr. Cafiero.** — En ese caso, formulo moción de reconsideración.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.

**Sr. Oyarzún.** — Señor presidente, solicito que quede constancia del voto negativo del bloque del Movimiento Popular Fueguino.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se deja constancia, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.

**Sr. Manfredotti.** — En el mismo sentido, señor presidente, solicito que conste mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se deja constancia, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Se ha formulado una moción de reconsideración, señor presidente, para que pueda abstenerme en la votación.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Buenos Aires.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La presidencia aclara que se requieren los dos tercios de los votos.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración nuevamente en general, con la abstención del señor senador por Buenos Aires.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consecuencia, se considera que el señor senador por Buenos Aires, Antonio Cafiero, se abstuvo de votar.

**Sr. Sapag.** — Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se deja constancia.

**Sr. Ulloa.** — Señor presidente: yo también deseo que se deje constancia de mi voto negativo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se deja constancia.

Sobre treinta y siete senadores presentes, se registraron cuatro votos por la negativa, una abstención y treinta y dos por la afirmativa. Queda aprobado en general.

Si hay asentimiento, se votará por capítulos.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente (Menem).** — Como hay asentimiento, se votará en particular por capítulos.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (Aplausos.)

### 13

#### VUELTA A COMISION

**Sr. Maya.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Maya.** — Señor presidente, solicito que se altere el plan de labor y se considere sobre tablas el Orden del Día N° 212.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción formulada por el señor senador por Entre Ríos.

No hay quórum para votar, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: pido que aguardemos cinco minutos más para formar el quórum, ya que el señor senador Humada está por llegar.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si hay asentimiento, así se hará...

**Sr. Yoma.** — Que sean quince minutos, señor presidente...

**Sr. Presidente (Menem).** — ¿Por cuánto tiempo aguardaremos, señor senador por Entre Ríos?

**Sr. Alasino.** — Que sean quince minutos.